

**INE/CG272/2018**

**PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO  
DENUNCIANTE: AUTORIDAD ELECTORAL  
DENUNCIADOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO  
INSTITUCIONAL Y OTROS**

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/CG/24/2016, INICIADO CON MOTIVO DE LA VISTA PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, POR LA PROBABLE VIOLACIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL CONSISTENTE EN EL USO INDEBIDO DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA REVISIÓN ENTREGADA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE LAS COMISIONES DE VIGILANCIA EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015, EN CONTRA DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES**

Ciudad de México, 28 de marzo de dos mil dieciocho.

**GLOSARIO**

<b>Comisión Operativa</b>	Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano
<b>Consejo General</b>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
<b>Constitución Federal</b>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
<b>CNV</b>	Comisión Nacional de Vigilancia
<b>DERFE</b>	Dirección Ejecutiva del Registro

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

	Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral
<b>FEPADE</b>	Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
<b>INE</b>	Instituto Nacional Electoral.
<b>LGIPE</b>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
<b>Oficialía</b>	Oficialía Electoral de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral
<b>PRI</b>	Partido Revolucionario Institucional
<b>Reglamento de Quejas</b>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.
<b>Sala Superior</b>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
<b>UNICOM</b>	Unidad Técnica de Servicios de Informática
<b>UTCE</b>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

**RESULTANDO**

**I. VISTA.** El veinte de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la UTCE, el oficio **INE/DERFE/692/2016**<sup>1</sup>, por medio del cual el Director Ejecutivo de la DERFE, hizo del conocimiento de esta autoridad, hechos que a su juicio son contraventores de

---

<sup>1</sup> Visible a fojas 1 a 7, del Legajo 1, del expediente.

la normativa electoral federal, consistentes en el uso indebido de la Lista Nominal de Electores para Revisión entregada a los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, en términos del Acuerdo INE/CG249/2014, aprobado por el Consejo General del INE, con motivo de su difusión en una fuente de acceso público, específicamente, en el sitio de internet denominado *DigitalOcean*.

**II. REGISTRO, ADMISIÓN Y RESERVA DE EMPLAZAMIENTO.**<sup>2</sup> Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, emitido por el Titular de la *UTCE*, se tuvo por recibida la vista proporcionada por el Director Ejecutivo de la *DERFE*, se ordenó su registro con el número de expediente citado al rubro, se admitió a trámite y se reservó lo conducente al emplazamiento hasta que concluyera la etapa de investigación preliminar.

**III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN.** En diversas fechas, se ordenó realizar diligencias de investigación, en los términos que a continuación se sintetizan.

ACUERDO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS <sup>3</sup>			
SUJETO REQUERIDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	RESPUESTA
Director Ejecutivo DERFE	Se le requirió que aportará toda la documentación (actas circunstanciadas, certificaciones, medios magnéticos, etcétera), en original o copia certificada legible, que se encontrará relacionada con la presunta difusión de información de la Lista Nominal de Electores, entregada por este Instituto a los partidos políticos, exclusivamente para su revisión y que presuntamente fue difundida en una fuente pública accesible, específicamente, en el sitio de internet denominado DigitalOcean,	Oficio INE-UT/6548/2016  31/Mayo/2016	08/Julio/2016 <sup>4</sup>

<sup>2</sup> Visible a fojas 22 a 27, del Legajo 1, del expediente.

<sup>3</sup> Visible a fojas 31 a 32, del Legajo 1, del expediente.

<sup>4</sup> Visible a fojas 35 a 50, del Legajo 1, del expediente.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

ACUERDO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS <sup>5</sup>			
SUJETO REQUERIDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	RESPUESTA
PRI	<p>Se le requirió la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Explique, de la forma más clara, que ruta interna siguieron las copias del listado nominal, desde el momento en que fueron entregadas por esta autoridad a su representante ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, hasta el día de hoy, es decir, cuál fue su manejo y resguardo, e</li> <li>➤ Indique, si ha celebrado algún contrato de cualquier índole con <i>Digital Ocean, Inc.</i>, o cualquier otra empresa, para el almacenamiento de la información en internet, con correspondiente al Listado nominal de Electores para Revisión, que esta autoridad entregó a los partidos políticos en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, en cuyo caso se le solicita entregar copia certificada legibles del referido contrato.</li> </ul>	<p>Oficio INE-UT/7413/2016  14/Junio/2016</p>	17/Junio/2016 <sup>6</sup>

ACUERDO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS <sup>7</sup>			
SUJETO REQUERIDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	RESPUESTA
Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE	Se le requirió para que, en apoyo de esta UTCE, se sirviera requerir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que, a la brevedad, informe si dentro de sus registros cuenta con el domicilio fiscal de la persona moral denominada <i>Digital Ocean, Inc.</i> ( <a href="http://www.digitalocean.com">www.digitalocean.com</a> ).	<p>Oficio INE-UT/8270/2016  01/Julio/2016</p>	12/Julio/2016 <sup>8</sup>
Secretaría de Gobernación	Se requirió para que por su conducto solicitará al Titular de la Policía Cibernética, que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, proporcionará el domicilio que tuviera registrado de la persona moral denominada <i>Digital Ocean, Inc.</i> ( <a href="http://www.digitalocean.com">www.digitalocean.com</a> ).	<p>Oficio INE-UT/8271/2016  04/Julio/2016</p>	07/Julio/2016 <sup>9</sup>

<sup>5</sup> Visible a fojas 225 a 227, del Legajo 1, del expediente.

<sup>6</sup> Visible a fojas 1378 a 1379, del Legajo 3, del expediente.

<sup>7</sup> Visible a fojas 1723 a 1729, del Legajo 3, del expediente.

<sup>8</sup> Visible a foja 1753, del Legajo 3, del expediente.

<sup>9</sup> Visible a foja 1744, del Legajo 3, del expediente.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

<b>ACUERDO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS<sup>7</sup></b>			
<b>SUJETO REQUERIDO</b>	<b>DILIGENCIA</b>	<b>OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN</b>	<b>RESPUESTA</b>
Procuraduría Federal del Consumidor	Se requirió para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, proporcionará el domicilio que tuviera registrado de la persona moral denominada <i>Digital Ocean, Inc.</i> ( <a href="http://www.digitalocean.com">www.digitalocean.com</a> ).	Oficio INE-UT/8272/2016  04/Julio/2016	07/Julio/2016 <sup>10</sup>
Registro Público de la Propiedad y de Comercio	Se requirió para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación del presente proveído, proporcionará el domicilio que tuviera registrado de <i>Digital Ocean, Inc.</i> ( <a href="http://www.digitalocean.com">www.digitalocean.com</a> ).	Oficio INE-UT/ 8273/2016  01/Julio/2016	05/Julio/2016 <sup>11</sup>
PRI	Se requirió proporcionara la siguiente información:  1) Explicara de la forma más clara, qué ruta interna siguieron las copias del listado nominal, desde el momento en que le fueron entregadas a José Mora León, persona autorizada por la representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Electoral del estado de Sinaloa, en el marco del Proceso Electoral 2015-2016, hasta el día de hoy, es decir, cuál fue su manejo y resguardo, e  2) Indicará, si había celebrado algún contrato de cualquier índole con la persona moral denominada <i>Digital Ocean, Inc.</i> , o cualquier otra empresa, para el almacenamiento de la información en Internet, correspondiente al Listado Nominal de Electores para revisión, que se entregó a los partidos políticos en el marco del Proceso Electoral Local 2015-2016, en Sinaloa, en cuyo caso se le solicita entregar copia certificada legible del referido contrato;	Oficio INE-UT/8274/2016  04/Julio/2016	07/Julio/2016 <sup>12</sup>

<sup>10</sup> Visible a foja 1747, del Legajo 3, del expediente.

<sup>11</sup> Visible a foja 1743, del Legajo 3, del expediente.

<sup>12</sup> Visible a fojas 1748 a 1749, del Legajo 3, del expediente.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

ACUERDO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS <sup>13</sup>			
SUJETO REQUERIDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	RESPUESTA
Titular de la División Científica de la Policía Federal	Se requirió informará si había realizado algún peritaje relacionado con la publicación del listado nominal de electores en la página de internet <b>DIGITAL OCEAN</b> y, en su caso, proporcionará la información que legalmente estuviera facultado para compartir.	Oficio INE-UT/9008/2016  20/Julio/2016	23/Julio/2016 <sup>14</sup>
ACUERDO DE VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS <sup>15</sup>			
DILIGENCIA		NOTIFICACIÓN	
Mediante acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, se hizo del conocimiento de las partes involucradas que se suspendían las labores del Instituto, dentro del periodo comprendido del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis al seis de enero de dos mil diecisiete, ello, en atención al periodo vacacional.			

**IV. EMPLAZAMIENTO.**<sup>16</sup> El diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó emplazar a las partes involucradas a efecto de que expresaran lo que a su derecho conviniera y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes. Asimismo, se requirió a Oglá Rita Bojórquez Gámez, Jesús Gonzalo Estrada Villareal y José Mora León, a fin de que proporcionaran la información concerniente a su situación fiscal; además, se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, facilitara la documentación referente a la situación fiscal de dichos sujetos.

El proveído de mérito se notificó de la siguiente manera:

EMPLAZAMIENTO				
SUJETO EMPLAZADO	OFICIO	CITATORIO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO
PRI	INE-UT/4038/2017	23/Mayo/2017	24/Mayo/2017	01/Junio/2017 <sup>17</sup>

<sup>13</sup> Visible a fojas 1761 a 1765, del Legajo 3, del expediente.

<sup>14</sup> Visible a foja 1768, del Legajo 3, del expediente.

<sup>15</sup> Visible a fojas 1782 a 1784, del Legajo 3, del expediente.

<sup>16</sup> Visible a fojas 1787 a 1800, del Legajo 3, del expediente.

<sup>17</sup> Visible a fojas 1835 a 1839, del Legajo 3, del expediente.

**CONSEJO GENERAL  
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

EMPLAZAMIENTO				
SUJETO EMPLAZADO	OFICIO	CITATORIO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO
Ogla Rita Bojórquez Gámez	INE-UT/4040/2017	Sin citatorio	25/Mayo/2017	01/Junio/2017 <sup>18</sup>
Jesús Gonzalo Estrada Villareal	INE-UT/4041/2017	Sin citatorio	25/Mayo/2017	01/Junio/2017 <sup>19</sup>
José Mora León	INE-UT/4039/2017	Sin citatorio	25/Mayo/2017	01/Junio/2017 <sup>20</sup>

**V. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.**<sup>21</sup> Por acuerdo de dos de octubre de dos mil diecisiete, se requirió la siguiente información:

ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE			
SUJETO REQUERIDO	DILIGENCIA	OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN	RESPUESTA
Director Jurídico INE	<p>Toda vez que el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, personal de este Instituto denunció ante la FEPADE, que se había identificado una base de datos en los servicios de la “Nube” del proveedor <i>DigitalOcean</i>, IP 162.243.158.165, puerto 27017, sobre datos que podrían corresponder a electores mexicanos, a la cual, le correspondió el número de acuerdo de investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/0000295/2016, y en la cual se encontraba coadyuvando personal de la Dirección Jurídica de este Instituto, se requirió al Titular de dicha área informará lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ El estado procesal que guardaba dicha indagatoria.</li> <li>➤ Si es que dentro de la indagatoria en comento se autorizó al personal de la UTCE a fin de tener acceso al mismo, una vez</li> </ul>	<p>Oficio INE-UT/7572/2017  03/Octubre/2017</p>	19/Octubre/2017 <sup>22</sup>

<sup>18</sup> Visible a fojas 1863 a 1866, del Legajo 3, del expediente.

<sup>19</sup> Visible a fojas 1841 a 1846, del Legajo 3, del expediente.

<sup>20</sup> Visible a fojas 1851 a 1857, del Legajo 3, del expediente.

<sup>21</sup> Visible a fojas 1876 a 1879, del Legajo 3, del expediente.

<sup>22</sup> Visible a foja 1884, del Legajo 3, del expediente.

**CONSEJO GENERAL  
EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

<b>ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE</b>			
<b>SUJETO REQUERIDO</b>	<b>DILIGENCIA</b>	<b>OFICIO Y FECHA DE NOTIFICACIÓN</b>	<b>RESPUESTA</b>
	judicializada la carpeta de investigación atinente. ➤ En su caso, el estado que guardaba la solicitud de autorización.		
FEPADE	En atención a que el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, personal de este Instituto denunció ante la FEPADE, que se había identificado una base de datos en los servicios de la "Nube" del proveedor <i>DigitalOcean</i> , IP 162.243.158.165, puerto 27017, sobre datos que podrían corresponder a electores mexicanos, a la cual, le correspondió el número de acuerdo de investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/0000295/2016, se requirió al Titular de dicha Fiscalía, informará el estado procesal que guardaba dicha indagatoria.	Oficio INE-UT/7573/2017  04/Octubre/2017	

**VI. VISTA A LAS PARTES CON LA INFORMACIÓN RECABADA MEDIANTE ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE.** Derivado de la información obtenida de los requerimientos efectuados al Director Jurídico del INE y al Fiscal Especializado en Atención en Delitos Electorales, mediante Acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete<sup>23</sup>, se ordenó poner a la vista de las partes dicha documentación, para que manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera. Dicho proveído se notificó de la siguiente manera:

<b>VISTA CON INFORMACIÓN RECABADA MEDIANTE ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE</b>				
<b>SUJETO AL CUAL SE LE DIO VISTA</b>	<b>OFICIO</b>	<b>CITATORIO</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN</b>	<b>CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO</b>
PRI	INE-UT/8966/2017	Sin citatorio	01/Diciembre/2017	08/Diciembre/2017 <sup>24</sup>
Ogla Rita Bojorquez Gamez	INE-UT/8963/2017	Sin citatorio	05/Diciembre/2017	No contestó
Jesús Gonzalo Estrada Villareal	INE-UT/8964/2017	Sin citatorio	05/Diciembre/2017	No contestó

<sup>23</sup> Visible a fojas 1885 a 1888, del Legajo 3, del expediente.

<sup>24</sup> Visible a foja 1906, del Legajo 3, del expediente.



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

VISTA CON INFORMACIÓN RECABADA MEDIANTE ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE				
SUJETO AL CUAL SE LE DIO VISTA	OFICIO	CITATORIO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO
José Mora León	INE-UT/8965/2017	Sin citatorio	05/Diciembre/2017	No contestó

**VII. VISTA PARA ALEGATOS.** El diecisiete de enero de dos mil dieciocho<sup>25</sup>, se ordenó poner a la vista de las partes las constancias, para que en vía de alegatos, manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera, de conformidad con lo siguiente:

VISTA PARA ALEGATOS				
SUJETO AL CUAL SE LE DIO VISTA	OFICIO	CITATORIO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO
PRI	INE-UT/0585/2018	Sin citatorio	19/Enero/2018	26/Enero/2018 <sup>26</sup>
Ogla Rita Bojorquez Gamez	INE-UT/0586/2018	Sin citatorio	23/Enero/2018	24/Enero/2018 <sup>27</sup>
Jesús Gonzalo Estrada Villareal	INE-UT/0587/2018	Sin citatorio	23/Enero/2018	No contestó
José Mora León	INE-UT/0588/2018	Sin citatorio	23/Enero/2018	No contestó

**VIII. EMPLAZAMIENTO A NUEVOS SUJETOS INVOLUCRADOS.** Del análisis a las respuestas efectuadas por Ogla Rita Bojorquez Gamez, Jesús Gonzalo Estrada Villareal y José Mora León, se deprendió la posible participación de Teresa de Jesús Nieto Ríos, José Alberto Salas Beltrán y César Manuel Ochoa Salazar, integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Sinaloa (al momento en que sucedieron los hechos), en el presunto uso indebido de la Lista Nominal de Electores para Revisión entregada a los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.

En ese sentido, por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil dieciocho<sup>28</sup>, se determinó emplazar a dichos sujetos de derecho, para que manifestaran lo que a

<sup>25</sup> Visible a fojas 1907 a 1910, del Legajo 3, del expediente.

<sup>26</sup> Visible a fojas 1952 a 1953, del Legajo 3, del expediente.

<sup>27</sup> Visible a fojas 1964 a 1965, del Legajo 3, del expediente.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

su derecho correspondiera respecto a los hechos motivo de investigación dentro del procedimiento en que se actúa. Dicho proveído fue notificado conforme a lo siguiente:

EMPLAZAMIENTO				
SUJETO EMPLAZADO	OFICIO	CITATORIO	FECHA DE NOTIFICACIÓN	CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO
Teresa de Jesús Nieto Ríos	INE/SIN/JLE-VS/087/2018	26/Enero/2018	29/Enero/2018	06/Febrero/2018 <sup>29</sup>
José Alberto Salas Beltrán	INE/SIN/JLE-VS/088/2018	Sin citatorio	26/Enero/2018	02/Febrero/2018 <sup>30</sup>
César Manuel Ochoa Salazar	INE/SIN/JLE-VS/089/2018	Sin citatorio	29/Enero/2018	06/Febrero/2018 <sup>31</sup>

**IX. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.** Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho<sup>32</sup>, se requirió tanto al PRI como a la Dirección de Servicios Legales del INE, proporcionaran los domicilios de Teresa de Jesús Nieto Ríos, José Alberto Salas Beltrán y César Manuel Ochoa Salazar, para efectos de su localización.

**X. VISTA PARA ALEGATOS.** El siete de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó poner a la vista de las partes las constancias, para que en vía de alegatos, manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera, de conformidad con lo siguiente:

---

<sup>28</sup> Visible a fojas 1920 a 1932, del Legajo 3, del expediente.

<sup>29</sup> Visible a fojas 2127 a 2133, del Legajo 3, del expediente.

<sup>30</sup> Visible a fojas 2134 a 2140, del Legajo 3, del expediente.

<sup>31</sup> Visible a fojas 2141 a 2143, del Legajo 3, del expediente.

<sup>32</sup> Visible a fojas 1946 a 1948, del Legajo 3, del expediente.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

<b>VISTA PARA ALEGATOS</b>				
<b>SUJETO AL CUAL SE LE DIO VISTA</b>	<b>OFICIO</b>	<b>CITATORIO</b>	<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN</b>	<b>CONTESTACIÓN</b>
PRI	INE-UT/1304/2018	08/Febrero /2018	09/Febrero/2018	19/Febrero/2018 <sup>33</sup>
Ogla Rita Bojórquez Gámez	INE/SIN/JLE-VS/0134/2018	No se dejó citatorio porque se notificó personalmente	08/Febrero/2018	No contestó
Jesús Gonzalo Estrada Villareal	INE/SIN/JLE-VS/0135/2018	No se dejó citatorio porque se notificó personalmente	08/Febrero/2018	No contestó
José Mora León	INE/SIN/JLE-VS/0136/2018	No se dejó citatorio porque se notificó personalmente	08/Febrero/2018	No contestó
Teresa de Jesús Nieto Ríos	INE/SIN/JLE-VS/0137/2018	08/Febrero /2018	09/Febrero/2018	13/Febrero/2018 <sup>34</sup>
José Alberto Salas Beltrán	INE/SIN/JLE-VS/0138/2018	08/Febrero /2018	09/Febrero/2018	No contestó
César Manuel Ochoa Salazar	INE/SIN/JLE-VS/0139/2018	09/Febrero /2018	12/Febrero/2018	No contestó

Cabe precisar que se realizó una segunda vista de alegatos a Teresa de Jesús Nieto Ríos, mediante oficio INE/SIN/JLE-VS/0152/2018, notificado el doce de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se le corrió traslado con las contestaciones al emplazamiento por parte de César Manuel Ochoa Salazar y José Alberto Salas Beltrán, toda vez que en el escrito presentado por el primero de los sujetos

<sup>33</sup> Visible a fojas 2144 a 2145, del Legajo 3, del expediente.

<sup>34</sup> Visible a fojas 2176 a 2175, del Legajo 3, del expediente.

referidos se advirtió una imputación directa sobre los hechos controvertidos en el presente asunto. La ciudadana referida no dio contestación puntual a dicha vista.

**XI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCIÓN.** Una vez obtenida la información señalada en el antecedente previo, y al no existir diligencias de investigación pendientes de practicar, se ordenó la reformulación del Proyecto de Resolución, en los términos establecidos por el señalado órgano colegiado.

**XII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.** En la Trigésima Sesión Extraordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, la Comisión de Quejas y Denuncias del *INE* aprobó el Proyecto de Resolución, en lo general por unanimidad de votos de sus integrantes y, en lo particular, respecto a la sanción impuesta al partido político denunciado, por mayoría de votos de los Consejeros Maestra Claudia Beatriz Zavala Pérez y Doctor Benito Nacif Hernández, con el voto en contra de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.

## **C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO. COMPETENCIA.** El Instituto Nacional Electoral es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, Base V, Apartados A, primero y segundo párrafos, y B, párrafo primero, inciso a), numerales 3 y 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, párrafos 1, inciso c), y 2; 32, párrafo 2, inciso a), fracción III; 35; 44, párrafo 1, incisos j) y aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, párrafos 1, fracción I y 2, fracción I, inciso a), 45, 51, 52, 53, 54 y 55, del Reglamento de Quejas y Denuncias, por tratarse de un procedimiento sancionador ordinario iniciado con motivo de la vista proporcionada por la *DERFE*, por el presunto uso indebido de la Lista Nominal de Electores para Revisión entregada a los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, en términos del Acuerdo INE/CG249/2014, aprobado por el Consejo General del *INE*, así como la entregada a los

representantes de los partidos políticos ante los Organismos Públicos Locales Electorales en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016, con motivo de su difusión en una fuente de acceso público, específicamente, en el sitio de internet denominado *DigitalOcean*.

## SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO

Este Consejo General del INE advierte que, por cuanto hace a las conductas imputadas a Oglá Rita Bojórquez Gámez, otrora representante del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, debe **SOBRESEERSE** el procedimiento, toda vez que durante la sustanciación de éste se tuvo conocimiento de su deceso, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 466, párrafos 2, inciso a), y 3, de la LGIPE, en relación con el diverso 46, párrafo 3, fracción IV, del Reglamento de Quejas.

En la normativa legal y reglamentaria antes precisada se establece lo siguiente:

### LGIPE

“...

#### **Artículo 466.**

[...]

2. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

a) Habiendo sido admitida, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia;

...

3. El estudio de las causas de improcedencia o sobreseimiento de la queja o denuncia se realizará de oficio. En caso de advertir que se actualiza una de ellas, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva elaborará un Proyecto de Resolución por el que se proponga el desechamiento o sobreseimiento, según corresponda.

...”

### REGLAMENTO DE QUEJAS

“...

#### **Artículo 46**

[...]

3. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

[...]

IV. El fallecimiento del sujeto al que se le atribuye la conducta denunciada.

...”

La normativa transcrita establece los supuestos por los que la queja o denuncia podría ser improcedente y, consecuentemente, deberá desecharse, por otra parte, también prevé los supuestos que podrían actualizarse posterior a la admisión del procedimiento, teniendo como consecuencia el sobreseimiento de la queja o denuncia.

Ahora bien, lo procedente cuando se actualiza dicha causal es concluir el procedimiento mediante una resolución de desechamiento si el elemento sustancial se surte antes de la admisión del mismo o, en su caso, una resolución de **sobreseimiento si el procedimiento hubiera sido admitido, como es el caso.**

Resulta necesario precisar que, la naturaleza del régimen sancionador electoral consiste en establecer, conocer y sancionar aquellas conductas que impliquen una transgresión el marco Constitucional y legal comicial.

En ese orden de ideas, el procedimiento bajo análisis se integró y admitió por la probable violación a la normativa electoral consistente en el uso indebido de la Lista Nominal de Electores para Revisión entregada a los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como la entregada a los representantes de los partidos políticos ante los Organismos Públicos Locales Electorales en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016, con motivo de su difusión en una fuente de acceso público, específicamente, en el sitio de internet denominado *Digital Ocean*.

No obstante, durante la sustanciación del procedimiento se tuvo conocimiento del deceso de Oglá Rita Bojórquez Gámez, otrora Representante del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, teniendo como consecuencia la imposibilidad jurídica de poder continuar con éste, por cuanto hace a las faltas imputadas a dicha persona. En la inteligencia que el objeto del procedimiento, consistente en la investigación y, en su caso, sanción de una conducta irregular, lo cual no podría materializarse y ejecutarse, derivado del fallecimiento de la persona a la que se le atribuían determinados hechos.

Lo expuesto, en virtud de que esta autoridad requirió al PRI, a efecto de que informara si Oglá Rita Bojórquez Gámez continuaba laborando para dicho instituto político en el Estado Sinaloa. En su oportunidad, el PRI informó a esta autoridad

nacional electoral el deceso de la aludida persona y adjuntó copia simple del acta de defunción respectiva.

En consideración a ello, el titular de la UTCE requirió a la Dirección del Registro Civil del Estado de Sinaloa, a fin de que informara si en los archivos de registros a su cargo, se encuentra el acta de defunción o algún dato que condujera a confirmar el fallecimiento de Ogla Rita Bojórquez Gámez.

Para corroborar su información, la titular del Registro Civil de Sinaloa, anexó copia certificada del acta de defunción.

Dichas probanzas, **tienen el carácter de documentales públicas**, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción I, y 27, párrafos 1 y 2, del Reglamento de Quejas, **cuyo valor probatorio es pleno**, por haber sido expedido por una autoridad, en el ejercicio de sus funciones, y no ser contradictorias con elemento alguno.

En consecuencia, de la valoración en conjunto de las mismas, de conformidad a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se tiene la certeza del fallecimiento de Ogla Rita Bojórquez Gámez.

En ese sentido, lo procedente conforme a derecho es **sobreseer** el procedimiento al rubro identificado, por cuanto hace a las conductas imputadas a Ogla Rita Bojórquez Gámez, de conformidad con lo establecido en los artículos 466, párrafos 2, inciso a), y 3, de la LGIPE, en relación con el diverso 46, párrafo 3, fracción IV, del Reglamento de Quejas.

## **TERCERO. ESTUDIO DEL FONDO**

### **1. EXCEPCIONES Y DEFENSAS**

Dentro de la etapa de emplazamiento y vista de alegatos, **los denunciados** hicieron valer las siguientes excepciones y defensas:

Alejandro Muñoz García,<sup>35</sup> representante suplente del **PRI** ante el Consejo General del INE, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó que:

- El PRI, como Partido Político Nacional, cuenta con treinta y dos Comités Directivos Estatales, en cada una de las entidades federativas que conforman la República Mexicana. Para el Estado de Sinaloa se cuenta con representación, tanto en la Comisión Local de Vigilancia, como en el Organismo Público Electoral, y dichos representantes son sabedores de las obligaciones que deben observar en el manejo de la información que las Autoridades Electorales administrativas les proporcionan. Por lo que al existir ámbitos de responsabilidades, los representantes estatales son los agentes en el manejo de la información que en el ámbito de sus atribuciones la autoridad les proporciona.
- Los hechos denunciados, por si mismos, no pueden ser considerados como elemento suficiente para acreditar un uso indebido de la Lista Nominal de Electores, ya que la simple circunstancia de que dicho listado hubiere sido ubicado en una página de internet, no implica que la misma hubiera sido almacenada por el PRI, ya que dicha base de datos fue utilizada para el análisis y revisión a la que tienen derecho los partidos políticos, conforme a la Legislación Electoral, sin que en ningún momento se haya autorizado darle un trato distinto al permitido por la normativa.
- No se acredita que el PRI no hubiera atendido las medidas necesarias para salvaguardar la Lista Nominal de Electores, toda vez que de los protocolos realizados por la autoridad electoral, no se desprende que dicha información se encontrara a disposición libre para ser consultada por cualquier ciudadano, ello, en razón de que tuvo que ser un experto en informática el que hiciera del conocimiento al INE, sobre la publicación de la base de datos en una página de internet.

---

<sup>35</sup> Visible a fojas 1835 a 1839, del Legajo 3, del expediente.



- No se acredita el número de consultas realizadas a la página de internet, así como que dichas consultas se realizaron de distintas computadoras, razón por la cual, no se puede acreditar que existió un manejo indebido de la información, pues no existen indicios de que los datos personales de los ciudadanos fueran consultados por personas ajenas al PRI o por sujetos no autorizados para ello, violándose la secrecía y confidencialidad de los datos contenidos en el Padrón Electoral y Listado Nominal que para su revisión se entregó al citado partido político.
- El PRI no fue quien publicó o autorizó el almacenamiento de la información, por lo cual, la autoridad electoral no puede a base de suposiciones, afirmar que los datos de los ciudadanos fueron utilizados de forma incorrecta y mucho menos que se causó un agravio a sus titulares, pues el hecho de que hayan aparecido en una página de internet, no implica que el PRI o sus representantes realizaron o consintieron su reproducción.

**Jesús Gonzalo Estrada Villareal**<sup>36</sup>, representante propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Sinaloa, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó lo siguiente:

- Como titular de la Secretaría Jurídica del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, no cuenta con ninguna atribución para llevar a cabo la revisión de cualquier material electoral, como pudiera ser la Lista Nominal de Electores proporcionada por el INE.
- No es responsable por el uso indebido del padrón electoral en cualquiera de sus versiones, ya que su función como tenedor del mismo, inicia en el momento de la recepción formal del material y concluye con la entrega que se realiza a la Secretaría de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI, respecto de la lista nominal en versión impresa, y a la Dirección de Informática del citado Comité, por lo que concierne a la versión en formato digital.

---

<sup>36</sup> Visible a fojas 1841 a 1846, del Legajo 3, del expediente.

- En ese sentido, indica que el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, entregó el dispositivo de almacenamiento digital que contenía la lista nominal de electores con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, a Teresa de Jesús Nieto Ríos, Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, y el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, entregó la Lista Nominal de Electores en su versión impresa, a José Alberto Salas Beltrán, titular de la Secretaría de Acción Electoral del citado Comité Directivo, por lo cual, su deber de cuidado se vio concluido, sin que pudiera imputarse alguna responsabilidad por el uso doloso, negligente, indebido o diverso del estrictamente permitido por la normatividad en la materia. Al respecto anexa copia certificada de los documentos en donde se hace constar dichas entregas.
- Por otro lado, manifiesta que del material probatorio recabado por la autoridad electoral dentro del presente procedimiento, no se desprende que haya participado en el uso indebido de la Lista Nominal de Electores, pues no es titular de alguno de los nombres, identificaciones de usuario o direcciones informáticas que se estiman como indebidas, motivo por el cual, manifiesta que en el eventual escenario de que resultara sancionado, dicha medida sería indebida y atentaría en contra de los principios de legalidad y seguridad jurídica que constitucionalmente le asisten.

**José Mora León**<sup>37</sup>, Abogado Asesor del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó lo siguiente:

- El cinco de febrero de dos mil dieciséis, se constituyó en las oficinas del INE en Sinaloa, en donde se le hizo entrega de un dispositivo electrónico denominado USB, que contenía los mecanismos informáticos para el descifrado del Listado Nominal de Electores de dicha entidad federativa.
- No obstante lo anterior, señala que no es responsable del presunto uso indebido del Padrón Electoral en cualquiera de sus versiones, toda vez que su función como tenedor del mismo inició en el momento de la recepción

---

<sup>37</sup> Visible a fojas 1851 a 1857, del Legajo 3, del expediente.

formal y concluyó con la entrega del mismo, efectuada a Jesús Gonzalo Estrada Villareal, quien es su jefe inmediato.

- Precisa que tiene conocimiento de que Jesús Gonzalo Estrada Villareal hizo entrega del material objeto de controversia en el presente procedimiento a la Secretaría de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, respecto de las listas nominales en su versión impresa, y a la Dirección de Informática del citado Comité, en su versión digital.
- Asimismo, indica que Jesús Gonzalo Estrada Villareal, entregó el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, el dispositivo de almacenamiento digital que contenía la lista nominal de electores con corte al quince de enero de dos mil dieciséis a Teresa de Jesús Nieto Ríos, Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, y el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, entregó la Lista Nominal de Electores en su versión impresa, a José Alberto Salas Beltrán, titular de la Secretaría de Acción Electoral del citado Comité Directivo,.
- Por otro lado, manifiesta que del material probatorio recabado por la autoridad electoral dentro del presente procedimiento, no se desprende que haya participado en el uso indebido de la Lista Nominal de Electores, pues no es titular de alguno de los nombres, identificaciones de usuario o direcciones informáticas que se estiman como indebidas,.
- Por último, señala que la Secretaría Jurídica para la cual labora no tiene dentro de su ámbito de facultades estatutarias, ninguna atribución para la práctica de revisiones de cualquier tipo de material electoral, como pudieran ser los listados nominales de electores proporcionados por el *INE*.

**César Manuel Ochoa Salazar,**<sup>38</sup> Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó lo siguiente:

---

<sup>38</sup> Visible a fojas 2141 a 2143, del Legajo 3, del expediente.

- Que el trece de febrero de dos mil quince, recibió por parte de Oglá Rita Bojórquez Gámez, en su carácter de representante del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, el dispositivo de almacenamiento digital que contenía la Lista Nominal de Electores para Revisión, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
- En ese sentido, señala que no es responsable del uso indebido del Padrón Electoral en cualquiera de sus versiones, toda vez que su función como tenedor del mismo inició al momento de la recepción formal del material y concluyó con la entrega del dispositivo que contenía la lista nominal de electores con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, a Teresa de Jesús Nieto Ríos, Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, por lo que su deber de cuidado se vio concluido con dicha entrega, sin que pueda imputársele el uso doloso, negligente, indebido o diverso del estrictamente permitido por la normatividad electoral.
- Por último, precisa que ninguna de las constancias que conforman el expediente en que se actúa pone en evidencia algún elemento que acredite su participación en el presunto alojamiento de información en el sitio de internet *Digital Ocean*.

**Teresa de Jesús Nieto Ríos,**<sup>39</sup> Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, al momento de dar contestación al emplazamiento, manifestó lo siguiente:

- El deber de guardar la estricta confidencialidad del Padrón Electoral y de las Listas Nominales, previsto en el artículo 126 de la LGIPE, se encuentra dirigida en primera instancia hacia el INE y sus servidores públicos.
- Que la presunta entrega que se le hizo de la Lista Nominal de Electores, se ajustó a lo previsto por la normatividad electoral, con el único objetivo de su revisión, sin que existiera algún elemento o hecho en el sentido de haberle dado a la información respectiva un trato diferente al que la ley contempla.

---

<sup>39</sup> Visible a fojas 2127 a 2133, del Legajo 3, del expediente.

- Tanto Jesús Gonzalo Estrada Villarreal como José Mora León, mencionan que el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, le entregaron un dispositivo de almacenamiento que supuestamente contenía la Lista Nominal de Electores para el Proceso Electoral Local 2015-2016, en su versión digital, mientras que Ogla Rita Bojorquez Gámez, no hace señalamiento alguno referente a precisar que se le hizo entrega del archivo digital que contenía el citado Listado.
- Para realizar la presunta difusión de las Listas Nominales de Electores en un sitio de internet, resultaba indispensable contar con una “llave pública” y que ésta fuera registrada ante la Junta Local Ejecutiva por un funcionario previamente acreditado por el PRI y habilitado para tal efecto por el área correspondiente de la DERFE, acreditación y habilitación que en ningún momento recibió, por lo cual, el hecho de habersele entregado el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, un dispositivo “USB” que supuestamente contenía la lista nominal de electores para el Proceso Electoral 2015-2016, no implica que se le haya hecho entrega de la “llave pública” correspondiente.
- El hecho de que se le vinculara al procedimiento sancionador en que se actúa, derivó de la referencia que hizo Jesús Gonzalo Estrada Villareal, al momento de dar respuesta al emplazamiento formulado por la UTCE, en el sentido de establecer que *...el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, entregó el dispositivo de almacenamiento digital que contenía la lista nominal de electores con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, a Teresa de Jesús Nieto Ríos, Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa...*, de lo cual no se desprende que haya recibido la llave pública indispensable para tener acceso a los archivos digitales, y consiguientemente su difusión en una fuente de acceso público, actos que niega absolutamente.
- De la fecha de entrega de los archivos digitales a Ogla Rita Bojorquez Gámez (trece de febrero de dos mil quince) y a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal (quince de febrero de dos mil dieciséis), así como de la entrega de las respectivas llaves públicas (seis de febrero de dos mil quince y cinco de

febrero de dos mil dieciséis) hasta la fecha en la que le fue entregado el dispositivo de almacenamiento “USB”, que supuestamente contenía la lista nominal el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, paso un lapso de tiempo considerable, sin que hubiere quedado claro el uso que se dio a dicha información.

- Asimismo, indica que no se precisa la hora, minuto y segundo en que la autoridad electoral encontró en el sitio de internet denominado DigitalOcean, las listas nominales entregadas a las personas antes citadas, limitándose a señalar que fue el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el día en que supuestamente se subió la información al sitio de internet denominado DigitalOcean.
- De igual forma, señala que no existe claridad respecto de las circunstancias de modo en que supuestamente se difundió la información, ya que la autoridad electoral, únicamente señala que se encontró en la dirección IP 162.243.158.165, puerto 27017, la información materia del presente procedimiento, sin embargo no señala si el acceso a dicha dirección y puerto fue libre o requería candado de seguridad para acceder a ella, ni tampoco se precisa el número de personas que supuestamente tuvieron o pudieron tener acceso a la información difundida, como tampoco se especifica en que consistió el supuesto uso indebido de la información referida.
- Por otra parte, indica (sin afirmar que lo hubiere realizado) que subir la información al sitio de internet DigitalOcean, fue una manera de compartir la información con el personal del PRI para su revisión, sin que existiera algún señalamiento o artículo que prohibiera subir la información a internet.
- Por último, menciona que no existe indicio alguno concerniente a demostrar que hubiere tenido acceso tanto a la llave pública como al archivo digital correspondiente, del cual se pudiera desprender la conducta que se le pretende imputar, por lo cual, manifiesta que no se establecen por parte de la DERFE, las condiciones de modo, tiempo y oportunidad, en la que sucedieron los hechos, de ahí que la denuncia no satisfaga a plenitud con el requisito de sustentación relacionada con su vinculación a los hechos

denunciados, resultando aplicable el principio de presunción de inocencia, ante la inexistencia de pruebas para demostrar las aseveraciones del denunciante. Al respecto, cita las siguientes jurisprudencias:

***CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.***

***PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.***

***PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.***

Al dar respuesta a la vista para alegatos, manifestó lo siguiente:

- Que en atención a su cargo como Directora de Informática, es la persona facultada para la recepción de los dispositivos de almacenamiento digital que contienen los listados nominales de electores que con motivo de los procesos federales y locales produce y distribuye el INE; sin embargo, no acepta responsabilidad alguna por el presunto uso indebido del padrón electoral en cualquiera de sus versiones, toda vez que su función como tenedora del mismo, se circunscribe a la revisión del referido listado en los términos que dispone la Ley.
- Que el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, recibió por parte de Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, Secretario Jurídico del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, el dispositivo de almacenamiento digital que contenía la lista nominal de electores para revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, junto con la llave pública para tener acceso a dichos archivos digitales.
- Por otro lado, señala que debido a la premura con la que se elaboró el escrito dando respuesta al emplazamiento formulado por la UTCE, se insertó en el mismo una aseveración incorrecta, en el sentido de establecer que no

había recibido por parte de Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, la llave pública para tener acceso a los archivos comprendidos en el dispositivo digital que contenía la Lista Nominal para revisión, siendo que la información correcta es que dicho ciudadano sí me entregó la llave referida, así como el dispositivo de almacenamiento digital.

- Por último, aduce que el material que le fue entregado fue utilizado exclusivamente para su revisión, sin que se hubiese incurrido en un manejo irregular o con finalidades distintas a las contempladas por la ley, lo cual se puede corroborar con las constancias que obran en el expediente, en las que en modo alguno se desprende su participación en el presunto alojamiento del Padrón Electoral en el sitio de internet *Digital Ocean*, del cual no tenía conocimiento de su existencia.

**José Alberto Salas Beltrán**,<sup>40</sup> Titular de la Secretaría de Acción Electoral Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, al momento de dar contestación al emplazamiento y en vía de alegatos, manifestó lo siguiente:

- El deber de guardar la estricta confidencialidad del Padrón Electoral y de las Listas Nominales, previsto en el artículo 126 de la LGIPE, se encuentra dirigida en primera instancia hacia el INE y sus servidores públicos.
- La entrega que se le hizo de la Lista Nominal de Electores, cuando ocupaba el cargo de Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, se ajustó a las Leyes Electorales, así como a lo dispuesto en los Estatutos del partido político en comento, con el único objetivo de hacer la revisión correspondiente, sin que existiera algún elemento o hecho imputable en el sentido de haberle dado a la información respectiva un trato diferente para el que fue creado.
- Para realizar la presunta difusión de las Listas Nominales de Electores en un sitio de internet, resultaba indispensable contar con una “llave pública” y que ésta fuera registrada ante la Junta Local Ejecutiva por un funcionario previamente acreditado por el partido y habilitado para tal efecto por el área

---

<sup>40</sup> Visible a fojas 2134 a 2140, del Legajo 3, del expediente.



correspondiente de la DERFE, acreditación y habilitación que en ningún momento recibió, o en su defecto que se le hubiera hecho entrega de alguna de las “llaves públicas” situación que tampoco aconteció.

- El hecho de que se le vinculara al procedimiento sancionador en que se actúa, derivó de la referencia que hizo Jesús Gonzalo Estrada Villareal, al momento de dar respuesta al emplazamiento formulado por la UTCE, en el sentido de establecer que *...el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, entregó las (sic) Lista Nominal de Electores en su versión impresa, a José Alberto Salas Beltrán, titular de la Secretaría de Acción Electoral...*, de lo cual no se desprende que haya recibido algún dispositivo de almacenamiento digital que contuviera la información de las listas nominales, ni mucho menos la llave pública indispensable para tener acceso a los archivos digitales, y consiguientemente su difusión en una fuente de acceso público, actos que niega absolutamente.
- De la fecha de entrega de los archivos digitales a Ogla Rita Bojorquez Gámez (trece de febrero de dos mil quince) y a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal (quince de febrero de dos mil dieciséis), hasta la fecha en la que le fue entregada la lista nominal impresa el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, paso un lapso de tiempo considerable, sin que hubiere quedado claro el uso que se dio a dicha información.
- Asimismo, indica que no se precisa la hora, minuto y segundo en que la autoridad electoral encontró en el sitio de internet denominado DigitalOcean, las listas nominales entregadas a las personas antes citadas, limitándose a señalar que fue el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, sin que quede claro si dicha información fue encontrada con anterioridad o posterioridad a la fecha de entrega en su versión impresa.
- De igual forma, señala que no existe claridad respecto de las circunstancias de modo en que supuestamente se difundió la información, ya que la autoridad electoral, únicamente señala que se encontró en la dirección IP 162.243.158.165, puerto 27017, la información materia del presente procedimiento, sin embargo no señala si el acceso a dicha dirección y puerto fue libre o requería candado de seguridad para acceder a ella.

- Por último, menciona que no existe indicio alguno concerniente a demostrar que hubiere tenido acceso tanto al archivo digital como a la llave pública correspondiente, del cual se pudiera desprender la conducta que se le pretende imputar, por lo cual, manifiesta que no se establecen por parte de la DERFE, las condiciones de modo, tiempo y oportunidad, en la que sucedieron los hechos, de ahí que la denuncia no satisfaga a plenitud con el requisito de sustentación relacionada con su vinculación a los hechos denunciados, resultando aplicable el principio de presunción de inocencia, ante la inexistencia de pruebas para demostrar las aseveraciones del denunciante. Al respecto, cita las siguientes jurisprudencias:

***CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.***

***PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.***

***PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.***

En relación a las excepciones y defensas hechas valer, por cuestión de método y debido a su estrecha vinculación con el análisis necesario para dilucidar la controversia, se atenderán en el estudio de fondo del presente asunto.

## **2. LITIS**

Con base en lo expuesto, la cuestión a dilucidar se constriñe en determinar si existió un uso indebido de la Lista Nominal de Electores para Revisión entregada a los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, en términos del Acuerdo INE/CG249/2014, aprobado por el Consejo General del INE, así como la entrega a los representantes de los partidos políticos ante los Organismos Públicos Locales Electorales en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016, con motivo de su difusión en una fuente de acceso público, específicamente, en el sitio de internet denominado *Digital Ocean*.

### **3. MARCO NORMATIVO**

#### **A. Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores**

##### **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

###### **Artículo 41. [...]**

###### **V.**

[...]

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:

a) Para los Procesos Electorales Federales y locales:

[...]

3. El padrón y la lista de electores;

[...]

##### **Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales**

###### **Artículo 30.**

1. *Son fines del Instituto:*

...

c) *Integrar el Registro Federal de Electores;*

###### **Artículo 32.**

1. *El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:*

III. *El padrón y la lista de electores;*

###### **Artículo 54.**

1. *La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene las siguientes atribuciones:*

...

b) *Formar el Padrón Electoral;*

*d) Revisar y actualizar anualmente el Padrón Electoral conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto de esta Ley;*

...

*f) Proporcionar a los órganos competentes del Instituto y a los Partidos Políticos Nacionales y candidatos, las listas nominales de electores en los términos de esta Ley;*

...

*2. Para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se integrará la Comisión Nacional de Vigilancia, que presidirá el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con la participación de los Partidos Políticos Nacionales.*

**Artículo 126.**

...

*3. Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.*

***4. Los miembros de los Consejos General, locales y distritales, así como de las comisiones de vigilancia, tendrán acceso a la información que conforma el Padrón Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las listas nominales.***

**Artículo 133.**

*1. El Instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de electores.*

*2. El Instituto emitirá los Lineamientos en los que se establezcan los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas de electores en los Procesos Electorales Locales.*

**Artículo 137.**

*1. Una vez llevado a cabo el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, se procederá a formar las listas nominales de electores del Padrón Electoral con los nombres de aquéllos a los que se les haya entregado su credencial para votar.*

*2. Los listados se formularán por Distritos y por secciones electorales. En el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el listado se formulará por país*

*de residencia y por entidad federativa de referencia, si la credencial para votar con fotografía se expidió o renovó desde el extranjero, o por el Distrito Electoral que aparece en su credencial para votar con fotografía, si fue expedida en territorio nacional.*

**3. Los listados anteriores se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes.**

*4. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores proveerá lo necesario para que las listas nominales se pongan en conocimiento de la ciudadanía en cada Distrito.*

**Artículo 148**

...

**2. Los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del Padrón Electoral y las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines distintos.**

**Artículo 150.**

*1. Los partidos políticos, conforme a lo establecido en el párrafo 2 del artículo 148 de esta Ley, podrán formular a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores sus observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 25 de febrero de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones.*

...

**Artículo 151.**

*1. El 15 de febrero del año en que se celebre el Proceso Electoral Ordinario, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas nominales de electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los Distritos electorales. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su credencial para votar al 15 de diciembre y el segundo apartado contendrá los nombres de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido su credencial para votar a esa fecha.*

**Artículo 152.**

*1. Los partidos políticos contarán en el Instituto con terminales de computación que les permitan tener acceso a la información contenida en el Padrón Electoral y en las listas nominales de electores. Igualmente y conforme a las posibilidades técnicas, los partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de*

*datos, base de imágenes, documentos fuente y movimientos del padrón, exclusivamente para su revisión y verificación.*

*2. De igual manera, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores instalará centros estatales de consulta del padrón electoral para su utilización por los representantes de los partidos políticos ante las comisiones locales de vigilancia, y establecerá además, mecanismos de consulta en las oficinas distritales del propio Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier ciudadano para verificar si está registrado en el Padrón Electoral e incluido debidamente en la lista nominal de electores que corresponda.*

**Artículo 157.**

*1. Las comisiones de vigilancia se integrarán por:*

*a) El Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o, en su caso, los vocales correspondientes de las juntas locales o distritales ejecutivas, quienes fungirán como presidentes de las respectivas comisiones, en caso de ausencia temporal, estos últimos podrán ser sustituidos por los Vocales Ejecutivos de dichas juntas. El presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia será sustituido, en sus ausencias temporales, por el secretario de la misma.*

***b) Un representante propietario y un suplente por cada uno de los Partidos Políticos Nacionales, y***

*c) Un secretario designado por el respectivo presidente, entre los miembros del Servicio Profesional Electoral con funciones en el área registral.*

*2. La Comisión Nacional de Vigilancia contará además, con la participación de un representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.*

*3. Los partidos políticos deberán acreditar oportunamente a sus representantes ante las respectivas comisiones de vigilancia, los que podrán ser sustituidos en todo tiempo.*

**Artículo 443.**

*1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:*

*a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;*

*...*

*n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley*

**Artículo 447.**

*1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley:*

...

*e) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.*

**Ley General de Partidos Políticos**

**Artículo 25.**

*1. Son obligaciones de los partidos políticos:*

*a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;*

...

*u) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.*

Por lo que respecta a la formación del Padrón Electoral y listas nominales, de los preceptos normativos en cita, se desprende lo siguiente.

Por disposición constitucional, para los Procesos Electorales Federales y locales, el INE tiene a su cargo el padrón electoral y la lista de electores. De conformidad con lo previsto en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), d) y f), de la LGIPE, le corresponde a la DERFE, entre otras, formar el Padrón Electoral, revisarlo y actualizarlo anualmente, **así como proporcionar a los Partidos Políticos Nacionales las listas nominales de electores.**

De la misma forma, para coadyuvar en los trabajos relativos al Padrón Electoral se integra la **CNV**, que preside el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, **con la participación de los Partidos Políticos Nacionales.**

Con base en lo establecido en los artículos 157 y 158 de la LGIPE, la CNV se integra por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, un representante propietario y un suplente por cada uno de los Partidos Políticos

Nacionales y un secretario designado por el presidente, entre los miembros del Servicio Profesional Electoral con funciones en el área registral. Además, dicha comisión contará con la participación de un representante del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La referida comisión vigila que la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas nominales electorales, así como su actualización, se lleven a cabo en los términos establecidos en la Ley; vigilan que las credenciales para votar se entreguen oportunamente a los ciudadanos; reciben las observaciones que formulen los partidos políticos a las listas nominales de electores; coadyuvan en la campaña anual de actualización del Padrón Electoral, entre otras.

El Instituto se encargará de formar y administrar el padrón electoral y la lista de electores. Los órganos de vigilancia del Padrón Electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los Partidos Políticos Nacionales.

Asimismo, el INE tiene la obligación de emitir los Lineamientos necesarios para el uso del padrón electoral y las listas de electores en los procesos electorales, que serán integradas con los nombres de aquellas personas a las que se les haya entregado su credencial para votar, de conformidad con el padrón electoral, con el propósito de regular la forma en la cual se protegerán los datos personales de los ciudadanos.

Por otra parte, de los preceptos normativos trasuntos se desprenden los derechos y obligaciones para los siguientes sujetos en relación con el manejo, resguardo y protección que deben dar a la información y datos personales de las personas contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de electores:

**A) Del Instituto Nacional Electoral**

- a) Garantizar la protección** de la información y los datos personales en posesión del Instituto;
- b) Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales que se encuentren en posesión del Instituto**, así como evitar su alteración, transmisión y acceso no autorizado;



c) Los documentos, **datos** e informes **que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores**, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y la Ley Electoral, **serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer**, con excepción y exclusivamente para los fines establecidos en el artículo 126, párrafo 4, de la LGIPE, es decir, **exclusivamente** para el cumplimiento de sus funciones **y no podrán darle o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del padrón electoral y las listas nominales.**

#### **B) De los Partidos Políticos**

De la misma forma, podemos advertir obligaciones para los partidos políticos en materia de protección de datos personales, de conformidad con lo establecido en la LGIPE.

a) **Conducir sus actividades dentro de los cauces legales** y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, **respetando** la libre participación política de los demás partidos políticos y **los derechos de los ciudadanos**, y

b) La información que obtengan los partidos políticos, derivada del acceso en forma permanente a la base de datos del padrón electoral, así como las listas nominales, **exclusivamente serán para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines distintos.**

#### **C) De los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, o cualquier persona física o moral**

a) **Conducir sus actividades dentro de los cauces legales** y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, **respetando** la libre participación política de los demás partidos políticos y **los derechos de los ciudadanos**, y

b) **Cumplir** las disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, dentro del marco normativo a considerar dentro de la presente Resolución se encuentran los siguientes cuerpos normativos:

- *LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES*, aprobados por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral mediante Acuerdo INE/CG35/2013<sup>41</sup>
- *PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA REVISIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE LAS COMISIONES DE VIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015*, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo INE/CG249/2014
- “*LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2015-2016*”, aprobados por el Consejo General del INE, mediante Acuerdo INE/CG38/2016

Cuyo contenido, en lo que interesa, se inserta a continuación:

***LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS ORGANISMOS ELECTORALES LOCALES***

***Capítulo Único Disposiciones Generales***

---

<sup>41</sup> Vigentes al momento de la comisión de los hechos.

...

2. *El objeto de los presentes Lineamientos es establecer los mecanismos para garantizar, conforme a lo establecido en la Constitución, el Código, el Reglamento y demás normatividad aplicable, lo siguiente:*

*a) El acceso a datos personales contenidos en el Padrón Electoral a las y los miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos.*

*b) La entrega en medios magnéticos y/o impresos de datos personales contenidos en las Listas Nominales de Electores para observaciones de los partidos políticos, así como las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, para su revisión y verificación a los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos Nacionales.*

*c) Garantizar a los titulares de los datos personales que los miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como los Partidos Políticos, circunscribirán el uso de la información contenida en el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y demás instrumentos, bases de datos y documentos electorales relacionados, para la revisión de su consistencia y calidad, así como la verificación de que la integración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores se lleve a cabo con apego a la ley.*

3. *Los presentes Lineamientos son de observancia general para el personal de todos los órganos del Instituto, las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia así como de los Partidos Políticos Nacionales y los Organismos Electorales Locales, mismos que en el ámbito de su competencia, deberán dar debido cumplimiento a estos Lineamientos.*

...

5. *Para efectos de los presentes Lineamientos son datos personales contenidos en el Padrón Electoral, aquellos que de conformidad con el artículo 184, numeral 1 del Código son proporcionados por las y los ciudadanos, para realizar algún trámite de inscripción o actualización al Padrón Electoral, y en consecuencia para la obtención de su Credencial para Votar con Fotografía e incorporación a la Lista Nominal de Electores, siendo los siguientes:*

...

8. *Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados de conformidad a los presentes Lineamientos, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, así como a los instrumentos y documentos electorales que los contengan, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darle o destinarla a finalidad distinta al de la revisión del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores.*

...

24. Los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, serán responsables del uso o destino de los datos personales a los que tengan acceso y deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y documentación, usándola exclusivamente para los fines para los que fue solicitada.

**Título III. De la entrega de datos personales contenidos en el Padrón Electoral,  
en términos del artículo 195 del Código**

**Capítulo Primero. De la entrega de los datos personales contenidos en el  
Padrón Electoral y las Listas  
Nominales de Electores a los Representantes de Partidos Políticos Nacionales  
ante las Comisiones Nacionales, Locales y Distritales de Vigilancia**

27. Para el cumplimiento de las disposiciones del Código relacionadas con la entrega del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los representantes de los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia, así como a los partidos políticos, la Dirección Ejecutiva colocará en cada una de las copias que entregue, elementos distintivos únicos que permitan identificar aquellas que, en su caso, hubieran sido objeto de un uso indebido por parte de los usuarios.

28. De conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Código, la Dirección Ejecutiva entregará a más tardar el 15 de marzo del año en que se celebre el Proceso Electoral Ordinario, en medios magnéticos, a cada uno de los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos Nacionales, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, bajo la modalidad que señala el propio artículo citado.

29. Para efectos del numeral 28 de estos Lineamientos, la Dirección Ejecutiva de manera conjunta con la Comisión Nacional de Vigilancia, emitirá un procedimiento en el que se determine la forma en que se realizará la entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión, asegurando su integridad y velando por la protección de los datos personales contenidas en ellas. Dicho procedimiento deberá ser aprobado por el Consejo General a más tardar tres meses antes de la entrega de las listas.

30. El procedimiento para la entrega de los datos personales contenidos en las listas nominales de electores a que se refiere el lineamiento anterior comprenderá, cuando menos, los aspectos siguientes:

a) Los representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia comunicarán, con al menos un mes de anticipación al plazo para la aprobación por el Consejo General del procedimiento de entrega de las listas nominales previstas en la ley, si requiere que se realice la entrega a sus respectivos representantes ante las Comisiones Locales y Distritales, así como a su Partido Político, según sea el caso. La solicitud puede involucrar al total de comisiones o a una parcialidad de las mismas.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

b) La entrega deberá realizarse mediante oficio dirigido de manera personalizada al representante propietario del partido político del órgano de vigilancia de que se trate, quien firmará de recibido.

c) En el caso de los representantes ante la Comisión Nacional de Vigilancia o en el caso de los Partidos Políticos, será el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores quien realice la entrega de los datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas nominales de electores.

d) En el caso de los representantes acreditados ante la Comisión que soliciten sean entregados ante los órganos de vigilancia locales y distritales, serán los Vocales del Registro Federal de Electores en las Juntas Locales y Distritales respectivas, los responsables de realizar la entrega del archivo electrónico que contenga los datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas nominales de electores únicamente en el ámbito territorial de su competencia.

**e) Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas nominales de electores sean recibidos exclusivamente por los representantes acreditados ante los órganos de vigilancia y sean utilizados únicamente para su revisión y verificación en términos del Código.**

f) Los mecanismos para reintegrar la información.

31. La Dirección Ejecutiva entregará los campos de información de las Listas Nominales de Electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones y Distritos. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su credencial para votar al 15 de febrero del año de la elección y el segundo apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que no hayan obtenido su credencial para votar.

32. Los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, serán responsables del uso o destino de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores y deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y documentación que les sea entregada, sin poder darle un uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de Electores de que se trate. En su caso, los representantes acreditados ante la Comisión, podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva la adopción de medidas de seguridad adicionales.

33. Una vez concluido el plazo para presentar las impugnaciones del Proceso Electoral, los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los Partidos Políticos Nacionales, deberán reintegrar el archivo electrónico en un plazo no mayor a 5 días hábiles y mediante oficio dirigido al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado la entrega, según corresponda, señalando además que ésta no ha sido reproducida, ni almacenada por algún medio.

*34. La Dirección Ejecutiva será la responsable del resguardo, salvaguarda y destino de los archivos que contengan las listas nominales de electores que sean reintegrados por los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia.*

De los *Lineamientos* trasuntos se desprende que su objeto es establecer los mecanismos para garantizar, conforme a lo establecido en la Constitución, el Código, el Reglamento y la demás normatividad aplicable:

- El acceso a datos personales contenidos en el Padrón Electoral a las y los miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los partidos políticos;
- La entrega en medios magnéticos y/o impresos de datos personales contenidos en las Listas Nominales de Electores para observaciones de los Partidos Políticos, así como las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, para su revisión y verificación a los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como a los Partidos Políticos Nacionales.
- Garantizar a los titulares de los datos personales que los miembros de los Consejos General, locales y Distritales, las Comisiones nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como los partidos políticos realicen el uso de la información contenida en el Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y demás instrumentos, bases de datos y documentos electorales relacionados, para la revisión de sus consistencia y calidad, así como la verificación de que la integración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores se lleve a cabo conforme a lo dispuesto por la Ley.

Asimismo, contemplan que su observancia es general para todos los órganos del Instituto, las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, así como para los Partidos Políticos y los Organismos Electorales Locales, los cuales en el ámbito de su competencia, deberán dar debido cumplimiento a los mismos.

Prevén que los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia tendrán acceso, podrán verificar y les serán entregados los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán dar o destinar dicha información a una finalidad distinta al de su revisión, siendo responsables

del uso o destino de dichos datos, debiendo tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información y documentación.

De la misma forma, establecen que la DERFE colocará en cada una de las copias que entregue a los representantes de los partidos políticos del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores, elementos distintivos únicos que permitan identificar aquellas que hubieren sido objeto de un uso indebido por parte de los usuarios.

A su vez, disponen que de conformidad con el artículo 195 del Código, la DERFE, entregaría a más tardar el quince de marzo del año en que se celebre el Proceso Electoral Ordinario, en medios magnéticos, a cada uno de los integrantes de la CNV, así como a los Partidos Políticos Nacionales, los datos contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores; ello, mediante un procedimiento emitido en forma conjunta con la CNV en el que se especificaría la forma en que se realizaría la entrega de los datos en cita, asegurando su integridad y velando por la protección de los datos personales contenidos en dichos instrumentos. Dicho procedimiento sería aprobado por el Consejo General a más tardar tres meses antes de la entrega de las listas, comprendiendo cuando menos, los siguientes aspectos:

- Los representantes ante la CNV comunicarían, con al menos un mes de anticipación al plazo para la aprobación por el Consejo General del procedimiento de entrega de las listas nominales previstas en la ley, si requerían que les fuera entregado el listado a sus respectivos representantes ante las Comisiones Locales y Distritales, así como a su partido político, según fuera el caso. La solicitud podía involucrar al total de las comisiones o a una parcialidad de las mismas;
- La entrega se realizará mediante oficio dirigido de manera personalizada al representante propietario del partido político del órgano de vigilancia de que se trate, quien firmará de recibido;
- En el caso de los representantes acreditados ante la CNV, o en el caso de los partidos políticos, será el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores quien realice la entrega de los datos personales en posesión de la DERFE contenidos en las Listas Nominales de Electores;
- En el caso de los representantes acreditados ante la CNV que soliciten sean entregados ante las los órganos de vigilancia locales y distritales,

serían los Vocales del Registro Federal de Electores en las Juntas Locales y Distritales respectivas, los responsables de realizar la entrega del archivo electrónico que contenga los datos personales en posesión de la Dirección Ejecutiva contenidos en las listas nominales de electores únicamente a la información que corresponda al ámbito territorial de su competencia;

- Los mecanismos de control y seguridad necesarios para garantizar que los datos personales en posesión de la DERFE contenidos en las Listas Nominales de Electores sean recibidos exclusivamente por los representantes acreditados ante los órganos de vigilancia, y sean utilizados únicamente para su revisión y verificación en términos del Código, y
- Los mecanismos para reintegrar la información.

Aunado a lo anterior, los Lineamientos precisan que los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia, serían responsables del uso o destino de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, debiendo tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información que les fuera entregada, sin poder darle un uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de Electores, para lo cual, los representantes acreditados ante la Comisión correspondiente, podrán solicitar a la DERFE la adopción de medidas de seguridad adicionales.

También se especifica que una vez concluido el plazo para presentar las impugnaciones del Proceso Electoral, los representantes acreditados ante las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia y/o, en su caso, los Partidos Políticos Nacionales, debían reintegrar el archivo electrónico en un plazo no mayor a cinco días hábiles y mediante oficio dirigido al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores o al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital Ejecutiva que haya realizado la entrega, según correspondiera, debiendo señalar bajo protesta de decir verdad que la misma no fue reproducida, ni almacenada por algún medio.

Por último, establecen que la DERFE sería la responsable del resguardo, salvaguarda, y destino de los archivos en los se encontraran las Listas Nominales de Electores que hubieren sido reintegrados por los miembros de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia.



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

Al respecto, el procedimiento aprobado por el Consejo General mediante Acuerdo INE/CG249/2014<sup>42</sup>, para la entrega de la Lista Nominal de Electores de Revisión, a las representaciones partidistas ante las Comisiones Locales de Vigilancia, así como los mecanismos de seguridad y control, en la parte que interesa, se especifica en los siguientes cuadros:

<b>Entrega a representantes acreditados ante las CLV</b>			
	<i>Descarga de los archivos cifrados del servidor de distribución, por parte de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva correspondiente.</i>	VRFE	10-11 feb 2015
	<i>Grabación de los archivos cifrados en medios ópticos.</i>	VRFE	10-11 feb 2015
	<i>Etiquetado de los medios ópticos.</i>	VRFE	10-11 feb 2015
	<i>Entrega de los medios ópticos a los representantes propietarios, por conducto del Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva correspondiente.</i>	VRFE	12-13 feb 2015
	<i>Envío de las claves únicas de acceso a los representantes propietarios, por parte del área designada que se refiere en la actividad 12. Se determinará el esquema más conveniente, en función de la seguridad y eficiencia en el envío.</i>	CPT/DITA	12-13 feb 2015
<b>Devolución y destino final de medios ópticos</b>			
	<i>Devolución de los medios ópticos originales a la DERFE, por parte del representante propietario acreditado ante la CNV.</i>	Representantes partidistas	<i>Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del plazo para presentar impugnaciones al PEF</i>
	<i>Devolución de los medios ópticos originales al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local correspondiente, por parte del representante propietario acreditado ante la CLV.</i>	Representantes partidistas	
	<i>Destrucción de medios ópticos en evento supervisado por los representantes ante la Comisión de Vigilancia correspondiente.</i>	CPT/CECYRD VRFE	<i>Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la devolución</i>
<b>MECANISMOS DE SEGURIDAD Y CONTROL</b>			<b>OBJETIVO</b>

<sup>42</sup> Visible a fojas 153 a 163, del Legajo 1, del expediente.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

		ESPECÍFICO
<b>Control de acceso a la base de datos central.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Acceso a la base de datos únicamente para el usuario autorizado, de acuerdo a sus funciones.</li> <li>· Acceso a la base de datos mediante clave de usuario y contraseña.</li> <li>· Área de trabajo con acceso exclusivo para el usuario autorizado.</li> </ul>	Asegurar que únicamente el usuario autorizado pueda acceder a la base de datos y al área de trabajo creada para la generación de la LNER.
<b>Seguridad en los equipos de escritorio utilizados para la generación, asignación de marca de rastreabilidad y cifrado de los archivos.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Equipos con acceso sólo a la red institucional, restringidos para acceso a internet.</li> <li>· Dispositivos de entrada y salida de datos bloqueados.</li> <li>· Equipos protegidos con clave de usuario y contraseña.</li> </ul>	Asegurar que la información generada no pueda ser cargada ni transmitida.
<b>Seguridad en la distribución y entrega de la información.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Asignación de marca de rastreabilidad.</li> <li>· Cifrado de los archivos.</li> <li>· Generación de claves de acceso únicas por archivo.</li> <li>· Administración y entrega de los archivos cifrados y las claves de acceso, por áreas diferentes.</li> <li>· Borrado de archivos en áreas de trabajo.</li> </ul>	Garantizar que la información sea recibida exclusivamente por los representantes autorizados, y que cada uno de ellos reciba una copia única.
<b>Seguridad en el manejo de los medios ópticos.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· El personal que realice la grabación de los medios, sólo tendrá acceso a los archivos cifrados.</li> <li>· Los medios invariablemente contendrán archivos cifrados.</li> <li>· La entrega y de los medios se realizará únicamente a los representantes propietarios, de manera personalizada y por oficio. Lo mismo aplicará para la devolución de los medios.</li> <li>· Los medios devueltos serán resguardados hasta su destrucción, en evento supervisado por las representaciones partidistas.</li> </ul>	Garantizar que los archivos cifrados y los medios ópticos sean recibidos exclusivamente por los representantes autorizados, y manejados únicamente por los funcionarios de la DERFE designados para su grabación, entrega, resguardo y destrucción.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

<b>Mecanismos de control de calidad de la información.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Generación de cifras de control por entidad.</li> <li>· Verificación de las cifras de control en cada una de las etapas del procedimiento.</li> <li>· Pruebas de lectura e integridad de los archivos.</li> </ul>	Asegurar la integridad de la información a entregar.
<b>Supervisión y control en las actividades del procedimiento.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Supervisión de las áreas de seguridad informática de la UNICOM y de la DERFE, en todas las etapas del procedimiento.</li> <li>· Registro en bitácora durante el desarrollo de todas las actividades.</li> </ul>	Registro de eventos y certificación de la aplicación del procedimiento establecido, en cada una de sus etapas.

En igual sentido, será necesario traer a consideración lo establecido en los “LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2015-2016”, aprobados por el Consejo General del INE, mediante Acuerdo INE/CG38/2016<sup>43</sup>, mismos que en lo que interesa disponen lo siguiente:

**CAPÍTULO ÚNICO**  
**Disposiciones generales**

*3. Los presentes Lineamientos tienen por objeto definir los plazos, términos y condiciones en los que se les proporcionará la entrega de la información contenida en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos Locales, para la instrumentación de las actividades en el marco de los Procesos Electorales Locales de sus respectivas entidades federativas.*

...

*5. Los funcionarios electorales del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, así como los representantes de los Partidos Políticos, en términos de lo dispuesto por los artículos 126, párrafo 3 y 336, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, estarán obligados a salvaguardar la confidencialidad y protección de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y en las Listas Nominales de Electores.*

*10. Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por:*

...

<sup>43</sup> Visible a fojas 180 a 224, del Legajo 1, del expediente.

j) *Datos personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, el estado de salud físico o mental, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad;*

...

y) *Lista Nominal para Revisión/Exhibición: Lista Nominal de Electores para observaciones de los Partidos Políticos y Candidatos Independientes o ciudadanos.*

...

**TÍTULO TERCERO  
De la Lista Nominal de Electores**

**CAPÍTULO I  
Prevenciones generales**

25. *La Dirección Ejecutiva generará y entregará la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía, el Listado Adicional, y en los casos que aplique la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, a los Organismos Públicos Locales, conforme a los requerimientos establecidos en los Convenios o Anexos Técnicos, y sólo podrán ser utilizadas para las actividades inherentes al desarrollo de los Procesos Electorales Locales. La entrega se realizará al funcionario del OPLE correspondiente, de acuerdo con los mecanismos de comunicación que se establezcan entre los OPLE y el Instituto, a través de la Unidad Técnica de Vinculación.*

26. *La Dirección Ejecutiva implementará los mecanismos de control, seguridad y rastreabilidad que sean necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información contenida en las Listas Nominales de Electores, que serán entregadas a los Organismos Públicos Locales y a los representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes, a fin de que no se dé uso distinto al establecido en los Convenios que para tal efecto se suscriban.*

**CAPÍTULO II  
De las Listas Nominales de Electores**

27. *En apoyo a los Procesos Electorales Locales, la Dirección Ejecutiva generará los instrumentos y productos electorales siguientes:*

...

b) *Lista Nominal para Revisión, es la relación que contiene los nombres de los ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral a quienes se les haya expedido y entregado la Credencial para Votar hasta el día 15 de enero del año de la elección, dicha relación servirá para que los Partidos Políticos y/o Candidatos Independientes, acreditados ante los Organismos Públicos Locales, formulen sus observaciones entre el 15 de febrero y hasta el 14 de marzo inclusive, del año de la elección; dichos listados no deberán incluir la fotografía de los ciudadanos;*

...

**CAPÍTULO III**  
**De la Lista Nominal de Electores para Revisión/Exhibición**

**SECCIÓN I**  
**Lista Nominal de Electores para Revisión**

28. La Dirección Ejecutiva integrará la Lista Nominal para Revisión con el nombre de los ciudadanos incluidos en cada una de las secciones del Padrón Electoral y que hayan obtenido su Credencial para Votar, ordenada alfabéticamente, por secciones correspondientes a cada uno de los Distritos electorales, misma que estará dividida en dos apartados y no incluirá la fotografía del ciudadano.

29. Los dos apartados de la Lista Nominal para Revisión se elaborarán con un corte al 15 de enero del año de la elección local y se conformarán de la siguiente manera:

- a) La primera contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su Credencial para Votar, y
- b) La segunda contendrá los nombres de los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, que no hayan obtenido Credencial para Votar.

30. Para la generación de la Lista Nominal para Revisión se considerarán los datos siguientes:

- a) Número consecutivo;
- b) Nombre completo (apellido paterno, apellido materno y nombres);
- c) Clave de Elector (alfa clave, fecha nacimiento, lugar nacimiento, sexo, dígito verificador, clave homonimia);
- d) Número de emisión;
- e) Estado; f) Distrito Local;
- g) Municipio o Delegación;
- h) Sección;
- i) Localidad, y
- j) Manzana

31. A más tardar el 15 de febrero del año en que se celebre la elección, la Dirección Ejecutiva entregará en medio electrónico la Lista Nominal para Revisión a cada uno de los Partidos Políticos y, de ser el caso, a los Candidatos Independientes que contendrán en la Jornada Electoral respectiva. La entrega se realizará bajo el esquema siguiente:

- a) A los representantes titulares de los Partidos Políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia que así lo soliciten, se les entregará un tanto de la Lista Nominal para Revisión. La solicitud se realizará por

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

*escrito a la Dirección Ejecutiva por conducto de la Dirección de la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia, a más tardar 15 días naturales previos al inicio del periodo de observaciones;*

*b) Se entregará un tanto a los representantes titulares de los Partidos Políticos representados ante los Organismos Públicos Locales, y en su caso a los de los Candidatos Independientes, debiendo mediar previamente la solicitud de dichos organismos al Instituto. La solicitud se realizará por escrito al Instituto por conducto de la Unidad Técnica, a más tardar 15 días previos al inicio del periodo de observaciones. Por lo que respecta a los partidos con representación nacional, podrán reservarse el derecho de autorizar la entrega a sus representantes en los Organismos Públicos Locales;*

*c) Se aplicarán el protocolo de generación y entrega de la Lista Nominal, así como los mecanismos de seguridad y control aprobados por el Consejo General del Instituto para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2014-2015, con las mejoras que determine la Dirección Ejecutiva, a efecto de proteger los datos personales de los ciudadanos en posesión del Registro Federal de Electores;*

*d) La Dirección Ejecutiva elaborará el procedimiento específico de entrega y dispondrá a los representantes de los Partidos Políticos y de los Candidatos Independientes, las herramientas técnicas para la generación de sus llaves pública y privada, y*

***e) Los representantes de los Partidos Políticos, y en su caso los representantes de los Candidatos Independientes, a quienes se entregará la Lista Nominal de Electores para Revisión, deberán proporcionar previamente a la Dirección Ejecutiva su llave pública de cifrado, con la finalidad de asegurar que únicamente el representante acreditado sea quien tenga acceso a la información mediante su llave privada.***

*32. Los Organismos Públicos Locales recibirán a partir del 15 de febrero y hasta el 14 de marzo inclusive, las observaciones que formulen los Partidos Políticos y en su caso los Candidatos Independientes, a la Lista Nominal para Revisión. Las observaciones se harán señalando hechos y casos concretos e individualizados, serán entregadas preferentemente en un medio óptico con código de integridad con la finalidad de agilizar y mejorar la búsqueda en el Padrón Electoral, en formato .TXT separado por el carácter "|" ("pipe" o "tubo"), el cual deberá contener, preferentemente, los campos siguientes:*

*...*

*33. La Dirección Ejecutiva emitirá el catálogo de Claves de Observaciones, a efecto de que los Partidos Políticos y o en su caso Candidatos Independientes puedan asignarlo al formular sus observaciones, el cual será hecho de su conocimiento por conducto del Organismo Público Local, de manera oportuna.*

*34. Los Organismos Públicos Locales, remitirán las observaciones a la Dirección Ejecutiva a más tardar al día siguiente al que las hayan recibido, la cual procederá a su análisis, y en caso de resultar*

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

*legalmente procedentes, se realizarán las modificaciones al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de Electores. Para realizar el análisis y la dictaminación de procedencia de las observaciones, se utilizará el procedimiento aprobado por la Comisión Nacional de Vigilancia para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.*

*35. A más tardar el 15 de abril del año de la elección, la Dirección Ejecutiva proporcionará en medio impreso a los Organismos Públicos Locales el informe a las observaciones formuladas para que por su conducto se entregue a los Partidos Políticos y Candidatos Independientes acreditados ante él. Asimismo, la Dirección Ejecutiva entregará el informe en medio electrónico a las representaciones de los partidos políticos acreditados ante la Comisión Nacional de Vigilancia, incluyendo un archivo con la relación de las observaciones formuladas y la respuesta obtenida a partir del análisis efectuado.*

...

*38. La devolución de las Listas Nominales de Electores entregadas al Organismo Público Local, así como a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante la Comisión y los OPLE, se deberá efectuar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del plazo de impugnaciones del Proceso Electoral Local, por la misma vía en que fue entregada e indicando que la información no fue reproducida ni almacenada, a efecto de que la Dirección Ejecutiva determine su destino final de conformidad con los procedimientos establecidos conjuntamente con la Comisión Nacional de Vigilancia.*

**TÍTULO CUARTO**

**De la confidencialidad de los datos personales**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**De la confidencialidad**

*71. La Dirección Ejecutiva y sus áreas operativas implementarán los mecanismos que sean necesarios para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.*

...

*74. Los funcionarios públicos, los representantes de los Partidos Políticos y, en su caso, los representantes de los Candidatos Independientes que tengan acceso a los instrumentos y productos electorales, únicamente estarán autorizados para su uso y manejo; en los términos previstos en la legislación de la materia, así como de los compromisos adquiridos en virtud de los Convenios que al efecto se suscriban.*

De los *Lineamientos* trasuntos se desprende lo siguiente:

Su objeto consiste en definir los plazos, términos y condiciones en los que se les proporcionaría la entrega de la información contenida en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos Locales, para la instrumentación de las actividades en el marco de los Procesos Electorales Locales de sus respectivas entidades federativas.

Dichos *Lineamientos* conceptualizan la Lista Nominal para Revisión, como la relación que contiene los nombres de los ciudadanos incluidos en el Padrón Electoral a quienes se les hubiere expedido y entregado la Credencial para Votar hasta el quince de enero de dos mil dieciséis, la cual serviría para que los partidos políticos y/o candidatos independientes, acreditados ante los Organismos Públicos Locales, formularán sus observaciones entre el quince de febrero y hasta el catorce de marzo de dos mil dieciséis.

Asimismo, precisan que la citada Dirección Ejecutiva, implementaría los mecanismos de control, seguridad y rastreabilidad que fueran necesarios para salvaguardar la confidencialidad de la información contenida en las Listas Nominales de Electores, a efecto de que no fueran utilizadas para fines distintos de aquellos para los que fueron creados.

A su vez, señalan que la DERFE, es la encargada de generar y entregar la Lista Nominal de Electores Definitiva, el Listado Adicional, y en los casos que aplique la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, a los Organismos Públicos Locales, precisando que dicha información sólo podrá ser utilizada para las actividades inherentes al desarrollo de los Procesos Electorales Locales.

Por otra parte, los referidos *Lineamientos* establecen que a más tardar el quince de febrero del año en que se celebre la elección, la Dirección Ejecutiva entregaría en medio electrónico la Lista Nominal para Revisión a cada uno de los partidos políticos, bajo el siguiente esquema:

- A los representantes titulares de los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia que así lo soliciten, se les entregaría un tanto de la Lista Nominal para Revisión. La solicitud se realizaría por escrito a la Dirección Ejecutiva por conducto de la Dirección de la Secretaría de las



Comisiones de Vigilancia, a más tardar quince días naturales previos al inicio del periodo de observaciones;

- Se entregaría un tanto a los representantes titulares de los partidos políticos representados ante los Organismos Públicos Locales, y en su caso a los de los Candidatos Independientes, debiendo mediar previamente la solicitud de dichos organismos al Instituto. La solicitud se realizaría por escrito al Instituto por conducto de la Unidad Técnica, a más tardar quince días previos al inicio del periodo de observaciones.
- Se aplicaría el protocolo de generación y entrega de la Lista Nominal, así como los mecanismos de seguridad y control aprobados por el Consejo General del Instituto para el Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2014-2015, con las mejoras que determinará la Dirección Ejecutiva, a efecto de proteger los datos personales de los ciudadanos en posesión del Registro Federal de Electores.
- La Dirección Ejecutiva elaboraría el procedimiento específico de entrega y dispondría a los representantes de los Partidos Políticos y de los Candidatos Independientes, las herramientas técnicas para la generación de sus llaves pública y privada, y
- Los representantes de los partidos políticos, y en su caso los representantes de los candidatos independientes, a quienes se les entregaría la Lista Nominal de Electores para Revisión, deberán proporcionar previamente a la Dirección Ejecutiva su llave pública de cifrado, con la finalidad de asegurar que únicamente el representante acreditado sea quien tenga acceso a la información mediante su llave privada.

Aunado a lo anterior, los *Lineamientos* precisaban que los Organismos Públicos Locales recibirían a partir del quince de febrero y hasta el catorce de marzo de dos mil dieciséis, las observaciones que formularan los partidos políticos y en su caso los candidatos independientes, a la Lista Nominal para Revisión, para que después fueran remitidas a la DERFE, para su análisis, y en caso de resultar legalmente procedentes, se realizarían las modificaciones al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de Electores. Para realizar el análisis y la dictaminación de

procedencia de las observaciones, se utilizaría el procedimiento aprobado por la Comisión Nacional de Vigilancia para el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

Además, se estableció que a más tardar el quince de abril de dos mil dieciséis, la Dirección Ejecutiva proporcionaría en medio impreso a los Organismos Públicos Locales el informe a las observaciones formuladas para que por su conducto se entregarán a los partidos políticos y candidatos independientes acreditados ante dicho órgano.

Por otra parte, establecen que la devolución de las Listas Nominales de Electores entregadas al Organismo Público Local, así como a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante la Comisión y los OPLE, se efectuaría dentro de los cinco días hábiles posteriores a la conclusión del plazo de impugnaciones del Proceso Electoral Local, por la misma vía en que fue entregada e indicando que la información no fue reproducida ni almacenada, a efecto de que la DERFE determinara su destino final de conformidad con los procedimientos establecidos conjuntamente con la CNV.

Ahora bien, por cuanto hace a la información confidencial los *Lineamientos* precisan que la Dirección Ejecutiva y sus áreas operativas implementarían los mecanismos que fueran necesarios para garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, motivo por el cual, los funcionarios públicos, los representantes de los partidos políticos y, en su caso, los representantes de los candidatos independientes que tuvieran acceso a los instrumentos y productos electorales, únicamente estarían autorizados para su uso y manejo; en los términos previstos en la legislación de la materia, así como de los compromisos adquiridos en virtud de los Convenios que al efecto se suscribieran.

## **B. Protección de datos personales de los ciudadanos**

Enseguida se expondrá el marco jurídico-normativo que **regula el acceso a los datos personales de los ciudadanos**:

**Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

**Título Primero**

**Capítulo I**

**De los Derechos Humanos y sus Garantías**

**Artículo 1o.** *En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

...

**Artículo 6o.**

...

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

**A.** *Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

...

**II.** *La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.*

...

**Artículo 16.**

...

*Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de*

*datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.*

...

### **Declaración Universal de Derechos Humanos**

#### **Artículo 12**

*Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.*

### **Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales**

#### **Artículo 8**

*Derecho al respeto de la vida privada y familiar*

*1 Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.*

*2 No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.*

### **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**

#### **Artículo 17**

*1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*

*2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

### **Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”**

#### **Artículo 11.- Protección de la Honra y de la Dignidad**

...

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

...

***Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública***

**Artículo 1.** La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

...

**Artículo 113.** Se considera información confidencial:

- I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;*
- II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y*
- III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.*

...

**Artículo 117.** Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información.

*No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:*

- I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público;*
- II. Por ley tenga el carácter de pública;*
- III. Exista una orden judicial;*

*IV. Por razones de seguridad nacional y salubridad general, o para proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación, o*

*V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos.*

*Para efectos de la fracción IV del presente artículo, el Instituto deberá aplicar la prueba de interés público. Además, se deberá corroborar una conexión patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación de la información confidencial y el interés público de la información.*

### **Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental<sup>44</sup>**

*Artículo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.*

...

*Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:*

*[...]*

*II. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable;*

*[..]*

*Artículo 18. Como información confidencial se considerará:*

*I. La entrega con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y*

*II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.*

---

<sup>44</sup> Ley vigente en lo que concierne a la protección de datos personales, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015, así como la base 4.3 del Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2015.

[...]

*Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:*

*I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con los Lineamientos que al respecto establezca el Instituto o las instancias equivalentes previstas en el Artículo 61;*

*II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido;*

*III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de los Lineamientos que establezca el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61;*

*IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;*

*V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y*

***VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.***

*Artículo 21. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información.*

## **Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de transparencia y acceso a la información pública<sup>45</sup>**

### **ARTÍCULO 1**

*De la aplicación del Reglamento*

*El presente Reglamento tiene por objeto establecer los órganos, criterios y procedimientos institucionales para garantizar a toda persona los derechos fundamentales de acceso a la información*

---

<sup>45</sup> Aprobado por el Consejo General del INE mediante Acuerdo INE/CG70/2014, del dos de julio de dos mil catorce.

*pública y de protección a los datos personales, en posesión del Instituto Nacional Electoral y de los partidos políticos.  
[...]*

### **ARTÍCULO 3**

*De la observancia del Reglamento*

*1. Este Reglamento es de observancia general y obligatoria para todos los órganos y servidores públicos del Instituto, los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales, de conformidad con la Ley y la reglamentación aplicable.  
[...]*

### **ARTÍCULO 12**

*De la información confidencial*

*1. Como información confidencial se considerará:*

- I. La entregada con tal carácter por los particulares al Instituto incluyendo la relativa al Registro Federal de Electores;*
- II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión en términos de las disposiciones legales aplicables, y*
- III. La que por disposición expresa de la legislación aplicable, sea considerada como confidencial.  
[...]*

### **ARTÍCULO 14**

*Del manejo de la información reservada y confidencial*

- [...]*
- 2. Será responsabilidad de los integrantes del Consejo, de los Consejos Locales y Distritales, del Comité y del Órgano Garante, el buen manejo de la información y documentación que reciban para el cumplimiento de sus atribuciones, en términos de lo dispuesto en la Ley, la Ley de Transparencia, y el presente Reglamento, respectivamente.  
[...]*

## **Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los principios, criterios, plazos y procedimientos para garantizar la protección de datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral y Partidos Políticos<sup>46</sup>**

### *1. Del objeto del Acuerdo*

*1. El Acuerdo tiene por objeto establecer los órganos, criterios, plazos y procedimientos para garantizar a toda persona el derecho humano a la protección de sus datos personales, así como el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales que*

---

<sup>46</sup> Aprobado mediante acuerdo INE/CG312/2016, del cuatro de mayo de dos mil dieciséis.



*obran en posesión del Instituto Nacional Electoral y de los Partidos Políticos Nacionales, en términos de las disposiciones previstas en los artículos 6, apartado A, fracciones II y III, y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.*

*2. Del ámbito de aplicación y excepción del Acuerdo*

*1. Las disposiciones del Acuerdo son de observancia general y obligatoria para todas las áreas y servidores públicos del Instituto, así como para los Partidos Políticos Nacionales.*

*[...]*

*2. [...]*

*El acceso a los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por parte de los integrantes de los consejos General, locales y distritales, las comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Partidos Políticos Nacionales, se regirá por los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega a dichos datos que para esos efectos emita el Consejo General, a propuesta de la Comisión del Registro Federal de Electores, en los cuales además se deberán determinar los mecanismos de consulta y entrega de estos datos personales a los Organismos Electorales locales, para la organización de las elecciones de las entidades federativas.*

*[...]*

*10. Disposiciones aplicables en materia de datos personales.*

*1. Los responsables no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de datos personales, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable;*

*2. Los servidores públicos del Instituto y **funcionarios de los partidos políticos que intervengan en el tratamiento de datos personales, deberán garantizar la protección en el manejo de dicha información, por lo que no podrá ser comunicada salvo en los casos previstos por una ley.***

*[...]*

*11. Principios generales de protección de datos personales*

*1. Los responsables deberán observar los principios de licitud, proporcionalidad, calidad, información, seguridad, consentimiento y finalidad en el tratamiento de los datos personales.*

*12. Principio de licitud*

*1. El tratamiento de datos personales por parte de los responsables deberá obedecer exclusivamente a las facultades, atribuciones o competencias que la normatividad aplicable les confiere.*

*13. Principio de proporcionalidad*

*1. El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.*

*14. Principio de calidad*

1. *Se deberán adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, correctos, completos y actualizados los datos personales en posesión del responsable, a fin de no alterar su veracidad, y que el Titular no se vea afectado por tal situación.*
2. *Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas en la Manifestación de Protección de Datos Personales y que motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación de los mismos, se informará de tal situación al titular.*
3. *Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate y considerar los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de los datos personales.*

*[...]*

**16. Principio de seguridad**

1. *Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales, o el tipo de tratamiento que se efectué, los responsables deberán establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción, o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.*

*[...]*

**19. Principio de finalidad**

1. *Los datos personales en posesión de los responsables deberán tratarse únicamente para la o las finalidades para las cuales fueron obtenidos. Dichas finalidades deberán ser concretas, lícitas, explícitas y legítimas.*

*[...]*

**24. Deber de confidencialidad**

1. *Los responsables deberán establecer controles o mecanismos que tengan por objeto, que todos los servidores públicos, o bien los funcionarios de los partidos políticos para el caso de los padrones de afiliados y militantes, y cualquier persona que intervenga en cualquier fase del tratamiento de los datos personales guarden absoluta confidencialidad de estos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el mismo. Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la información pública.*

El artículo 1 de Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

Lo anterior es relevante ya que, el legislador no consideró que una posible vulneración a la intimidad podría provenir exclusivamente de autoridades, sino que tomó en cuenta a todos aquellos entes o sujetos que de una u otra forma se encuentran en contacto con el manejo, uso, datos personales, como lo son los partidos políticos y las personas físicas que los representan al estar en invariable vinculación con datos personales, en este caso a través del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, a los cuales, por disposición legal tienen acceso permanente y se les entregan cuando así lo soliciten en términos de ley.

Por otro lado, por lo que se refiere al reconocimiento al derecho a la privacidad en el ámbito internacional, de la que el derecho a la protección de los datos personales es una expresión de la misma, han sido diversos los instrumentos internacionales que han reconocido su importancia; así, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (10 de diciembre de 1948), establece el derecho de la persona a no ser objeto de injerencias en su vida privada y familiar, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación, gozando del derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

En el mismo sentido, el artículo 8, del Convenio para la Protección de los Derechos y las Libertades Fundamentales (14 de noviembre de 1950), reconoce el derecho de la persona al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio y correspondencia. Por su parte, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de diciembre de 1966), señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

En el mismo tenor, la Convención Americana sobre derechos humanos (22 de noviembre de 1969) en su artículo 11, apartado 2, establece que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

Ubicándonos ahora en el ámbito nacional, tenemos que con fecha 21 de abril de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto regular el derecho a la información en una de sus vertientes, la del acceso a la información.

En este ordenamiento jurídico, los límites al derecho de acceso a la información están señalados de manera expresa en el artículo 113, de la Ley Federal de Transparencia, en donde se establece una serie de restricciones relacionadas con el manejo de los datos personales. Asimismo, el Título Cuarto, Capítulo I, de la Ley en cita, establece una serie de obligaciones para aquellos sujetos que pretendan permitir el acceso a información confidencial de los particulares.

Ahora bien, la reforma al artículo 6, de la Constitución Federal planteó diversos retos al derecho de acceso a la información y la transparencia gubernamental en nuestro país que se materializaron en ocho fracciones. En la fracción segunda de este dispositivo se estableció como uno de los principios y bases para el ejercicio del derecho a la información, que lo referente a la vida privada y los datos personales serían protegidos en los términos y las excepciones que estableciera la ley.

El primero de junio de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el *Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, con la finalidad de reconocer en nuestro máximo ordenamiento jurídico, el derecho a la protección de los Datos Personales, en los siguientes términos:

*"Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros".*

Con la reforma al artículo 16 constitucional finalmente se reconoce y da contenido al derecho a la protección de datos personales. En ese sentido, en la reforma se plasman los derechos con los que cuentan los titulares de los datos personales como lo son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición (denominados por su acrónimo como derechos ARCO).

Por otra parte, se hace referencia a la existencia de principios a los que se debe sujetar todo tratamiento de datos personales, así como los supuestos en los que excepcionalmente dejarían de aplicarse dichos principios. Dentro de los más importantes podemos señalar los de licitud, proporcionalidad, calidad seguridad y finalidad.

**Licitud:** el tratamiento de datos personales deberá obedecer exclusivamente a las facultades, atribuciones o competencias que la normatividad aplicable les confiere.

**Proporcionalidad:** sólo se deberán tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento.

**Calidad:** implica, entre otras cuestiones, que los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a las disposiciones aplicables a la materia de que se trate.

**Seguridad:** se deberán establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción, o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

**Finalidad:** los datos personales en posesión de los responsables deberán tratarse únicamente para la o las finalidades para las cuales fueron obtenidos. Dichas finalidades deberán ser concretas, lícitas, explícitas y legítimas.

Además de los principios anteriormente enlistados, existen principios internacionales complementarios en materia de protección de datos que es pertinente tener presentes a la hora de resolver el presente procedimiento.

**Límite de uso:** consiste en no divulgar los datos personales o aquellos utilizados para propósitos distintos para los que fueron recabados.

**Protección a la seguridad:** consiste en proteger los datos personales e información, mediante mecanismos razonables de seguridad en contra de riesgos, como pérdida, acceso no autorizado, destrucción, utilización, modificación o divulgación de datos.

**Responsabilidad:** consiste en la responsabilidad del controlador de datos de cumplir efectivamente con medidas suficientes para implementar los principios anteriormente enunciados.

Como se advierte, el derecho a la intimidad está relacionado con una adecuada normativa en materia de protección de datos personales al tratarse estos de derechos fundamentales cuya vulneración podría poner en riesgo incluso a la persona misma.

La afirmación anterior tiene sustento en razón de que el conjunto de datos personales puede generar no sólo la identificación de la persona a la cual pertenecen, sino la posibilidad de inferir a partir de ellos datos sensibles de las personas como lo son religión, raza o grupo étnico, estado de salud, situación financiera, etcétera, lo que podría poner en riesgo al sujeto tutelado.

A partir de lo anterior, se realizará el análisis de la conducta atribuida a los sujetos denunciados.

#### **4. PRUEBAS**

A continuación, se listarán y analizarán las pruebas que obran en el expediente, que se estiman trascendentes para la resolución del presente asunto, mismas que se describen a continuación:

#### **DOCUMENTALES PRIVADAS**

- 1) Copia simple del correo electrónico de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis<sup>47</sup>, enviado desde la cuenta [cvickery2@yahoo.com](mailto:cvickery2@yahoo.com), por Chris

---

<sup>47</sup> Visible a foja 8 del Legajo 1, del expediente.

Vickery, a través del cual hizo del conocimiento de René Miranda Jaimes, Director del Registro Federal de Electores del INE, la presunta localización de una base de datos denominada “PadronIFE” expuesta públicamente en una página de internet, que al parecer pertenece al PRI, de acuerdo con los datos contenidos en el Protocolo de Internet (IP).

- 2) Copia simple de la descripción del protocolo para la obtención de evidencia<sup>48</sup>, con el objeto de recabar archivos de información relacionados con el servidor contenido en la página de internet denunciada.
- 3) Oficio PRI/REP-INE/222/2016<sup>49</sup>, signado por Alejandro Muñoz García, representante propietario del PRI ante el Consejo General del INE, a través del cual remite el escrito firmado por Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, en el que señaló lo siguiente:

Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores en Sinaloa, el trece de febrero de dos mil quince, recibió la Lista Nominal de Electores de Revisión en un archivo digital cifrado en dispositivo de almacenamiento USB, mediante oficio VRFE/89/2015, firmado por Eduardo Fierro Barraza, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa. Una vez recibida dicha información, hizo entrega del dispositivo USB, así como de las guías para el descifrado del archivo digital y guía rápida para la verificación del código de integridad, a César Manuel Ochoa Salazar, quien fungía como Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en la referida entidad federativa, para que el área correspondiente pudiera hacer las observaciones a la Lista Nominal de Electores.

Posteriormente, el diecinueve de noviembre de dos mil quince, Ogla Rita Bojórquez Gámez, en acatamiento a lo establecido en el numeral 33 de los Lineamientos expedidos por el Consejo General del INE en lo concerniente a esa materia, hizo entrega del Listado Nominal de Revisión en un archivo digital cifrado contenido en un dispositivo USB, así como del disco compacto ASSCI ancho fijo, el campo de clave de elector de la Lista Nominal Definitiva a nivel estado, Distrito, municipio y sección, con el corte por cuadernillo, que había recibido el quince de mayo de dos mil quince, al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa.

Que no celebró ningún contrato con la empresa *Digital Ocean Inc*, para el almacenamiento de la información en internet, correspondiente a la Lista Nominal de Electores para revisión,

---

<sup>48</sup> Visible a fojas 14 a 16, del Legajo 1, del expediente.

<sup>49</sup> Visible a fojas 1378 a 1379, del Legajo 3, del expediente.

que la Vocalía del Registro Federal de Electores del INE en Sinaloa, entregó a los partidos políticos en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.

A su escrito anexo los documentos que se enlistan a continuación:

- Copia simple del oficio VRFE/89/2015<sup>50</sup>, firmado por Eduardo Fierro Barraza, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sinaloa, dirigido a Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante propietaria del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores en Sinaloa, con motivo de la entrega de la Lista Nominal de Electores de Revisión en un archivo digital.
- Copia simple del acuse de recibo de trece de febrero de dos mil quince<sup>51</sup>, del escrito dirigido a César Manuel Ochoa Salazar, Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, a través del cual Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante propietaria del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores en el estado en cita, le remitió al mencionado Secretario el dispositivo USB y el oficio de recepción de la Lista Nominal de Electores de Revisión, así como los Lineamientos para el uso debido de la información contenida en el dispositivo electrónico.
- Copia simple del oficio VRFE/1012/2015<sup>52</sup>, de nueve de noviembre de dos mil quince, dirigido a Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante propietaria del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores en Sinaloa, por el que Eduardo Fierro Barraza, Presidente de la Comisión Local de Vigilancia, solicitó a dicha representante reintegrara de manera inmediata la USB que contenía la Lista Nominal de Electores, así como el medio digital en formato ASSCI, con motivo de la conclusión del Proceso Electoral Federal.

---

<sup>50</sup> Visible a fojas 1384 a 1385, del Legajo 3, del expediente.

<sup>51</sup> Visible a foja 1386, del Legajo 3, del expediente.

<sup>52</sup> Visible a foja 1387, del Legajo 3, del expediente.



- Copia simple del acuse de recibo de diecinueve de noviembre de dos mil quince<sup>53</sup>, del escrito dirigido a Eduardo Fierro Barraza, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en el estado de Sinaloa, por el cual, Oglá Rita Bojórquez Gámez, representante propietaria del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de Electores en dicho estado, remitió el Listado Nominal de Revisión en un archivo digital cifrado en un dispositivo USB, así como el disco compacto en formato ASSCI ancho fijo, el campo de clave de elector de la Lista Nominal Definitiva a nivel estado, Distrito, municipio y sección, con el corte por cuadernillo, utilizado en la Jornada Electoral.
- 4) Oficio PRI/REP-INE/253/2016<sup>54</sup>, signado por Alejandro Muñoz García, representante del PRI ante el Consejo General del INE, por el que remitió el documento firmado por Jesús Gonzalo Estrada Villareal, Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, en el cual precisó lo siguiente:

*Que el quince de febrero de dos mil dieciséis, la representación del PRI, recibió la Lista Nominal de Electores de Revisión en un archivo digital cifrado en un dispositivo de almacenamiento USB, el cual fue proporcionado por el Vocal del Registro Federal de Electores del INE en Sinaloa.*

*Asimismo, precisó que una vez recibida la información de cuenta, inmediatamente fue entregada a Teresa de Jesús Nieto Ríos, quien funge como Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa.*

*De igual forma, indicó que el cinco de julio de dos mil dieciséis, en acatamiento a los Lineamientos expedidos por el Consejo General del INE, hizo entrega a la Vocalía del Registro Federal de Electores del INE en Sinaloa, del dispositivo de almacenamiento USB que contenía la Lista Nominal de Electores de Revisión.*

*Por otra parte, refirió no celebró algún contrato con la empresa Digital Ocean Inc, para el almacenamiento de la información en una página de internet, correspondiente al Listado Nominal de Electores para Revisión, proporcionado por la Vocalía del Registro Federal de Electores del INE en Sinaloa, en el marco del Proceso Electoral Federal 2015-2016.*

---

<sup>53</sup> Visible a foja 1388, del Legajo 3, del expediente.

<sup>54</sup> Visible a foja 1748 a 1749, del Legajo 3, del expediente.

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

*Por último, señaló que las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría de Finanzas y Administración del PRI en Sinaloa, son los únicos que cuentan con facultades estatutarias para celebrar contratos.*

A su escrito anexó el documento por medio del cual Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, representante del PRI ante el Instituto Electoral del estado de Sinaloa, hizo entrega del dispositivo de almacenamiento USB que contiene la Lista Nominal de Electores en formato digital para revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, a Eduardo Fierro Barraza, Presidente de la Comisión local de Vigilancia del Registro Federal de Electores en la citada entidad federativa.

- 5) Oficio PRI/REP-INE/081/2018<sup>55</sup>, firmado por Alejandro Muñoz García, representante suplente del PRI ante el Consejo General del INE, mediante el cual remitió el documento signado por Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, adscrito al Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, en el cual se precisa que en los archivos de dicho Comité no se localizó registro alguno con los domicilios de José Alberto Salas Beltrán y César Manuel Ochoa Salazar, pero si localizó el domicilio de Teresa de Jesús Nieto Ríos, proporcionando los datos correspondientes.

Las pruebas listadas en el presente apartado revisten el carácter de documentales privadas, cuyo valor probatorio es indiciario de conformidad con lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso b); 462, párrafos 1 y 3, de la *LGIPE* y 27, párrafos 1 y 3, del *Reglamento de Quejas*.

## **DOCUMENTALES PÚBLICAS**

- 1) Copia simple del acta de presentación de la denuncia con número de acuerdo FED/FEPADE/UNAI-DF/0000295/2016,<sup>56</sup> presentada ante la Procuraduría General de la República, por Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos Tecnológicos de la *DERFE*, con el objeto de que la

---

<sup>55</sup> Visible a foja 1987, del Legajo 3, del expediente.

<sup>56</sup> Visible a fojas 17 a 20, del Legajo 1, del expediente.

FEPADE, conociera de los hechos materia de la vista proporcionada por la *DERFE*.

- 2) Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/047/2016 de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis<sup>57</sup>, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía Electoral del *INE*, con el objeto de certificar la existencia de una base de datos en un servicio de Hosting en Internet llamado “DigitalOcean”, con datos que pudieran corresponder a la información del Padrón Electoral y/o de la Lista Nominal de Electores.
- 3) Oficio CPT/2527/2016<sup>58</sup>, firmado por Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del *INE*, a través del cual proporcionó a Alfredo Cid García, Director de la Secretaría Técnica Normativa, el original del documento denominado *Lista de electores mexicanos disponible en servidor de Digital Ocean. Procedimiento para identificar la fecha de corte de la información descargada del sitio, así como los representantes partidistas a quienes les fue entregada dicha información. Mayo 2016*.
- 4) Copia certificada del acuerdo INE/CG249/2014<sup>59</sup>, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba el *PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA REVISIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE LAS COMISIONES DE VIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015*.
- 5) Copia certificada del acuerdo INE/CG38/2016<sup>60</sup>, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los *LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS PLAZOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO Y ENTREGA DEL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE*

---

<sup>57</sup> Visible a fojas 52 a 142, del Legajo 1, del expediente.

<sup>58</sup> Visible a foja 144, del Legajo 1, del expediente.

<sup>59</sup> Visible a fojas 153 a 163, del Legajo 1, del expediente.

<sup>60</sup> Visible a fojas 180 a 224, del Legajo 1, del expediente.

**ELECTORES A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2015-2016.**

- 6) Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/054/2016 de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis<sup>61</sup>, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía Electoral del *INE*, con el objeto de constar el *EVENTO DE OBTENCIÓN DEL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2015-2016*.
- 7) Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/055/2016 de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis<sup>62</sup>, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía Electoral del *INE*, para dar fe de la *EXTRACCIÓN DE ADN QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESGUARDO DE ESTE INSTITUTO EN LA CAJA FUERTE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA (UNICOM), ASÍ COMO EL DESCIFRADO DEL DISCO QUE CONTIENE LAS MARCAS DE ADN DE LOS LISTADOS NOMINALES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2015-2016*.
- 8) Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/053/2016 de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis<sup>63</sup>, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía Electoral del *INE*, consistente en la *VERIFICACIÓN DE QUE LA BASE DE DATOS DEL SERVICIO DE “HOSTING”, EN INTERNET LLAMADO “DIGITALOCEAN”, YA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE*.
- 9) Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/056/2016 de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis<sup>64</sup>, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía Electoral del *INE*, con el objeto de dar fe del *COTEJO DE LA EVIDENCIA OBTENIDA DEL SERVICIO DE “HOSTING”, EN INTERNET LLAMADO “DIGITALOCEAN” CONTRA LAS MARCAS DE RASTREABILIDAD*

---

<sup>61</sup> Visible a fojas 242 a 276, del Legajo 1, del expediente.

<sup>62</sup> Visible a fojas 278 a 318, del Legajo 1, del expediente.

<sup>63</sup> Visible a fojas 380 a 416, del Legajo 1, del expediente.

<sup>64</sup> Visible a fojas 419 a 1375, del Legajo 1, del expediente.

*CONTENIDAS EN EL ARCHIVO “ADN” CON QUE CUENTA ESTE INSTITUTO.*

- 10)** Copia certificada del acuse de recibo del oficio INE/DERFE/0103/2015, de veintinueve de enero de dos mil quince<sup>65</sup>, mediante el cual René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, comunicó a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas de este Instituto, diversas indicaciones para la atención de los Vocales del Registro Federales Electores, respecto de la entrega de la Lista Nominal de Electores para observaciones dos mil quince.
- 11)** Original del acuse de recibo del correo electrónico de treinta de enero de dos mil quince<sup>66</sup>, enviado desde la cuenta [maribel.angeles@ine.mx](mailto:maribel.angeles@ine.mx), mediante el cual se comunicó al personal adscrito a la Vocalía del Registro Federal de Electores en Sinaloa, las indicaciones para el enrolamiento de los representantes partidistas.
- 12)** Copia certificada del documento denominado “Sistema para el cifrado de la lista nominal<sup>67</sup>, registro de participante”, correspondiente al enrolamiento de Oglá Rita Bojórquez Gámez.
- 13)** Manual de operación para el enrolamiento de llaves públicas. Versión 2.0<sup>68</sup>.
- 14)** Escritura pública número 32,895<sup>69</sup>, expedida por la Notaria Pública Rocío Gutiérrez Rivera, en la que consta la generación de los archivos correspondientes a la Lista Nominal de Electores para observaciones 2015.
- 15)** Copia certificada del “Acta entrega-recepción de los paquetes correspondientes al Proceso Electoral Federal y Local<sup>70</sup>, de once de febrero de dos mil quince, mismos que contienen sobres con la Lista Nominal de

---

<sup>65</sup> Visible a fojas 1418 a 1420, del Legajo 3, del expediente.

<sup>66</sup> Visible a fojas 1422 a 1423, del Legajo 3, del expediente.

<sup>67</sup> Visible a foja 425, del Legajo 3, del expediente.

<sup>68</sup> Visible a fojas 1427 a 1433, del Legajo 3, del expediente.

<sup>69</sup> Visible a fojas 1435 a 1503, del Legajo 3, del expediente.

<sup>70</sup> Visible a fojas 1505 a 1536, del Legajo 3, del expediente.

Electores, encriptada en dispositivos USB para su debida revisión”, en la que consta la entrega al Vocal del Registro Federal de Electores de Sinaloa, de los dispositivos USB con la Lista Nominal de Electores de Revisión para las representaciones partidistas acreditadas.

- 16)** Copia certificada del acuse de recibo del oficio VRFE/89/2015<sup>71</sup>, de trece de febrero de dos mil quince, en la que consta la entrega de la Lista Nominal de Electores para observaciones dos mil quince, a la representante del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa.
- 17)** Copia certificada del oficio VRFE/1012/2015<sup>72</sup>, de nueve de noviembre de dos mil quince, a través del cual el Presidente de la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, solicita a la representante del PRI ante el dicho órgano, la devolución de la Lista Nominal de Electores para observaciones dos mil quince, que le fue entregada el trece de febrero del año en comento.
- 18)** Copia certificada del acuse de recibo de diecinueve de noviembre de dos mil quince<sup>73</sup>, por el que Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante propietaria ante la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, devuelve al Vocal del Registro Federal de Electores de dicho estado, el dispositivo electrónico con la Lista Nominal de Electores para observaciones dos mil quince.
- 19)** Copia certificada del acuse de recibo del oficio INE/VRFE/0729/2016<sup>74</sup>, de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual el Vocal del Registro Federal de Electores de Sinaloa, devuelve el dispositivo electrónico con la Lista Nominal de Electores para observaciones dos mil quince, a la Coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE.

---

<sup>71</sup> Visible a fojas 1538 a 1539, del Legajo 3, del expediente.

<sup>72</sup> Visible a foja 1541, del Legajo 3, del expediente.

<sup>73</sup> Visible a foja 1543, del Legajo 3, del expediente.

<sup>74</sup> Visible a fojas 1545 a 1546, del Legajo 3, del expediente.

- 20)** Copia certificada del acuse de recibo del oficio INE/DERFE/136/2016<sup>75</sup>, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por el que el René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, hizo llegar a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, las indicaciones para la entrega de la Lista Nominal de Electores para observaciones dos mil dieciséis.
- 21)** Copia certificada del oficio UNE/UTVOPL/027/2016<sup>76</sup>, de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, a través del cual el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, requirió a los Institutos Electorales Locales la remisión de las solicitudes formuladas por las representaciones partidistas para la entrega de los listados nominales.
- 22)** Copia certificada del acuse de recibo del oficio VRFE/105/2016<sup>77</sup>, de quince de febrero de dos mil dieciséis, en el que Eduardo Fierro Barraza, Presidente de la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, hizo entrega a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, representante propietario del PRI ante el INE del estado de Sinaloa, en un sobre cerrado y sellado de un dispositivo de almacenamiento denominado USB que contiene la Lista Nominal de Electores en formato digital para revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis.
- 23)** Copia certificada del acuse de recibido del oficio INE/JLE-SIN/0377/2016<sup>78</sup>, de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, por el cual el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto, remitió a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, las solicitudes originales de las representaciones partidistas para la entrega de los listados nominales.
- 24)** Copia simple del acuse de recibo del oficio IEES/SG/0129/2016<sup>79</sup>, de tres de febrero de dos mil dieciséis, por el que el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del estado de Sinaloa, informó al Director de la Unidad Técnica de

---

<sup>75</sup> Visible a fojas 1548 a 1550, del Legajo 3, del expediente.

<sup>76</sup> Visible a foja 1552, del Legajo 3, del expediente.

<sup>77</sup> Visible a foja 1554, del Legajo 3, del expediente.

<sup>78</sup> Visible a foja 1556, del Legajo 3, del expediente.

<sup>79</sup> Visible a foja 1557, del Legajo 3, del expediente.

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, sobre la notificación de la circular No. INE/UTVOPL/027/2016, efectuada a los representantes de los partidos políticos acreditados ante dicho órgano electoral, a efecto de que los referidos sujetos indicarán si requerían que les fuera entregada la Lista Nominal de Electores para Revisión y en su caso, formular la solicitud por escrito a más tardar el treinta y uno de enero de dos mil dieciséis.

- 25)** Acuse de recibo del oficio CPT/2992/2016<sup>80</sup>, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, mediante el cual Alejandro Sosa Duran, adscrito a la Coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, remitió a Alfredo Cid García, Director de la Secretaría Técnica Normativa, el correo electrónico de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, solicitando a los Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales Ejecutivas de las entidades con Proceso Electoral Local en dos mil dieciséis, proporcionaran el acuse de recibo del oficio INE/DERFE/0139/2016.
- 26)** Copia certificada del acuse de recibo del oficio INE/DERFE/139/2016<sup>81</sup>, de dos de febrero de dos mil dieciséis, por el cual René Miranda Jaimes, Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, solicitó el apoyo de los Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales Ejecutivas del INE, referente a las entidades con Proceso Electoral Local dos mil dieciséis.
- 27)** Copia simple del acuse de recibo del oficio CPT/2644/2016<sup>82</sup>, por el que Alejandro Andrade Jaimes, Coordinador de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, remitió a Alfredo Cid García, Director de la Secretaría Técnica Normativa, el Manual de operación para el enrolamiento de llaves públicas. Versión 3.0.
- 28)** Copia certificada del enrolamiento de José Mora León<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> Visible a foja 1559, del Legajo 3, del expediente.

<sup>81</sup> Visible a fojas 1563 a 1565, del Legajo 3, del expediente.

<sup>82</sup> Visible a fojas 1567 a 1569, del Legajo 3, del expediente.

<sup>83</sup> Visible a foja 1591, del Legajo 3, del expediente.



- 29)** Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/002/2016 de nueve de febrero de dos mil dieciséis<sup>84</sup>, instrumentada por personal adscrito a la Oficialía Electoral del *INE*, con motivo del “EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA SU REVISIÓN, A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA O ANTE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES (OPLES).
- 30)** Copia certificada del escrito firmado por Jesús Gonzalo Estrada Villareal<sup>85</sup>, persona adscrita al Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, a través del cual solicitó a la Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del estado de Sinaloa, les fuera entregada la Lista Nominal de Electores para su Revisión, facultando para recibir el mencionado Listado a José Mora León y al propio Jesús Gonzalo Estrada Villareal.
- 31)** Oficio RPPC/DARC/3103/2016<sup>86</sup>, signado por el Director de Acervos Registrales y Certificados de la Ciudad de México, por medio del cual informó que en dicha Institución no se tenía registrado algún domicilio a nombre de Digital Ocean, Inc.
- 32)** Oficio UGAJ/DGPC/401/2016<sup>87</sup>, firmado por Héctor Jaime Leyva Baños, Director General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, por el que indicó que el domicilio de DigitalOcean, se encuentra en los Estados Unidos de América, proporcionando los datos concernientes al mismo.
- 33)** Oficio PFC/SPJ/DGCR/687/2016<sup>88</sup>, signado por la Directora de lo Contencioso y de Recursos de la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal del Consumidor, por medio del cual informó que en los

---

<sup>84</sup> Visible a fojas 1593 a 1720, del Legajo 3, del expediente.

<sup>85</sup> Visible a foja 1722, del Legajo 3, del expediente.

<sup>86</sup> Visible a foja 1743, del Legajo 3, del expediente.

<sup>87</sup> Visible a foja 1744, del Legajo 3, del expediente.

<sup>88</sup> Visible a foja 1747, del Legajo 3, del expediente.

archivos de dicha Institución no se localizó algún registro con el domicilio de *Digital Ocean*.

- 34)** Oficio INE-UTF/DG/17263/16<sup>89</sup>, firmado por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, a través del cual proporcionó la información remitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que dicha dependencia precisó que en los archivos con los que cuenta no se localizó algún registro con el nombre de la empresa *Digital Ocean, Inc*.
- 35)** Oficio 1440/FEPADE/2016<sup>90</sup>, signado por Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, mediante el cual informó que se solicitó el apoyo de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, para que se requiriera información al proveedor del servicio *Digital Ocean, Inc*, relativa al presunto uso indebido de las Listas Nominales de Electores para Revisión que el INE entregó a los Partidos Políticos Nacionales en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015.
- 36)** Oficio PF/DIVCIENT/CPDE/DGCERT/0224/2016<sup>91</sup>, firmado por Oliver González Barrales, Titular de la Dirección General del Centro Especializado de la Policía Federal, en el cual informó que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se remitió a la Unidad de Investigación y Litigación en el Distrito Federal, de la FEPADE, un informe policial, relacionado con el análisis de la información de la Lista Nominal de Electores contenida en el servicio de la nube *Digital Ocean*, documento que obra en el número de expediente FED/REPADE/UNAI-DF/0000295/2016.
- 37)** Oficio 1647/FEPADE/2016<sup>92</sup>, signado por Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, en el cual informó que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, se encontraba analizando la posibilidad de autorizar el uso de la información y documentación que se obtuviera para la

---

<sup>89</sup> Visible a foja 1753, del Legajo 3, del expediente.

<sup>90</sup> Visible a foja 1767, del Legajo 3, del expediente.

<sup>91</sup> Visible a foja 1768, del Legajo 3, del expediente.

<sup>92</sup> Visible a foja 1773, del Legajo 3, del expediente.

investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/0000162/2016 en el procedimiento sancionador UT/SCG/Q/CG/24/2016, para lo cual, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, solicitaba un planteamiento puntualizado sobre la importancia de dicho procedimiento sancionador y sus alcances. Al respecto, anexó a su escrito el oficio DGPI/2159/16, a través del cual la referida Subprocuraduría solicitaba al INE, puntualizara la utilización de la información proporcionada por la Oficina de Asuntos Internacionales de los Estados Unidos de América.

**38)** Oficio 2761/FEPADE/2016<sup>93</sup>, firmado por Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, por el cual informó que la Dirección de Asuntos Internacionales de la PGR, a través de oficio DGPI/3363/16, señaló que de acuerdo a los planteamientos realizados por el INE, se encontraba materialmente imposibilitada en plantear al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, la autorización para que la información y documentación que se obtuviera de la empresa *Digital Ocean, Inc*, que fuera aportada a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-DF/0000162/2016, se utilizara en el procedimiento administrativo UT/SCG/Q/CG/24/2016, toda vez que las asistencias jurídicas internacionales tiene como propósito brindar la colaboración entre países siempre y cuando se trate de asuntos de naturaleza penal, por lo que no era posible utilizar la misma en asuntos de otra índole. Al respecto, anexó copia simple del oficio DGPI/3363/16.

**39)** Oficio INE/JD/DSL/SAP/25540/2017<sup>94</sup>, signado por Cuitláhuac Villegas Solís, Titular de la Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del INE, por medio de cual informó sobre el estado procesal que guarda el expediente FED/FEPADE/UNAI-DF/0000295/2016.

Las anteriores probanzas poseen valor probatorio pleno, al tratarse de **documentales públicas** por consistir en **documentos certificados u originales** emitidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, y cuyo contenido o veracidad no está puesta en duda por elemento diverso, en términos de lo

---

<sup>93</sup> Visible a foja 1780, del Legajo 3, del expediente.

<sup>94</sup> Visible a foja 1884, del Legajo 3, del expediente.

previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, párrafo 2, de la *LGPE*, y 22, párrafo 1, fracción I, inciso a), y 27, párrafos 1 y 2, del *Reglamento de Quejas*.

#### 4.1. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

A efecto de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos materia del presente asunto, se verificará, en principio, la existencia de los mismos, así como las circunstancias en que se realizaron, a partir de las constancias probatorias que obran en el expediente y que han sido previamente enunciadas.

Asimismo, cabe precisar que el análisis relacionado con la marca de rastreabilidad *ADN* y su aplicación para determinar la correspondencia con el partido político denunciado será desarrollado en el apartado correspondiente al punto 5.1 relativo al “*Procedimiento de cifrado (ADN) de las listas nominales de electores de revisión entregadas a los partidos políticos*” y 5.2 denominado “*Identificación del ADN en la lista nominal para revisión detectada en el servidor Digital Ocean*” por lo que en el presente apartado únicamente se hará referencia genérica a lo que, conforme a las constancias de autos, se tiene acreditado.

- 1) Se tiene por acreditado que personal de la DERFE en presencia de personal de la Oficialía Electoral, ambas de este Instituto corroboraron la existencia de la información reportada en la vista formulada por el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores al Secretario Ejecutivo del INE, con motivo del correo electrónico recibido por el Coordinador de Procesos Tecnológicos de la *DERFE* de este Instituto, mediante el cual Chris Vickery informó lo siguiente:

*“He localizado otra base de datos MONGODB expuesto públicamente que parece contener una gran cantidad de datos demográficos de México. La tabla más grande en la base de datos titulada “PadronIFE”: y contiene más de 2.000.000 de entradas. Es evidente que no es tan grande como la base de datos anterior, pero he encontrado esta nueva base de datos y tiene muchas tablas adicionales y sub-bases de datos que contienen información mucho más detallada que no estaba presente en la base de datos de Movimiento Ciudadano.*

*Parece que este servidor pertenece al partido político PRI (basado en mi breve inspección de la dirección IP). Aquí están los detalles que tendrá que investigar:*

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

*Dirección IP: 162.243.158.165*

*Puerto: 27016*

*Software: MongoDB*

*No hay ninguna contraseña o nombre de usuario.*

*He adjuntado varias capturas de pantalla que ilustran aún más la búsqueda.*

*Mi español es limitado así que estoy curioso sobre los datos adicionales que no he traducido. No estoy totalmente seguro de que uso le esté dando el PRI.*

*Tu eres la primera persona a la que le notifico. Nadie sabe en la actualidad.*

*Por favor, hazme saber si necesitas cualquier información adicional.*

*Sinceramente,*

*Chris Vickery*<sup>95</sup>

Lo anterior fue realizado mediante la aplicación del “*Protocolo para la obtención de evidencia*”.

- 2) Se tiene por acreditado que mediante la aplicación del protocolo indicado en el inciso anterior se logró identificar y copiar la información alojada en una base de datos en un servicio de hosting en internet llamado “*Digital Ocean*”, ello con el objeto de verificar si la misma correspondía con la información del padrón electoral y/o de la lista nominal de electores.
- 3) Se tiene por acreditado que mediante la aplicación del “*Protocolo para la obtención de evidencia*” se ejecutaron, por parte de personal de las áreas de éste Instituto antes referidas, las siguientes acciones:
  - a. Identificación de las especificaciones del equipo de cómputo donde se realizan las tareas;
  - b. Ingreso al servidor reportado;
  - c. Generación de las consultas ingresando la IP 162.243.158.165 y puerto 27017 e impresión de las pantallas correspondientes;
  - d. Verificación de datos generales de las base de datos del servidor reportado;
  - e. Descarga de la información;
  - f. Obtención de códigos de integridad del archivo descargado;
  - g. Cifrado de archivos de evidencia;

---

<sup>95</sup> Traducción tomada del oficio INE/DERFE/692/2016, mediante el cual se da vista al Secretario Ejecutivo del INE, Visible a fojas 1 a 7, del Legajo 1, del expediente.

- h. Obtención de códigos de archivos txt;
  - i. Generación de discos compactos;
  - j. Resguardo de discos compactos por parte de personal de la DERFE y de Oficialía Electoral; y
  - k. Borrado seguro de toda la información generada para la obtención de evidencia.
- 4) Se tiene por acreditado que la información contenida en la base de datos precisada en el inciso anterior corresponde a la incluida en la Lista Nominal de Electores para Revisión entregada a los partidos políticos acreditados ante las comisiones de vigilancia en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, en términos del Acuerdo del Consejo General de este Instituto número INE/CG249/2014, la cual fue actualizada con datos de la Lista Nominal de Electores de Revisión entregada a los representantes de los partidos políticos en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016.
- 5) Se tiene por acreditado que el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis personal de la DERFE en presencia de personal de la Oficialía Electoral ambos de este Instituto, corroboraron que la información del Registro Federal de Electores ya no se encontraba en el servicio de hosting en internet denominado "*Digital Ocean*".
- 6) Se tiene por acreditado que la información obtenida corresponde a municipios del Estado de Sinaloa.
- 7) Se tiene por acreditado que del análisis de la información obtenida se encontraron 2,072,585 (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco) registros de la base de datos reportada.
- 8) Se tiene por acreditado que, del cruce informático realizado por personal de la DERFE y de la Oficialía Electoral de este Instituto, se obtuvo que las diferencias detectadas en el archivo de evidencia descargado del servidor denominado "*Digital Ocean*" correspondían a las marcas de rastreabilidad

conocidas como “marca de *ADN*” incorporadas a la Lista Nominal de Electores de Revisión 2015.

- 9) Asimismo, se acreditó que personal de la *DERFE* y de la Unidad Técnica de Servicios de Información, en presencia de personal de la Oficialía Electoral, todos de este Instituto, aplicaron el protocolo denominado *Copia de la información de marcas ADN 2016 para la DERFE* que contiene la Lista Nominal de Electores de Revisión entregada a cada representación partidista con su clave específica, en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016.
- 10) Se tiene por acreditado que para el caso de los archivos de *ADN* que contienen la Lista Nominal de Electores de Revisión 2015, no se aplicó el protocolo referido en el inciso anterior, toda vez que éste se activó previamente con motivo del caso “Amazon”, razón por la que la Coordinación de Procesos Tecnológicos conservó copia de dicho archivo.
- 11) Se tiene por acreditado que, una vez obtenidos los archivos de *ADN* de la Lista Nominal de Electores de Revisión 2016, personal de la *DERFE* y de la Unidad Técnica de Servicios de Informática en presencia de personal de la Oficialía Electoral, todos de este Instituto, realizaron la diligencia para la verificación de correspondencia entre la evidencia obtenida en el sitio reportado y las marcas de rastreabilidad contenidas en los discos de *ADN*. Lo cual se llevó a cabo conforme al protocolo denominado *Verificación de correspondencia entre las marcas contenidas en el archivo ADN y las marcas contenidas en los archivos de evidencia obtenidos del servidor reportado*.
- 12) Se tiene acreditado que, por la aplicación del protocolo precisado, se buscaron marcas de *ADN* de los dos archivos entregados a los representantes de dos partidos políticos acreditados ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, en los archivos descargados del sitio de “*Digital Ocean*”, y se determinó que existe correspondencia únicamente con las marcas del archivo *ADN* identificado como BJGMOG65112325M700, a

nombre de la Arquitecta Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante del PRI ante la Comisión local de Vigilancia de Sinaloa.

Lo anterior en la base de datos de la Lista Nominal de Electores de Revisión 2015.

- 13)** Se tiene por acreditado que la confronta realizada respecto de la Lista Nominal de Electores de Revisión 2016, se llevó a cabo entre las marcas de *ADN* en los ocho archivos entregados a los representantes de ocho partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa respecto de los archivos de evidencia descargados del sitio de “*Digital Ocean*”, localizándose correspondencia únicamente con las marcas del archivo *ADN* identificado como MRLNJS83091425H800, a nombre de José Mora León, persona autorizada por la representación del PRI ante dicho Instituto.
- 14)** Conforme a lo anterior, se tiene por acreditado que la información identificada en el servidor de “*Digital Ocean*”, corresponde a los archivos cifrados de la Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco del Proceso Electoral 2014-2015 a nombre de Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante del *PRI* ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, así como de la Lista Nominal de Electores para Revisión generada en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016 a nombre de José Mora León, persona autorizada por la representación del PRI ante el Instituto Electoral de Sinaloa.
- 15)** Se tiene por acreditado que el seis de febrero de dos mil quince, Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, acudió a las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva de dicha entidad, para realizar el registro de su llave pública, es decir, al enrolamiento de la misma, procedimiento que se llevó a cabo conforme al Manual de Operación para el Enrolamiento de Llaves Públicas, versión 2.0.
- 16)** Se tiene acreditado que previo a la entrega de los archivos de la Lista Nominal de Electores para Revisión, se incorporó la marca de rastreabilidad



conocida como “Marca de ADN” y, una vez que fueron generados los archivos respectivos, estos fueron cifrados para que sólo pudieran ser usados por el partido político correspondiente con la llave privada que previamente habían generado.

- 17)** Se acreditó que una vez que fueron creados cada uno de los archivos referidos en el numeral que antecede, se realizó un grabado de ellos de manera individual en un dispositivo USB, el cual fue sujeto a un procedimiento de control de calidad establecido en el protocolo creado para tal efecto. Dichos dispositivos fueron depositados en un sobre etiquetado por representación partidista, sellado y firmado ante notario público.
- 18)** Se tiene por acreditado que por oficio número VRFE/89/2015, de trece de febrero de dos mil quince, el Ingeniero Eduardo Fierro Barraza, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto del Estado de Sinaloa, hizo entrega a la Arquitecta Oglia Rita Bojórquez Gámez, en su calidad de Representante Propietaria del *PRI* ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, de la Lista Nominal de Electores de Revisión en un archivo digital cifrado y en dispositivo USB así como los documentos de guías para la verificación del código de integridad y de descifrado del archivo.

En dicho oficio, el referido funcionario hizo del conocimiento de la funcionaria partidista aludida que, en términos del numeral 32 de los *Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los Integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, los Partidos Políticos y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo CG35/2013*, a partir de la entrega de la información y hasta su devolución, adquiriría la responsabilidad de su uso y destino, debiendo tomar las medidas necesarias para salvaguardar la información que se entrega, sin poder darle uso distinto al de la revisión de la Lista Nominal de Electores.

Asimismo, le informó que en términos del numeral 33 de los Lineamientos antes referidos, estaba obligada a reintegrar los instrumentos referidos en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la conclusión del periodo para presentar impugnaciones del Proceso Electoral a través de oficio dirigido al funcionario electoral referido, manifestando bajo protesta de decir verdad que la información recibida no ha sido reproducida, ni almacenada por algún medio.

- 19)** Se tiene por acreditado que el trece de febrero de dos mil quince, Oglia Rita Bojórquez Gámez, en su calidad de Representante Propietaria del *PRI* ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, entregó al Ingeniero César Manuel Ochoa Salazar, en su carácter de Secretario de Acción Electoral del PRI, un escrito mediante el cual le expresó lo siguiente:

*“Por medio de la presente me permito adjuntar USB y oficio de recepción de la **Lista Nominal de Electores de Revisión** en un archivo digital, con fecha trece de febrero, con las especificaciones legales y Lineamientos para el uso debido de la información contenida en el **USB**.*

*Así mismo le entrego las guías para el descifrado del archivo digital y guía rápida para la verificación del código de integridad con la información cifrada de dicho Listado Nominal para que el área de Cómputo pueda descifrarlo y abrir el archivo.”*

- 20)** Se tiene acreditado que mediante escrito de diecinueve de noviembre de dos mil quince, dirigido al Ingeniero Eduardo Fierro Barraza, Vocal del Registro Federal de Electores, Oglia Rita Bojórquez Gámez, en su calidad de Representante Propietaria del *PRI* ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, hizo entrega *del Listado Nominal de Revisión en un archivo digital cifrado en un dispositivo USB, recibido el trece de febrero del mismo año, un disco compacto recibido el quince de mayo siguiente, en formato ASSCI ancho fijo, el campo de clave de elector de la Lista Nominal Definitiva a nivel estado, Distrito, municipio y sección con el corte por cuadernillo, misma que fue utilizada en la pasada Jornada Electoral, y manifestó bajo protesta de decir verdad que dicha información no había sido reproducida, ni almacenada por algún medio.*

- 21)** Se tiene por acreditado que mediante oficio INE/VRFE/0729/2016, de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en Sinaloa realizó la devolución de material entregado por la representación del *PRI*, a la Coordinación de Procesos Tecnológicos de la *DERFE*.
- 22)** Se tiene por acreditado que, mediante oficio s/n de treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, Representante Propietario del *PRI* ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, realizó la solicitud a la Presidenta del Consejo General de dicho Instituto para que se le entregara la Lista Nominal de Electores de Revisión y autorizó a José Mora León para recibir el instrumento electoral.
- 23)** Se tiene por acreditado que la Lista Nominal de Electores para Revisión generada para los Procesos Electorales Locales 2015-2016 fue generada a nombre de José Mora León.
- 24)** Se acreditó que el cinco de febrero de dos mil quince, José Mora León, en su carácter de persona autorizada por el representante del *PRI* en el Instituto Electoral de Sinaloa, realizó el registro de su llave pública, es decir el *Enrolamiento* de la misma. Dicho procedimiento se llevó a cabo de conformidad con el Manual de Operación para el Enrolamiento de Llaves Públicas, versión 3.0.
- 25)** Se acreditó que una vez realizado el registro de la llave pública, se procedió a la creación de los archivos de la Lista Nominal de Electores para Revisión para los representantes de los partidos políticos acreditados ante al CNV y para las representaciones ante los Organismos Públicos Locales Electorales, a los cuales se les incorporó la marca de rastreabilidad conocida como "*Marca de ADN*". Asimismo, se acreditó que los archivos generados fueron cifrados a efecto de que sólo pudieran ser usados por los partidos políticos correspondientes con la llave privada que previamente habían generado.

De igual forma, se realizó un grabado de ellos de manera individual en un dispositivo USB, el cual fue sujeto a un procedimiento de control de calidad establecido en el protocolo creado para tal efecto. Dichos dispositivos fueron depositados en un sobre etiquetado por representación partidista, sellado y firmado ante la Oficialía Electoral.

- 26)** Se tiene acreditado que el quince de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio VRFE/105/2016, el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de Sinaloa entregó el paquete que contenía el archivo digital cifrado con la Lista Nominal de Electores para Revisión a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, representante Propietario del PRI ante el Instituto Electoral de Sinaloa.

A través de dicho oficio se hizo del conocimiento de dicho representante que la información entregada sólo podía utilizarse para las actividades de verificación y revisión, apercibiéndosele para que no realizara la reproducción del material entregado, asimismo, se le informó que debía devolver dicho material dentro de los cinco días hábiles posteriores a la conclusión del plazo de impugnaciones del Proceso Electoral Local.

- 27)** Se tiene por acreditado que, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, en su carácter de Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa y representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad federativa, hizo entrega formal de la lista nominal de electores con fotografía a José Alberto Salas Beltrán, en su carácter de Secretario de Acción Electoral del mismo Comité Directivo Estatal.

El referido funcionario partidista manifestó, en el mismo escrito, que el Organismo Público Local comunicó al partido político durante el proceso de entrega del listado nominal que el mismo únicamente podrá utilizarse en las actividades que realicen las representaciones partidistas y/o candidatos independientes acreditados ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el día de la Jornada Electoral y únicamente en la casilla por parte del representante debidamente acreditado, lo anterior con la obligación de no reproducirlo ni almacenarlo por ningún medio impreso, óptico, magnético o por cualquier otra modalidad.

- 28)** Se tiene por acreditado que el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, en su carácter de Secretario Jurídico y de

Transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa y representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad federativa, hizo entrega formal a Teresa de Jesús Nieto Ríos del dispositivo de almacenamiento digital que contiene la Lista Nominal de Electores para Revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis.

El referido funcionario partidista manifestó, en el mismo escrito que la documentación electoral fue entregada por el *INE* por conducto del Vocal del Registro Federal de Electores en Sinaloa, Ingeniero Eduardo Fierro Barraza, siendo desarrollado dicho procedimiento conforme a lo establecido en los *“Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para el uso y entrega del padrón electoral y la lista nominal de electores a los Organismos Públicos Locales para los Procesos Electorales Locales 2015-2016.”*

Asimismo, refirió que la autoridad electoral comunicó al partido político durante el proceso de entrega del dispositivo digital que contiene el listado nominal, que el mismo únicamente podrá utilizarse para actividades de verificación y revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 152, numeral 1 de la LGIPE. De igual forma le informó sobre la obligación de devolver el documento electoral, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la conclusión del plazo de impugnaciones del Proceso Electoral.

- 29)** Se tiene acreditado que mediante escrito de cinco de julio de dos mil dieciséis, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, en su calidad de Representante Propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral local de Sinaloa, hizo entrega del dispositivo de almacenamiento denominado USB que contenía la *Lista Nominal de Electores para Revisión con corte al 15 de enero de 2016*, y manifestó que dicha información no había sido reproducida, ni almacenada.

#### **4.2. CONCLUSIONES GENERALES**

- 1)** Conforme a lo anterior, se acreditó que los procedimientos de seguridad relacionados con el cifrado y entrega de los Listados Nominales para Revisión para los procesos electorales federal 2014-2015 y local 2015-2016, a los representantes de los partidos políticos, se realizaron conforme a los Lineamientos y manuales de operación aplicables para ello, con lo que se garantizó por parte de este Instituto, la salvaguarda de dicha información.

- 2) Se acreditó que a los archivos de la Listas Nominales de Electores para Revisión para los representantes partidistas en el marco de los procesos electorales federal 2014-2015 y local 2015-2016, se les incorporó la marca de rastreabilidad *ADN*.
- 3) Se acreditó que la información identificada en el servidor de *Digital Ocean*, corresponde a los archivos cifrados de la Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco del Proceso Electoral 2014-2015 a nombre de Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante del *PRI* ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, así como de la Lista Nominal de Electores para Revisión generada en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016 a nombre de José Mora León, persona autorizada por la representación del *PRI* ante el Instituto Electoral de Sinaloa.
- 4) Se acreditó que Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante del *PRI* ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa y José León Mora, en su carácter de persona autorizada por el representante del *PRI* ante el Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa, acudieron ante la Junta Local del INE en Sinaloa a realizar el registro de la llave pública (*enrolamiento*) respecto de las Listas Nominales de Electores para los procesos electorales 2014-2015 y local 2015-2016, respectivamente. Lo cual se llevó a cabo conforme con los manuales de operación correspondientes.
- 5) Se acreditó que Ogla Rita Bojórquez Gámez recibió, el trece de febrero de dos mil quince, la Lista Nominal de Electores de Revisión en un archivo digital cifrado y en dispositivo de almacenamiento USB, correspondiente al Estado de Sinaloa, así como los documentos de guías para la verificación del código de integridad y descifrado del archivo en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015 con las respectivas marcas de *ADN*.
- 6) Se acreditó que Jesús Gonzalo Estrada Villarreal recibió, el quince de febrero de dos mil dieciséis, un sobre cerrado y sellado con un dispositivo de almacenamiento denominado USB que contenía la Lista Nominal de Electores en formato digital para revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, cifrado y en dispositivo de almacenamiento USB, así como los documentos de guías para la verificación del código de integridad y descifrado del archivo en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015 con las respectivas marcas de rastreabilidad *ADN*.

- 7) Se acreditó que, una vez que Ogla Rita Bojórquez Gámez recibió el archivo digital con la Lista Nominal para revisión correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015, la entregó a César Manuel Ochoa Salazar, en su carácter de Secretario de Acción Electoral del *PRI*, quien a su vez se la entregó a Teresa de Jesús Nieto Ríos, en su carácter de Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI, en Sinaloa, para su revisión.
- 8) Se acreditó que Jesús Gonzalo Estrada Villarreal entregó el dispositivo digital con la Lista Nominal para Revisión relativa al Proceso Electoral Local 2015-2016 junto con las claves para su descifrado, el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, a Teresa de Jesús Nieto Ríos, en su carácter de Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI, en Sinaloa, para su revisión y, el diecinueve de mayo del mismo año, la lista nominal en su versión impresa a José Alberto Salas Beltrán.
- 9) Se acreditó que Ogla Rita Bojórquez Gámez realizó la devolución del material electoral que le fue entregado el diecinueve de noviembre de dos mil quince, mientras que Jesús Gonzalo Estrada Villareal realizó la devolución respectiva el cinco de julio de dos mil dieciséis, ambos al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.

## **5. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO**

### **5.1. PROCEDIMIENTO DE CIFRADO (ADM) DE LAS LISTAS NOMINALES DE ELECTORES DE REVISIÓN ENTREGADAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS**

El cinco de noviembre de dos mil catorce, el Consejo General del *INE* aprobó el Acuerdo INE/CG249/2014<sup>96</sup>, relativo al “PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES PARA SU REVISIÓN, A LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS ANTE LAS COMISIONES DE VIGILANCIA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015”, bajo dos premisas fundamentales:

- En su calidad de órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, reconocido constitucionalmente,<sup>97</sup> así como

---

<sup>96</sup> Visible a foja 153 del expediente.

<sup>97</sup> Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo primero de la CPEUM.

responsable del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores,<sup>98</sup> en estricto ejercicio de su facultad reglamentaria,<sup>99</sup> y

- Con la finalidad de garantizar la confidencialidad e integridad de la información contenida en la Lista Nominal de Electores, estableció el procedimiento aplicable para la generación de los archivos que integrarían a ésta última (*por entidad federativa y Distrito Electoral federal*), tomando en consideración la asignación de elementos distintivos a cada uno de los archivos que serían entregados a los Partidos Políticos exclusivamente para su revisión.<sup>100</sup>

En esa lógica, estableció los objetivos específicos a cumplir durante el procedimiento de entrega de la Lista Nominal de Electores a los Partidos Políticos para su revisión, a saber:

- a) Describir las actividades para la generación de los archivos que contendrá la Lista Nominal de Electores para Revisión, por entidad federativa;
- b) Describir las actividades que se llevarán a cabo para la asignación de elementos distintivos a cada uno de los archivos que serán entregados;
- c) Comunicar la forma como se llevará a cabo el cifrado de los archivos a entregar, así como la generación de claves de acceso únicas por archivo;
- d) Presentar el flujo que se seguirá para entregar los archivos con la Lista Nominal de Electores para Revisión, a las representaciones partidistas acreditadas ante las Comisiones de Vigilancia;
- e) Contemplar los mecanismos de devolución y destino final de los medios ópticos que contienen la información de la Lista Nominal de Electores para Revisión, e
- f) Informar de los mecanismos de seguridad y control que se aplicarán en cada una de las actividades anteriormente mencionadas, con la finalidad de asegurar la confidencialidad y la protección de los datos personales de los ciudadanos, así como la integridad de la información.

---

<sup>98</sup> Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 3, de la CPEUM, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la LGIPE.

<sup>99</sup> Artículos 44, párrafo 1, incisos gg) y jj), de la LGIPE.

<sup>100</sup> Artículo 148, párrafo 2 de la LGIPE.



Ahora bien, del análisis del procedimiento de entrega de la lista nominal de electores para revisión de los representantes de los partidos políticos<sup>101</sup> ante las Comisiones Nacionales y Locales, ambas de Vigilancia, se advierten distintas etapas, a saber:

**1. Preparación del insumo a partir de la base de datos central.**

- Generación del corte del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores, al quince de enero de dos mil quince, y
- Conciliación de la Lista Nominal de Electores, a partir de las notificaciones de credenciales entregadas en los módulos de atención ciudadana (MAC).

**2. Generación de archivos.**

- Generación de archivos por entidad federativa, para las representaciones acreditadas ante las Comisiones Nacionales de Vigilancia.

**3. Asignación de elementos distintivos.**

- **Asignación de la marca de rastreabilidad** a los archivos **por entidad federativa**. Todo archivo que se genere con este corte de información contendrá una marca de **rastreabilidad para diferenciarlo**;
- **Asignación de nomenclatura** a los archivos, considerando el ámbito de la Comisión de Vigilancia, **los registros que contiene por entidad federativa, y el partido político al que se entregará**;
- Registro de las marcas de **rastreabilidad asignadas a cada archivo**, y resguardo por el área que sea designada para tal efecto, misma que deberá ser un área distinta a la Dirección de Operaciones del Centro de Cómputo y Resguardo Documental, y
- Borrado de los insumos para la generación de archivos por entidad federativa.

---

<sup>101</sup> Visible a foja 164 del expediente.

**4. Cifrado de archivos y generación de claves de acceso.**

- **Cifrado de los archivos que integran la marca de** rastreabilidad;
- Generación de **claves de acceso únicas** por archivo. Para los archivos a entregar a las representaciones ante las Comisiones Nacionales de Vigilancia, se **utilizará una clave única por partido político**, mediante un procedimiento automatizado, y las claves serán almacenadas en una **carpeta con acceso exclusivo para el área designada** para tal efecto;
- Transferencia de archivos cifrados al servidor de distribución;
- Recepción de claves de acceso por el área designada para tal efecto, en función de la seguridad y eficiencia en el envío a los **usuarios autorizados de las representaciones partidistas**. Reduciendo la intervención de personal en el manejo de las claves de acceso, especificando en éstas el nombre y área de los funcionarios que hayan participado en la generación y entrega de las mismas, y
- Borrado en las áreas de trabajo de los archivos de origen de los archivos cifrados y de las claves de acceso.

**5. Entrega a los representantes acreditados ante las Comisiones Nacionales de Vigilancia.**

- Grabación de los archivos cifrados en medios ópticos;
- Etiquetado de los medios ópticos;
- Entrega de los medios ópticos a los representantes propietarios por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, y
- Envío de las claves únicas de acceso a los representantes propietarios, tomando en consideración el esquema más conveniente, en función de la seguridad y eficiencia en el envío.

**6. Entrega a los representantes acreditados ante las Comisiones Locales de Vigilancia.**

- Descarga de los archivos cifrados del servidor de distribución, por parte de la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva Correspondiente;
- Grabación de los archivos cifrados en medios ópticos;
- Etiquetado de los medios ópticos;

- Entrega de los medios ópticos a los representantes propietarios por parte del Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva que corresponda, y
- Envío de las claves únicas de acceso a los representantes propietarios, tomando en consideración el esquema más conveniente, en función de la seguridad y eficiencia en el envío.

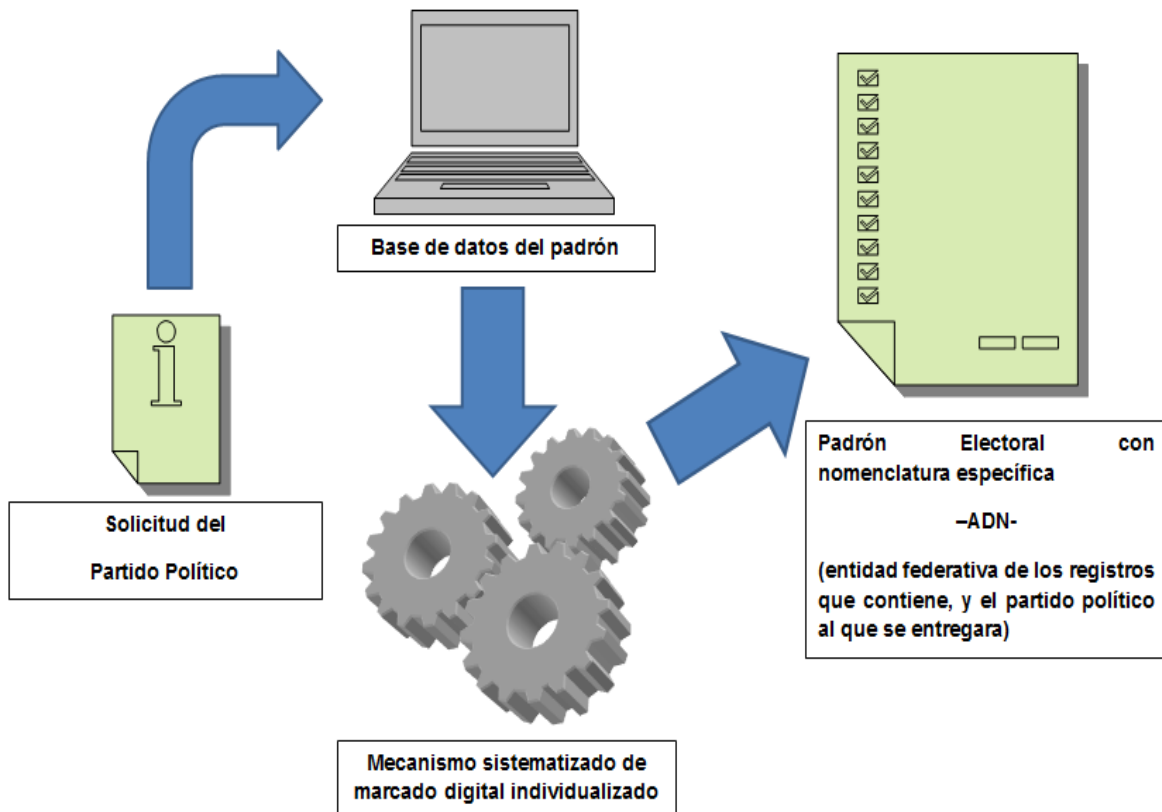
#### **7. Devolución y destino final de medios ópticos.**

- Devolución de los medios ópticos originales a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, por parte del **representante propietario** acreditado ante la Comisión Nacional de Vigilancia;
- Devolución de los medios ópticos originales al Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local que corresponda, por parte del **representante propietario** acreditado ante la Comisión Local de Vigilancia, y
- Destrucción de medios ópticos en evento supervisado por los representantes ante la Comisión de Vigilancia correspondiente.

Precisado lo anterior, se advierte que se dispuso la asignación de una marca de rastreabilidad por entidad federativa a cada uno de los archivos –*conocida como Marca de ADN*–, con la finalidad de poder diferenciarlos, incluyendo un registro de los mismos, así como una nomenclatura específica de los archivos, tomando en consideración la entidad de los registros que contiene, y el partido político al que se entregará.

En ese sentido, la “*Marca de ADN*” consiste en la incorporación de abreviaturas y/o símbolos en los registros de los ciudadanos de la Lista Nominal de Electores, mediante un mecanismo sistematizado de marcado digital individualizado y diferenciado para cada uno de los archivos, logrando así una plena identificación y correspondencia de cada representante de partido político al que haya sido entregados.

A fin de dar mayor claridad, se inserta el siguiente gráfico:



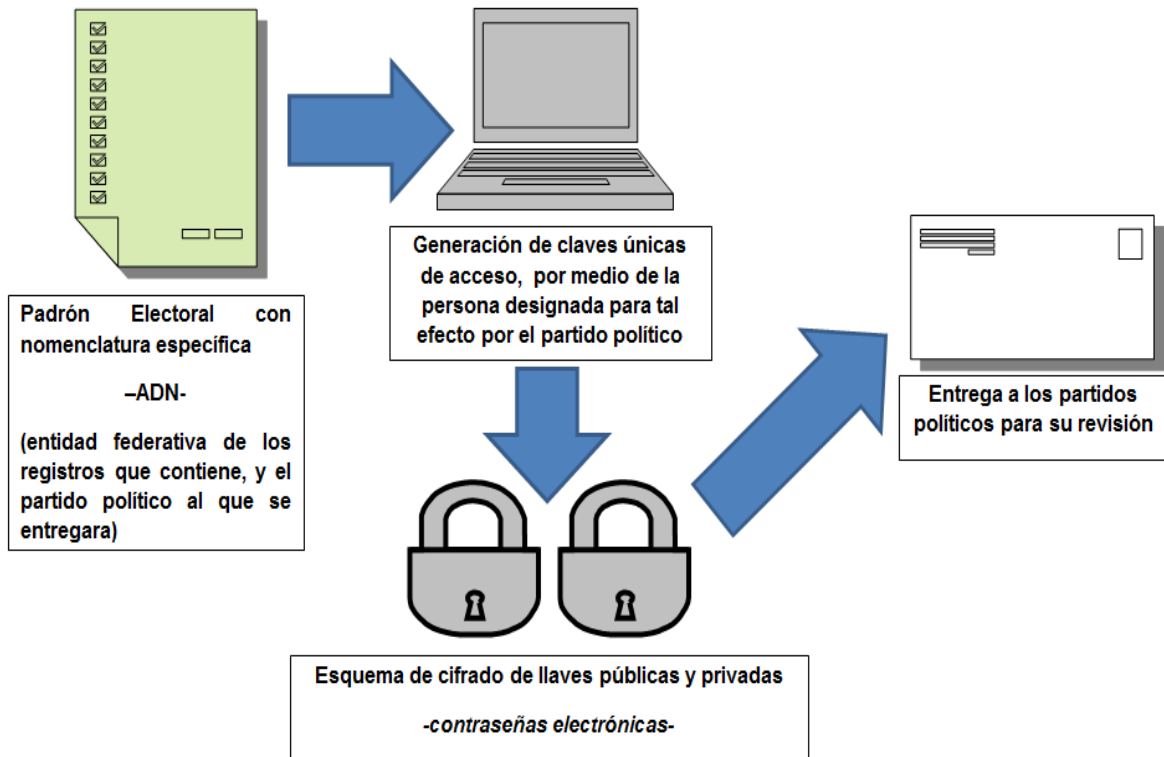
Aunado a lo anterior, se realiza un cifrado de los archivos que integran la marca de rastreabilidad (*ADN*), y se generan las respectivas claves únicas de acceso por partido político, a fin de que, el área designada por éstos, sea exclusivamente quien tenga acceso a los archivos.

El esquema de cifrado comprende la creación de llaves públicas<sup>102</sup> y privadas<sup>103</sup> – *contraseñas electrónicas*– con lo que se garantizó que los partidos políticos fueran los únicos con acceso a la información del Listado Nominal de Electores que les fuera entregado, respectivamente, para su revisión.

<sup>102</sup> A efecto de poder cifrar la información contenida en los archivos.

<sup>103</sup> Permite el acceso a la información de la Lista Nominal de Electores de revisión

Realizado lo anterior, así como la entrega para su revisión, los partidos políticos están obligados a regresar los medios ópticos originales para su destrucción.



En las condiciones relatadas, el mecanismo de cifrado, los caracteres específicos por entidad y partido, así como la generación de llaves, son procedimientos que permiten garantizar la confiabilidad y protección de los datos de la lista nominal de electores, así como la integridad de la información.

Del mismo modo, permite establecer mediante la decodificación del ADN, los datos del padrón electoral con nomenclatura específica, a efecto de dar lectura a las marcas de rastreabilidad asignadas a cada archivo, haciéndolos plenamente identificables respecto a la entidad correspondiente, Distrito, e incluso, al partido político que le fue entregado ese ejemplar.

- **OBTENCIÓN DE INSUMOS**

En el caso, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE hizo del conocimiento el presunto uso indebido de información en una base de datos en un servicio de *hosting* en internet denominado “*Digital Ocean*”, consistente en información del padrón electoral y/o de la lista nominal de electores, se integró el expediente número INE/OE/DS/OC/0/040/2016 de la Oficialía Electoral del INE.

Así, la DERFE ordenó, por conducto del personal de la Dirección de Infraestructura y Tecnología Aplicada de la Coordinación de Procesos Tecnológicos, aplicar el protocolo para la obtención de evidencia,<sup>104</sup> corroborando la existencia de información alojada en la dirección IP 162.243.158.165 y puerto 27017, consistente en una base datos con **2,072,585 registros**, en un servicio de *hosting* en internet denominado “*Digital Ocean*”, por lo que se realizó una copia de la información ahí contenida a fin de verificar si la misma correspondía a información del Padrón Electoral y/o la Lista Nominal de Electores.

Lo anterior, mediante la aplicación del protocolo denominado obtención de evidencia, a fin de recabar los archivos de información del servidor reportado, que en términos generales consistió en:

- a) Identificación de las especificaciones del equipo de cómputo donde se realizarían las tareas;
- b) Ingreso al servidor reportado;
- c) Generación de las consultas, ingresando la IP 162.243.158.165 y puerto 27017 e impresión de las pantallas correspondientes;
- d) Verificación de datos generales de la base de datos del servidor reportado;
- e) Descarga de la información;
- f) Obtención de códigos de integridad del archivo descargado;
- g) Cifrado de archivos de evidencia;
- h) Obtención de los códigos de archivos txt;
- i) Generación de discos compactos;

---

<sup>104</sup> Visible a foja 52 del expediente.

- j) Resguardo de discos compactos por parte de personal de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y de la Oficialía Electoral, y
- k) Borrado seguro de toda la información generada para la obtención de evidencia.

**- VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Realizado lo anterior, personal de la Coordinación de Procesos Tecnológicos del INE realizó el cotejo de la información obtenida del servidor reportado, contra la correspondiente al respaldo del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, obteniendo que **la información** alojada en el sitio de internet “*Digital Ocean*” correspondía, tanto a la **Lista Nominal de Electores para revisión entregada a los Partidos Políticos durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015**, como a la **Lista Nominal de Electores para revisión entregada a los Partidos Políticos durante los Procesos Electorales Locales 2015-2016**, respecto de municipios de la entidad federativa **de Sinaloa**

Lo anterior, mediante la verificación<sup>105</sup> de la estructura de campos del archivo en relación con las marcas de *ADN* de la Lista Nominal de Electores para revisión entregada a los partidos políticos en los años 2015 y 2016.

Derivado del cruce informático de los registros contenidos en dicha lista nominal frente a la evidencia obtenida del sitio web *Digital Ocean*, se obtuvo que:

1. Se realizó un análisis consistente en cargar en una base de datos los 2,072,585 registros. Logrando cargar 2,072,380 registros, y respecto de 205 no pudieron cargarse, al integrarse de una estructura diferente al resto de los registros.
2. De los **2,072,380** registros se realizó un cruce informático por clave de elector, registro a registro, de los campos CALLE y COLONIA, con la base de datos de respaldo de la Lista Nominal de Electores de Revisión 2015.
3. De lo anterior, **1,944,479** registros coincidieron en contenido (**93.8 %** del total de registros de la base de datos denunciada) con la Lista Nominal

---

<sup>105</sup> Visible a foja 145 del expediente.

de Electores para revisión entregada a los partidos políticos en 2014-2015.

4. Por otra parte, 3,501 registros presentaron diferencias en rubros como CALLE (1,749) y COLONIA (1,752); diferencias que, se determinó, podrían corresponder a las marcas de ADN incorporadas a la Lista Nominal de Electores de revisión 2015.
5. Un total de 45,672 registros no pudieron ser comparados, en razón de no contener información en los rubros de CALLE y COLONIA.
6. Por último, 78,728 registros no fueron localizados por clave de elector en la base de datos de la Lista Nominal de Electores de Revisión 2015.

En virtud de las diferencias encontradas, se determinó necesario ordenar un análisis complementario respecto de 124,400 registros (45,672 + 78,728), para establecer el origen de aquellos registros que no pudieron ser comparados, y aquellos que no habían podido ser localizados, respectivamente.

Por ello, **se realizó un análisis en la base de datos histórica de los movimientos del Padrón Electoral, concluyendo** que los registros eran el resultado de **movimientos de actualización aplicados después del corte del Listado Nominal de Electores de Revisión 2015** (15 de enero de 2015), a saber:

- Respecto de los 45,675 registros, en su mayoría, por **cambio de domicilio**.
- Por cuanto hace a los 78,728 registros, en su mayoría, por **inscripción**.

Así, se verificó que los 124,400 registros (45,672 + 78,728) que no habían podido ser comparados, correspondían a movimientos aplicados con posterioridad al corte realizado en el Listado Nominal de Electores de Revisión 2015; sin embargo, era necesario analizar el origen de dichos registros.

Lo anterior, tomando como base el hecho consistente en que, en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016, también se realizó entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión 2016 (con corte al 15 de enero de 2016) a las representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Nacional de Vigilancia y ante los Organismos Públicos Locales Electorales.



Derivado de lo anterior, se obtuvo que, de la búsqueda realizada por clave de elector, los 124,400 registros (45,672 + 78,728) fueron localizados en la base de datos de respaldo de la Lista Nominal de Electores para Revisión 2016.

Al realizar el cruce informático entre la base de datos contenida en la evidencia y la citada base de datos de respaldo, se obtuvo lo siguiente:

1. De los **124,400** registros, 124,199 coincidieron de los campos de APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO y NOMBRE.
2. Respecto de los **201** registros faltantes, se determinó que dichas diferencias podrían corresponder a las marcas de ADN incorporadas a la Lista Nominal de Electores de Revisión 2016.

Por todo lo expuesto, se advirtió que **la información** alojada en la base de datos detectada en el sitio de internet “*Digital Ocean*” **correspondía a municipios de Sinaloa, respecto de la Lista Nominal de Electores para revisión entregada a los Partidos Políticos durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como a la Lista Nominal de Electores para revisión entregada a los Partidos Políticos durante los Procesos Electorales Locales 2015-2016.**

## **5.2. IDENTIFICACIÓN DEL ADN EN LA LISTA NOMINAL PARA REVISIÓN DETECTADA EN EL SERVIDOR *DIGITAL OCEAN***

Realizado el análisis de los archivos y una vez especificado su origen, se determinó necesario realizar la identificación de los archivos específicos de *ADN* contenidos en la base de datos detectada en el sitio de internet *Digital Ocean*, confrontándolos con el *ADN* que fue resguardado por el INE, a través de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Visible a foja 278 del expediente.



Lista de electores mexicanos disponible en  
servidor de Digital Ocean

Procedimiento para identificar la fecha de corte de  
la información descargada del sitio, así como los  
representantes partidistas a quienes les fue  
entregada dicha información

***a) Lista nominal de electores para revisión entregada a los partidos  
políticos durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015.***

De los 3,501 registros que presentaron diferencias en los rubros de CALLE (1,749) y COLONIA (1,752) y tomando en consideración que éstos correspondían con **municipios de la entidad federativa de Sinaloa**, se realizó la búsqueda de las **marcas a partir de los archivos ADN** correspondientes a los juegos de la **Lista Nominal de Electores para Revisión del Proceso Electoral Federal 2014-2015** que fueron entregados a las representaciones acreditadas ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa.

Se localizó en los archivos las marcas del archivo ADN denominado **BJGMOG65112325M700\_PRI\_CLV-SINALOA.txt.adn**




Etapas	Actividad
4. Identificación de los archivos específicos de ADN, cuyas marcas corresponden con las marcas del archivo descargado del sitio de Digital Ocean.	<p>Identificación del archivo específico de marcas ADN correspondiente a la LNER 2015.</p> <p>a) Las marcas ADN que la DERFE incorporó a la LNER 2015 se encuentran contenidas en un archivo por cada uno de los juegos entregados a cada uno de los representantes de los Partidos Políticos, en los campos de CALLE y COLONIA.</p> <p>b) Considerando que el archivo de evidencia descargado del sitio de Digital Ocean muestra información de municipios de la entidad federativa de Sinaloa, se determinó realizar la búsqueda de las marcas a partir de los archivos ADN correspondientes a los juegos de la LNER 2015 que fueron entregados para dicha entidad, esto es, los juegos entregados a las representaciones partidistas acreditadas ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa.</p> <p>c) Con base en el conjunto de <b>3,501</b> registros referidos en la segunda viñeta del inciso h) de la Etapa 2 del presente procedimiento, se buscaron marcas ADN de los 2 juegos entregados a los representantes de 2 Partidos Políticos acreditados ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, en los archivos de evidencia descargados del sitio de Digital Ocean, localizándose correspondencia únicamente con las marcas del archivo ADN denominado <b>BJGMOG65112325M700_PRI_CLV-SINALOA.txt.adn</b></p>

***b) Lista nominal de electores para revisión entregada a los partidos políticos durante los Procesos Electorales Locales 2015-2016.***


De los 201 registros que presentaron diferencias en los rubros de APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE; y considerando que daba cuenta de los **municipios de la entidad federativa de Sinaloa**, se realizó la búsqueda de las **marcas a partir de los archivos ADN** correspondientes a los juegos de la **Lista Nominal de Electores para Revisión de los Procesos Electorales Locales 2015-2016**.

Se localizó en los archivos las marcas del archivo de ADN denominado **MRLNJS83091425H800\_PRI\_PEL-SINALOA.txt.adn**

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

	<b>Identificación del archivo específico de marcas ADN correspondiente a la LNER 2016.</b>
	d) Las marcas ADN que la DERFE incorporó a la LNER 2016 se encuentran contenidas en un archivo por cada uno de los juegos entregados a cada uno de los representantes de los Partidos Políticos, en los campos de APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO y NOMBRE.
	e) Considerando que el archivo de evidencia descargado del sitio de Digital Ocean muestra información de municipios de la entidad federativa de Sinaloa, se determinó realizar la búsqueda de las marcas a partir de los archivos ADN correspondientes a los juegos de la LNER 2016 que fueron entregados para dicha entidad, esto es, los juegos entregados a las representaciones partidistas acreditadas ante los Organismos Públicos Locales Electorales.
	f) Con base en el conjunto de <b>201</b> registros referidos en la segunda viñeta del inciso h) de la Etapa 3 del presente procedimiento, se



Etapas	Actividad
	buscaron marcas ADN de los 8 juegos entregados a los representantes de 8 Partidos Políticos acreditados ante el OPLE de Sinaloa, en los archivos de evidencia descargados del sitio de Digital Ocean, localizándose correspondencia únicamente con las marcas del archivo ADN denominado <b>MRLNJS83091425H800_PRI_PEL-SINALOA.txt.adn</b>

**- IDENTIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES PARTIDISTAS**

Una vez realizada la obtención de las marcas del archivo de ADN, respectivamente, se procedió a realizar la identificación de los representantes partidistas<sup>107</sup> a quienes fueron entregadas las copias de las Listas Nominales de Electores para su Revisión, tomando en consideración lo siguiente:

- Las actividades para la generación de los juegos de las Listas Nominales de Electores para su Revisión 2015 y 2016, así como los archivos de las marcas ADN, respectivamente.
- La existencia de un protocolo para todas las actividades: generación de archivos, marcado, cifrado, generación de ADN, grabación y empaque de

<sup>107</sup> Visible a foja 419 del expediente.

medios, generación de código de integridad, rúbrica y sellado de empaques.

- Protocolo establecido en el *“Procedimiento de entrega de la Lista Nominal de Electores para Revisión a los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante las Comisiones de Vigilancia, en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015”* aprobado por el Consejo General del INE mediante el Acuerdo INE/CG249/2014.
- Respecto del Listado Nominal de Electores para su Revisión 2015-2016, se aplicó el protocolo establecido en el punto que antecede, de conformidad con lo establecido en el inciso c) del numeral 31 de los *“Lineamientos que establecen los plazos, términos y condiciones para el uso y entrega del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a los Organismos Públicos Locales para los Proceso Electorales 2015-2016”*, aprobados por el Consejo General del INE mediante el Acuerdo INE/CG38/2016.
- Las actividades de generación de los archivos se realizaron mediante un mecanismo sistematizado que, de manera automática, integró las marcas de ADN y cifró los archivos con la llave pública de cada uno de los solicitantes autorizados, lo que aseguró que en ningún momento persona alguna tuviera acceso a la información de la Lista Nominal o de las marcas.
- El protocolo prevé un borrado seguro de los equipos de cómputo utilizados, asegurando que cada copia generada y marcada sea eliminada en su totalidad de cualquier servidor del Instituto, por lo que se trata de copias únicas e identificables.

***a) Lista nominal de electores para revisión entregada a los partidos políticos durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015***

La **Lista Nominal de Electores para Revisión del Proceso Electoral Federal 2014-2015** correspondiente al ADN: **BJGMOG65112325M700\_PRI\_CLV-SINALOA.txt.adn** fue generado el seis de febrero de dos mil quince, para OGLA RITA BOJORQUEZ GAMEZ, en su calidad de representante del PRI ante la

Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, asentado en el número consecutivo 60 de las páginas 6 y 7 del acta notarial número 32,895, Libro 629.<sup>108</sup>

***b) Lista nominal de electores para revisión entregada a los partidos políticos durante los Procesos Electorales Locales 2015-2016.***

La **Lista Nominal de Electores para Revisión de los Procesos Electorales Locales 2015-2016** correspondiente al ADN: **MRLNJS83091425H800\_PRI\_PEL-SINALOA.txt.adn** fue generado el nueve de febrero de dos mil dieciséis, para JOSÉ MORA LEÓN, en su calidad de persona autorizada por la representación del PRI ante el Organismo Público Local Electoral de Sinaloa, asentado en el número consecutivo 53<sup>109</sup> del ANEXO 6 del ACTA INE/DS/OE/CIRC/002/2016.<sup>110</sup>

En virtud del procedimiento precisado en los párrafos que anteceden, se acreditó que **la información** alojada en el sitio de internet “*Digital Ocean*” **correspondía** a las marcas de rastreabilidad contenidas en el archivo de ADN de los registros encontrados en dos archivos digitales cifrados, a saber:

1. **Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015**, a nombre de **OGLA RITA BOJORQUEZ GAMEZ**, representante del **Partido Revolucionario Institucional** ante la Comisión Local de Vigilancia de **Sinaloa**, y
  2. **Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016**, a nombre de **JOSÉ MORA LEÓN**, autorizado por la representación del **Partido Revolucionario Institucional** ante el Instituto Electoral del Estado de **Sinaloa**.
- **BAJA DE LA BASE DE DATOS REPORTADA EN EL SITIO WEB DENUNCIADO**

El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis<sup>111</sup>, personal de la DERFE, en compañía de funcionarios de la Dirección del Secretariado Oficialía Electoral, realizaron una

---

<sup>108</sup> Visible a foja 1440 del expediente.

<sup>109</sup> Visible a foja 1652 del expediente.

<sup>110</sup> Visible a foja 1593 del expediente.

<sup>111</sup> Visible a foja 380 del expediente.

diligencia a fin de certificar si la información contenida en el sitio de internet *Digital Ocean* se encontraba disponible.

Lo anterior, mediante la aplicación de un protocolo de verificación, en el que se pudo advertir que al intentar ingresar a la dirección IP 162.243.158.165 y puerto 27017, el acceso fue negado, corroborando así que la información denunciada ya **no se encontraba en el servidor.**

### **5.3 TIPO ADMINISTRATIVO RESPECTO DEL DEBER DE CUIDADO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE CONFORMA EL PADRÓN ELECTORAL Y LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES IMPUTABLE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS MILITANTES**

Del marco normativo que ha sido previamente analizado se advierte que existen, tanto para los partidos políticos como para sus militantes, obligaciones de confidencialidad respecto de la información que conforma el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, así como de no dar a la misma una finalidad u objeto distinto al de la revisión del propio padrón y las listas nominales.

En consecuencia, con dichas previsiones legales, también se tiene prevista como infracción el incumplimiento de dichas obligaciones.

En efecto, en el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE se establece la confidencialidad de la información proporcionada por los ciudadanos al Registro Federal de Electores, los cuales no deben comunicarse ni darse a conocer salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.

Asimismo, en el artículo 126, párrafo 4 de la LGIPE, se delimita a los sujetos que pueden tener acceso a la información que conforma el Padrón Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las listas nominales.

En el artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, se otorga el derecho para que **los partidos políticos accedan en forma permanente a la base de datos del Padrón Electoral y las listas nominales**, al tiempo que establece la obligación de que sea exclusivamente para su **revisión**, y **no podrán usar dicha información para fines distintos**.

En ese sentido, en el artículo 150 de *LGIPE*, se precisa que la revisión que hagan los partidos políticos a la base de datos del Padrón Electoral y las listas nominales, tiene como finalidad que los partidos políticos cuenten con los elementos suficientes para formular observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos indebidamente de las listas nominales, dentro del plazo de veinte días naturales a partir del 25 de febrero de cada uno de los dos años anteriores al de la celebración de las elecciones.

En los mismos términos se encuentra establecido en los artículos 32, 33 y 40 de los *Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo CG35/2013*, en los que se precisa la responsabilidad de los representantes de los partidos políticos en cuanto a las medidas de seguridad que deben adoptar para salvaguardar la información que les es entregada, sin poder darle un uso distinto al de la revisión.

Por tanto, es de concluir que existe un principio claro de confidencialidad respecto de la información que los ciudadanos proporcionan al Instituto Nacional Electoral para conformar el Registro Federal de Electores, imponiéndose por consecuencia a la autoridad un deber estricto de salvaguardar tal secrecía.

Asimismo, dado que dicha información es de acceso a los partidos políticos, está establecida para estos últimos y sus miembros integrantes de las comisiones de vigilancia del Registro Federal de Electores, una prohibición de dar a dicha información un uso, objeto o finalidad distintos a la revisión del Padrón electoral y **las listas nominales, en el entendido de que, por consecuencia y atendiendo a la calidad de confidencial de la información, están igualmente compelidos a garantizar su secrecía frente a terceros.**



Todo lo anterior, en el marco constitucional de protección a los datos personales de los ciudadanos, que se desprende de los artículos 1, 6, 16 y 41, de la Constitución General de la República.

En congruencia con tales deberes y obligaciones de confidencialidad y de no destinar la información a un uso distinto a la revisión, **como lo es la indebida reproducción, manipulación y almacenamiento en un portal de internet**, del padrón electoral y **las listas nominales**, está previsto, en el artículo 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la *LGIFE*, que constituye una infracción de los partidos políticos, el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley General de Partidos Políticos y la comisión de cualquier otra falta de las previstas en esa Ley.

Mientras que en el artículo 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende la obligación de los partidos políticos de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, **respetando** la libre participación política de los demás partidos políticos y **los derechos de los ciudadanos**; así como las demás que establezcan las leyes federales o locales.

Por su parte en el artículo 447, párrafo 1, inciso e) de la *LGIFE*, se establece que constituye una infracción de los ciudadanos, de los dirigentes y **afiliados a partidos políticos**, o en su caso de cualquier persona física o mora, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esa Ley.

En consecuencia, la violación al deber de cuidado, o a la confidencialidad de la información que conformaba el Registro Federal de Electores, así como el darle un uso o finalidad distintos al de revisar el Padrón Electoral y **las listas nominales**, es una infracción en que pueden incurrir tanto los partidos políticos como sus militantes.

Al respecto, debe indicarse que basta el establecimiento del principio de confidencialidad de la información y la prohibición de otorgar a la misma un uso distinto al especificado por la Ley, para considerar que **cualquier conducta**

**contraria a dicho deber** y a la limitada permisividad en cuanto al uso de tales datos, constituye una infracción administrativa por violación a la ley.

Ahora bien, debe señalarse que el principio de taxatividad en la determinación de los tipos sancionadores no es absoluto en materia administrativa, a diferencia de lo que acontece en el derecho penal, en razón de los distintos bienes que se protegen en cada uno de dichos ámbitos del Derecho.

En dicho sentido, el referido principio no implica que las infracciones administrativas deban ser establecidas con absoluta precisión, pues ello depende de diversas circunstancias que concurren en la configuración de la norma.

Así, cuando el valor o bien jurídico a proteger es dable de ser afectado mediante una diversidad de conductas, resulta lógico, conveniente y válido determinar, explícitamente, cuál es la única conducta permitida, quedando establecido así, por exclusión y con el grado de certeza que exige el principio de legalidad en beneficio de las personas, que cualquier conducta distinta es ilícita y, por tanto, sancionable.

Similares consideraciones fueron emitidas por la Sala Superior, al resolver el recurso de apelación **SUP-RAP-120/2016 y acumulados**.

#### **5.4. ANÁLISIS DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA AL PRI**

En concepto de esta autoridad es **FUNDADO** el procedimiento sancionador en contra del PRI por la violación a lo establecido en los artículos 1, 6 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE; 32, 33 y 40 de los *Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo CG35/2013*; **por la falta de cuidado y omisión de garantizar debidamente el manejo, resguardo y custodia de los datos que proporcionan los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información**, en atención a las siguientes consideraciones.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9, párrafo 1; 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los partidos políticos en tanto entidades de interés público, se constituyen como "ejes fundamentales del moderno Estado democrático"; tienen como fines primordiales la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática del país, la contribución para la integración de la representación nacional y el posibilitar el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, en tanto organizaciones de estos últimos, de acuerdo con sus programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Esto es, los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política que, como derecho fundamental, se confiere a los ciudadanos mexicanos, lo cual conlleva la necesidad de realizar interpretaciones y luego aplicaciones de las disposiciones jurídicas relativas que aseguren o garanticen el puntual respeto de ese derecho y su más amplia y acabada expresión, en cuanto que no se haga nugatorio o se menoscabe su ejercicio por un indebido actuar de la autoridad electoral; en consecuencia con lo anterior, desde la propia Constitución federal, se dispone que los partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo previsto en sus "programas, principios e ideas que postulan", lo cual, a su vez, evidencia que desde el mismo texto constitucional se establece una amplia libertad o capacidad auto-organizativa en favor de dichos institutos políticos.

Esto mismo se corrobora cuando se tiene presente que, en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 de la LGPP, se prevén las disposiciones normativas mínimas de sus documentos básicos, sin que se establezca, en dichos preceptos, un entero y acabado desarrollo de los aspectos declarativos, ideológicos, programáticos, orgánicos, procedimentales y sustantivos, porque se suprimiría o limitaría indebidamente esa libertad auto-organizativa para el ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral que se establece en favor de los ciudadanos.

De esta manera, los partidos políticos tienen la posibilidad de autorregularse y auto-organizarse, estableciendo, por ejemplo, sus principios ideológicos, *verbi gratia*, mediante la aprobación y postulación de proclamas o idearios políticos de izquierda, centro o derecha, o bien, cualquiera otra que esté de acuerdo con la libertad de conciencia e ideológica que se establece en la Constitución federal y que sean consonantes con el régimen democrático de gobierno; sus programas de gobierno o legislativo y la manera de realizarlos; su estructura partidaria, las reglas democráticas para acceder a dichos cargos, sus facultades, su forma de organización y la duración en los cargos; los mecanismos para el control de la regularidad partidaria; los derechos y obligaciones de los afiliados, miembros o militantes; los procedimientos democráticos para elegir a los candidatos; el régimen disciplinario de dirigentes, servidores partidarios, afiliados y militantes; etcétera.

Asimismo, esa autodeterminación se ve reflejada en las acciones que los partidos políticos adoptan y ejercen para el cumplimiento de sus fines, específicamente por cuanto hace a las estrategias y actos para la obtención del voto; el uso, distribución y destino del financiamiento público y privado al que tienen derecho; el empleo de los tiempos en medios de comunicación, específicamente, en radio y televisión, etcétera.

Esa libertad o capacidad auto-organizativa de los partidos políticos posee varios aspectos no es omnímoda ni ilimitada, ya que es susceptible de delimitación legal, siempre y cuando se respete el núcleo básico o esencial de los correspondientes derechos político-electorales y principios fundamentales de los procesos electorales.

En efecto, tales delimitaciones derivan de la propia Constitución federal y se precisan en la legislación secundaria, ya que se trata de derechos político electorales y principios constitucionales de base constitucional y configuración legal, por lo que no tienen carácter absoluto, ilimitado e irrestricto sino que poseen ciertos alcances jurídicos que son precisos, los cuales son configurados o delimitados legalmente en tanto, se insiste, se respete el núcleo esencial previsto en la Constitución a fin de no hacer nugatorio los derechos político-electorales

fundamentales de asociación, de votar y ser votado, de información y de libertad de expresión.

En tal sentido, el carácter que tienen los partidos políticos como entidades de interés público, no es una expresión declarativa sino que tiene un desarrollo normativo, ya que la vida de los partidos políticos es objeto de configuración o regulación legal, a través de limitaciones o restricciones, o de medidas facultativas relativas a los aspectos torales que atañen a la vida institucional de los partidos políticos cuyo marco normativo y núcleo esencial, en tanto garantías institucionales, se delinean en la normativa electoral, a través —como se vio y según lo ha sostenido esta Sala Superior— del establecimiento del contenido mínimo de sus documentos básicos y mediante el reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones que permitan la consecución óptima de sus fines o, dicho en otros términos, el logro de su misión democrático-constitucional.

Igualmente, dicho carácter de los partidos políticos como entidades de interés público se traduce en el hecho de que la sociedad en su conjunto posee un legítimo interés en el desarrollo y progresión del sistema de partidos políticos, el cual se manifiesta en el cauce institucional del Estado, quien es el responsable del encuadre constitucional y legal de la actuación de los partidos políticos.

Dicho interés de la sociedad en los aspectos relevantes de la vida de los partidos políticos, el cual se ejerce a través del Estado, tiene por objeto asegurar la sujeción puntual y efectiva de los Partidos Políticos Nacionales al orden jurídico. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la LGPP, es obligación de los Partidos Políticos Nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático. Esto es, los partidos políticos —como todos y cada uno de los órganos del poder público— están vinculados a la Constitución y, en general, al sistema jurídico nacional. Ello tiene su razón de ser en el papel que los partidos políticos están llamados a realizar en un Estado constitucional democrático de derecho, es decir, en atención a las finalidades constitucionales que, como entidades de interés público, tienen encomendadas. Esto es, están obligados a regir sus actividades por el principio de juridicidad y los principios del Estado democrático no sólo por mandato legal sino también por razones de

congruencia con el régimen político en el que son actores fundamentales de conformidad con su encuadre constitucional.

Una interpretación distinta implicaría acoger la existencia de feudos o zonas de inmunidad, cuya existencia o permanencia es incompatible con un Estado constitucional democrático de derecho. Esto porque no puede haber democracia sin el sometimiento pleno al derecho de todos los sujetos jurídicos, incluidos todos y cada uno de los órganos del poder público y los partidos políticos en tanto entidades de interés público.

El criterio descrito se encuentra sustentado por la Sala Superior en las sentencias recaídas a los medios de impugnación identificados con las claves SUP-JDC-803/2002, SUP-JDC-641/2011 y SUP-RAP-193/2012.

**Falta de cuidado y omisión del PRI de garantizar debidamente el manejo, resguardo y custodia de la información confidencial contenida en los Listados Nominales**

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, se encuentra plenamente acreditado que el PRI, en su carácter de Partido Político Nacional, incumplió con su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente a la base de datos de la Lista Nominal generada por esta autoridad electoral, lo que derivó en un uso indebido de dicha información, al haberse utilizado para fines distintos al de su revisión, ello en contravención de la normativa en la materia, misma que ha sido señalada y analizada en el apartado correspondiente de esta Resolución.

En efecto, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, y de lo hasta aquí razonado se desprende que fue entregado a sus representantes ante la Comisión de Vigilancia Local y ante el Organismo Público Local Electoral, ambos en el Estado de Sinaloa, el Listado Nominal para Revisión para los procesos federal 2014-2015 y local 2015-2016, respectivamente, los cuales fueron reproducidos, conservados, actualizados y alojados en el sitio de internet denominado *Digital Ocean*, el cual se encontraba abierto, sin contraseña o protección alguna, para su descarga por personas ajenas al partido y al Instituto.

**Lo anterior, tomando en consideración que, de acuerdo con el análisis de la información localizada en el referido sitio digital realizado por la DERFE, mismo que ha sido previamente detallado, se estableció que el archivo descargado correspondía a la Lista Nominal de Electores para Revisión 2015, actualizado con la Lista Nominal de Electores para Revisión 2016.<sup>112</sup>**

Esto es, de los 2,072,585 (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco) registros encontrados, se acreditó que 1,947,980 (un millón novecientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta) correspondían a la Lista Nominal de Electores para Revisión 2015 entregada a la representante del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, mientras que 124,601 (ciento veinticuatro mil seiscientos uno) correspondieron a la Lista Nominal de Electores para Revisión 2016, entregada al representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa.

En ese sentido, se concluye que la información localizada en el sitio *Digital Ocean* se encontraba compuesta por fragmentos de listados nominales para revisión de dos procesos electorales diferentes, esto es, se trató de un documento generado a partir de las Listas Nominales para Revisión entregadas a sus representantes, de lo que deviene que éstas se encontraban actualizadas, por lo que necesariamente fueron **reproducidas, conservadas, manipuladas y alojadas en un sitio de internet**, el cual carecía de mecanismos de seguridad para su acceso, pues sin el uso de una contraseña se pudo acceder a él y descargar la información.

Lo anterior se agrava si se considera que el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de Sinaloa, hizo entrega a la Representante Propietaria del *PRI* ante la Comisión Local de Vigilancia de dicha entidad federativa, de la Lista Nominal de Electores de Revisión del Proceso Electoral Federal 2014-2015, el trece de febrero de dos mil quince, la cual fue devuelta al referido funcionario electoral por la misma representante, el diecinueve de noviembre del mismo año. Mientras que la información difundida en el sitio de *Digital Ocean* fue localizada el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, de lo que se desprende que necesariamente dicho documento digital fue indebidamente reproducido y conservado por el partido

---

<sup>112</sup> Dicha afirmación se encuentra en el oficio INE/DERFE/0745/2016, en la foja 42 del legajo 1, del expediente en que se actúa.

político denunciado, para poder ser posteriormente actualizado con el correspondiente a la Lista Nominal de Electores para Revisión del Proceso Electoral Local 2015-2016, entregada al representante del partido político el quince de febrero de dos mil dieciséis.

Esto es, una vez realizada la devolución de la información proporcionada por esta autoridad electoral a la representante del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia en el Estado de Sinaloa, se conservó indebidamente una reproducción de dicha información, cuando el partido político tenía el deber de destruir o eliminar cualquier resguardo que hubiera generado para cumplir con la tarea de revisión prevista en la normativa aplicable. Es ese sentido, el partido político faltó a su deber de cuidado al no garantizar que los funcionarios partidistas involucrados en la revisión de la Lista Nominal, no conservaran respaldo alguno y con ello se pusiera en riesgo la inviolabilidad de la confidencialidad de la información contenida en dicho documento. Y no solo eso, sino que la Lista entregada en un primer momento, fue actualizada al incorporarse datos contenidos en el Listado entregado a ese instituto político en un segundo momento.

De ahí que el partido político denunciado, fue omiso y faltó a su deber de cuidado al no prever mecanismos de seguridad mediante los cuales se garantizara la confidencialidad de la información y se impidiera que se diera un uso distinto al legalmente establecido, esto es, al de su revisión, pues como ha sido razonado, la información relativa a los listados nominales entregados a sus representantes para los procesos electorales federal 2014-2015 y local 2015-2016, fue indebidamente **reproducida, conservada, manipulada y alojada en un sitio de internet de acceso público.**

Lo anterior, en tanto que los partidos políticos al recibir las listas nominales, por conducto de sus representantes ante los distintos órganos electorales, no sólo ejercen el derecho que tienen legalmente conferido sino que también adquieren y aceptan las cargas u obligaciones que dicha recepción conlleva.

Ello, en la lógica de que si el INE tiene bajo su resguardo la información de millones de ciudadanos mexicanos y cuenta con medidas de seguridad, manejo, administración, cuidado, almacenamiento, entre otras para garantizar la inviolabilidad de esos datos; al momento de entregar a cualquier partido político esa información, también se traslada o lleva aparejada la obligación de manejo,



guarda, almacenamiento, custodia, etcétera, por parte del instituto político que la solicite, en el caso el PRI.

Considerar lo contrario, es decir, que al momento en que este Instituto entregó la información de millones de ciudadanos mexicanos a los representantes del PRI no le transmitió la obligación respecto de un debido cuidado, manejo y custodia, haría nugatoria la prohibición contenida en el artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, que prohíben su utilización para fines distintos al de su revisión.

En el caso, la responsabilidad que se le atribuye al partido denunciado atiende a la publicación, circulación o divulgación de la información en el portal *Digital Ocean*, derivado de **su actuar negligente, su falta de cuidado y atención en el manejo, administración y resguardo de la información (listas nominales) proporcionada por este Instituto, en contravención a la confidencialidad de los datos personales contenidos en la Lista Nominal de Electores que en su momento se entregó para su revisión.**

Al respecto, cabe mencionar que durante la secuela del presente procedimiento, el partido político denunciado estuvo en aptitud, tanto en el emplazamiento, como en el correspondiente etapa de alegatos, de demostrar ante la autoridad instructora las acciones y medidas de seguridad que se adoptaron para salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información contenida en el padrón electoral, así como, en su caso, acreditar mediante los medios de prueba que considerara pertinentes, el destino de la base de datos correspondientes a esa información, lo cual, tal como obra en autos, no realizó. Por el contrario, el partido político se limitó a contestar de manera sesgada, respecto de las omisiones a su deber de cuidado que se le atribuían, sin realizar manifestación alguna, ni mucho menos exhibir elemento de prueba suficiente que llevaran a esta autoridad a concluir de manera diversa a la que en este fallo se arriba.

Lo anterior, no obstante de estar en posibilidades fácticas de pronunciarse, debidamente, respecto de todas las imputaciones que se le formularon, al haber tenido acceso a la totalidad de actuaciones contenidas en el expediente y ser debidamente emplazado y mediante la vista de alegatos que le fue formulada.

Asimismo, se considera relevante resaltar que aun cuando se le cuestionó al partido político sobre las medidas de seguridad empleadas para resguardar la información, éste además de no dar una respuesta clara, tampoco indicó que dentro de su normativa interna existiera algún protocolo, reglamento o normativa de seguridad de cualquier índole para el manejo de información sensible como lo es la base de datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

En este contexto, en atención no sólo a la literalidad de la norma, sino al entendimiento sistemático del sistema electoral, **ningún partido político podría copiar, reproducir, modificar, alterar, grabar, alojar en un sitio físico o de internet, conservar, variar o transformar de cualquier forma y por cualquier medio la base de datos original que entrega el Registro Federal de Electores**, por ejemplo, si se mezclan listados nominales de procesos distintos o se agrega un campo o se elimina un solo dato se estaría incumpliendo la norma que prohíbe el uso del padrón y la lista nominal para un fin distinto, entendida la acepción de la palabra “uso”, como hacer que una cosa sirva para algo,<sup>113</sup> en este caso exclusivamente para revisión, pues precisamente de ese examen que se realice al padrón y a la lista nominal a cargo de los partidos políticos, se derivará, en su caso, la posibilidad de proponer por medio de sus representaciones, que sea el Instituto como única autoridad el que corrija, enmiende o repare la base de datos del padrón y la lista nominal.

Asimismo, al recibir la información de la base de datos del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores por parte de esta autoridad, los partidos políticos adquieren, indubitadamente, la responsabilidad de resguardarla, cuando menos en la misma forma en que lo hace el Instituto, es decir, contar con los insumos normativos, materiales y humanos mínimos necesarios para su resguardo, manejo, archivo o destrucción, una vez que dicha información ha sido revisada, lo cual en la especie no ocurrió, debido a que, se insiste, quedó acreditado que el partido político recibió la información objeto del presente procedimiento, sin que llevara a cabo acciones, actos, o medidas tendentes a su cuidado, resguardo y custodia efectiva, lo que se agrava si se toma en consideración que, como se explicó, se trata de información sensible y confidencial frente a la cual los partidos

---

<sup>113</sup> Cfr. <http://lema.rae.es/drae/?val=usar>

políticos tienen la correlativa obligación de vigilancia y cuidado riguroso en su manejo y utilización.

En ese sentido, la infracción relacionada con el **uso inadecuado del Listado Nominal de Electores**, se actualiza cuando ocurre **cualquiera** de los siguientes supuestos:

1. **Conservar la información** contenida en el Padrón Electoral y/o Listados Nominales de Electores, **fuera de los plazos** legalmente establecidos para ello;
2. **Dar un uso distinto** al de **revisión** al Padrón y/o de la Lista Nominal de Electores, a cargo de los partidos políticos, **con independencia del resultado que se produzca** ; y,
3. **Comunicar o dar a conocer** la información que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores, salvo en los supuestos que la propia ley prevé.

Finalmente, no se debe perder de vista que de conformidad con lo establecido en la tesis VIII/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es **REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. EL RIESGO DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, CONSTITUYE UN ILÍCITO ADMINISTRATIVO ELECTORAL**, cuando la conducta de los partidos políticos genere un riesgo de que personas ajenas a ellos conozcan los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores, debe sancionarse en función de la peligrosidad de la conducta, con independencia del resultado material que produzca.

Lo anterior, en razón de que el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE establece que los referidos documentos, datos e informes se les clasifica como estrictamente confidenciales y tal carácter da sustancia a la relación que se establece entre este Instituto y el partido político que los recibe, en donde éste adquiere el deber de cuidarlos, de manera tal, que sólo dicho partido puede manejarlos para los fines específicos que establece la ley.

Así, debido a que los datos proporcionados por los ciudadanos son de carácter personal, su protección es uno de los derechos más importantes en nuestra

sociedad y, por ende, el partido político que los recibe debe evitar cualquier conducta que ponga en riesgo su conocimiento por personas ajenas a él, por lo que el actuar contrario, debe ser sancionado en términos de la citada normativa.

Derivado de todo lo anterior, esta autoridad considera que el actuar negligente del PRI en relación con su obligación de resguardar la información del padrón electoral que esta autoridad le entregó, no sólo derivó en el incumplimiento a lo establecido en el artículo 148, párrafo 2 de la LGIPE, por haber alojado y conservado fuera de los plazos legalmente establecidos para la revisión de la información, los datos que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores, para conformar el padrón electoral y las listas nominales, los cuales, se reitera, son estrictamente confidenciales por disposición legal, sino también en el incumplimiento a las finalidades constitucionales que, como entidades de interés público, tienen encomendadas. Esto es, están obligados a regir sus actividades por el principio de juridicidad y los principios del Estado democrático no sólo por mandato legal sino también por razones de congruencia con el régimen político en el que son actores fundamentales de conformidad con su encuadre constitucional, lo cual comprende el deber que tenía de adoptar las medidas necesarias para que la información personal bajo su custodia fuera debidamente resguardada y no se divulgara indebidamente, para garantizar así su confidencialidad.

En consecuencia, es **fundado** el presente procedimiento sancionador ordinario en contra del **PRI**.

- **Excepciones y defensas formuladas por el representante del PRI, ante al Consejo General de este Instituto**

### **Ámbitos diferenciados de responsabilidad nacional y local**

El partido político aduce que cuenta con treinta y dos Comités Directivos Estatales y que los representantes ante las comisiones locales de vigilancia y Organismos Públicos Locales son sabedores de las obligaciones que deben observar en el manejo de la información que las Autoridades Electorales administrativas les proporcionan. En ese sentido, considera que al existir ámbitos de responsabilidades diferenciados, los representantes estatales son los agentes en el manejo de la información que en el ámbito de sus atribuciones la autoridad les proporciona.

En concepto de esta autoridad no le asiste la razón al partido político denunciado, toda vez que con independencia de que la reproducción, conservación, actualización y alojamiento de la información que fue localizada en un sitio de internet público corresponda a la entregada a sus representantes ante la Comisión Local de Vigilancia y ante el Organismo Público Local Electoral, ambos en el Estado de Sinaloa, ello no es suficiente para eximir al partido político de su responsabilidad de salvaguardar la información recibida por sus representantes a nivel local.

Lo anterior, en tanto que, de conformidad con lo establecido en los artículos 85; 88, fracción II; 89, fracción VIII; 136; 138 y 115, de los Estatutos del partido político denunciado, los representantes a nivel local actúan a nombre y representación del partido político.

En efecto, en las referidas disposiciones estatutarias se establece que el Comité Ejecutivo Nacional tiene a su cargo la representación y dirección política del Partido en todo el país, asimismo dicho Comité tiene como atribución, actuar a través de la Presidencia y de la Secretaría General, como representante nacional del Partido con facultades de supervisión y, en su caso, de autorización en las decisiones de las demás instancias partidistas en los términos de la ley.

Asimismo, se prevé que la persona titular de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional tiene entre sus facultades, designar a las comisionadas y comisionados, así como a los representantes del Partido ante los organismos políticos electorales que correspondan y autorizar la realización de esas designaciones a los Comités Directivos de las entidades federativas.

Por su parte, los Comités Distritales de las entidades federativas tienen a su cargo la representación y dirección política del Partido en la entidad correspondiente, y dentro de sus atribuciones está la de designar, con la verificación del Comité Ejecutivo Nacional, a las comisionadas y los comisionados en los órganos electorales en la entidad federativa, Distritos electorales, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para realizar las actividades que establezcan las leyes electorales y las específicas que se les señalen.

Por último, la oficina de la representación ante el Consejo General del INE tiene entre sus atribuciones, ostentar y ejercer la representación política y legal del Partido ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales federales en materia electoral.

De lo anterior, es dable concluir que los representantes del partido ante los órganos de vigilancia a nivel local y ante los Organismos Públicos Locales, al ser designadas por los órganos que ejercen la representación del Partido en la entidad federativa respectiva, con la verificación del órgano que ejerce la representación nacional del mismo partido, esto es el Comité Ejecutivo Nacional, ejercen a su vez, como el nombre del propio cargo lo indica, la representación del partido ante los órganos electorales, por lo que se entiende que actúan en su nombre y representación.

De ahí que la actuación realizada por los funcionarios partidistas respecto del manejo de la información contenida en los listados nominales para revisión que fue encontrada en un sitio público de internet *Digital Ocean*, es responsabilidad del partido político como entidad política nacional.

Por tanto, la responsabilidad de los funcionarios partidistas a nivel local no suplanta la del partido político, pues es en representación y en estricto ejercicio de las prerrogativas constitucionales conferidas de éste que reciben la información de las listas nominales y es que tienen el derecho de revisarla.

### **Supuesta falta de acreditación de circunstancias de tiempo, modo y lugar**

El PRI refiere que no se acreditó que la información se encontraba a disposición libre para que cualquier persona pudiese consultarla, pues fue un experto en informática quien hizo del conocimiento del Instituto sobre la publicación de la base de datos. También refiere que tampoco se acreditó el número de consultas realizadas a la página de internet y si para ello se accedió desde diversas computadoras, por lo que, en su concepto, no se puede acreditar un manejo indebido de la información pues, asume, que no existe, siquiera de manera indiciaria, que los datos personales de los ciudadanos fueron consultados por personas ajenas al partido o no autorizadas para ello, violándose la secrecía y confidencialidad de los datos contenidos en el Padrón Electoral y Listado Nominal entregados para su revisión a sus representantes en Sinaloa.

En concepto de esta autoridad, el que no se haya acreditado la forma o la persona que materialmente reprodujo la información, la actualizó y la almacenó en el servidor de internet de *Digital Ocean*, no es razón suficiente para eximir al partido político denunciado de responsabilidad, pues éste tenía el deber de cuidado respecto de esa información, por lo que debió implementar medidas de seguridad para garantizar que sus representantes a nivel local tuvieran el mismo deber de cuidado y a su vez garantizaran que se diera el uso correcto de la información que les fue entregada, esto es, que se utilizara exclusivamente para su revisión y no se reprodujera, actualizara y alojara en un sitio público de internet, como en la especie aconteció, toda vez que se acreditó que aun cuando la información relativa al Listado Nominal para Revisión 2015 ya había sido devuelta a esta autoridad por su representante ante la Comisión Local de Vigilancia, el partido conservó copia de éste, la actualizó con información del listado correspondiente al proceso local 2016 y los alojó en un portal de internet cuyo acceso no era restringido, cuando en su caso, tenía el deber de destruir cualquier resguardo que hubiera realizado como mecanismo para su revisión.

En tal sentido, el cómo fue encontrada la información o si ésta fue o no consultada o utilizada por personas no autorizadas, resulta intrascendente en el presente caso, toda vez que ello no supone la razón por la cual se encuentra acreditada la responsabilidad del partido político, en tanto que la infracción denunciada consiste en **la falta al deber de cuidado para salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente a la base de datos de las Listas Nominales generada por esta autoridad electoral para los procesos federal 2014-2015 y locales 2015-2016, lo que derivó en un uso indebido de dicha información, al haberse utilizado para fines distintos al de su revisión, en tanto que la reproducción, actualización y alojamiento de ésta en un sitio de internet, es consecuencia de su actuar negligente.**

Por tanto, resulta irrelevante para el caso el número de consultas que se realizaron a la información alojada en el servidor en cuestión, pues la falta al deber de cuidado no se actualiza en función de que la información haya sido descargada por personas no autorizadas o por el número de consultas que recibió, sino por no tomar las medidas de seguridad necesarias al interior del partido político y garantizar el debido resguardo de la información que les fue entregada con los protocolos de seguridad aprobados por esta autoridad electoral.

En iguales términos, no le asiste la razón al partido político cuando argumenta que los hechos denunciados por sí mismos, no pueden ser considerados como elemento suficiente para acreditar un uso indebido de la Lista Nominal de Electores, ya que, en su concepto, la simple circunstancia de que dicho listado hubiere sido ubicado en un página de internet, no implica que hubiera sido almacenada por dicho partido político.

Lo anterior, pues como fue razonado en el apartado correspondiente, el listado nominal para revisión ubicado en el sitio denominado *Digital Ocean* corresponde al que fue entregado a sus representantes ante la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, Oglá Rita Bojórquez Gámez, así como el que fue entregado al representante de dicho partido ante el Consejo General del Instituto Electoral en la referida entidad federativa para el proceso local 2015-2016, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, de acuerdo con la marca de rastreabilidad (ADN) que les fue incorporada, mediante la cual se identificó plenamente que la información localizada en el portal digital correspondía sin lugar a dudas a la entregada a los representantes del PRI ante las instancias locales.

En consecuencia, ha quedado plenamente acreditada la falta al deber de cuidado del PRI, al advertirse la indebida reproducción, actualización, alojamiento y conservación de la información que les fue entregada a sus representantes relativa a las listas nominales para revisión, pues en este caso lo relevante es que la información que se localizó en internet corresponde a la que se entregó, en su momento, al referido partido político el cual tenía el deber, en primer lugar, de no conservarla una vez que había concluido la finalidad para la cual le fue entregada, esto es, para su revisión, y en segundo lugar tenía el deber de implementar todas las medidas de seguridad necesarias a fin de que dicha información no fuera divulgada indebidamente, como en la especie aconteció.

## **5.5. RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PARTIDISTAS**

### **a) CESAR MANUEL OCHOA SALAZAR, OTRORA SECRETARIO DE ACCIÓN ELECTORAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI EN SINALOA.**

El procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** por cuanto hace a **Cesar Manuel Ochoa Salazar** por la violación a lo establecido en los artículos 1, 6 y 41



de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE; 32, 33 y 40 de los *Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo CG35/2013*; **por la falta de cuidado y omisión de garantizar debidamente el manejo, resguardo y custodia de los datos que proporcionan los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información**, en atención a las siguientes consideraciones.

De las constancias que integran el expediente en que se actúa se acreditó que, el trece de febrero de dos mil quince, Oglia Rita Bojórquez Gámez, en su carácter de representante propietaria del *PRI* ante la Comisión Local de Vigilancia en Sinaloa, recibió la Lista Nominal de Electores de Revisión para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, en un archivo digital cifrado y en dispositivo de almacenamiento USB, así como los documentos de guías para la verificación del código de integridad y descifrado del archivo que contiene el citado producto electoral, por parte del Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en la referida entidad federativa y que, en la misma fecha, dicha funcionaria partidista hizo entrega de dicha información a Cesar Manuel Ochoa Salazar, en ese momento Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del *PRI*, en Sinaloa.

En ese sentido, la responsabilidad de Cesar Manuel Ochoa Salazar se encuentra acreditada, en tanto que en el escrito mediante el cual comparece al presente procedimiento, reconoce que recibió el trece de febrero de dos mil quince el dispositivo de almacenamiento digital que contenía la lista nominal de electores para revisión en el marco del Proceso Electoral Federal 2014-2015, es decir, sí tuvo en su poder la información materia de la denuncia, aun cuando aduzca que con posterioridad la haya remitido al área competente para su revisión.

En efecto, al momento en que recibió la información motivo de denuncia, el ciudadano en cuestión ostentaba el cargo de Secretario de Acción Electoral en el Comité Directivo Estatal del *PRI* en Sinaloa, por lo que de conformidad con lo

establecido en artículo 95, fracción III,<sup>114</sup> en relación con el 139,<sup>115</sup> ambos de los Estatutos del PRI, tenía el deber de vigilar que los comisionados y comisionadas designados por los órganos competentes, ante los órganos electorales observaran estrictamente las leyes en la materia y cumplieran las instrucciones que se les dictaran.

Por ello, al recibir la información por parte de quien ostentaba el cargo de representante del partido político ante la Comisión Local de Vigilancia, tenía el deber de garantizar que la Lista Nominal de Electores para Revisión, fuera utilizada exclusivamente para ello y no se le diera un uso distinto. En tal sentido, tenía la responsabilidad, al igual que la referida representante, de salvaguardar la información mediante la implementación de medidas de seguridad suficientes para garantizar que ésta solamente fuera revisada por personas autorizadas por el partido político, sin ser indebidamente reproducida, conservada, actualizada y alojada en un sitio de internet público, esto es, debió verificar que se implementaran los mecanismos necesarios para la revisión de la información y una vez concluida dicha tarea, cerciorarse de que no se le diera un mal uso, y se eliminaran o destruyeran los resguardos que se hubieran generado para tales efectos.

En igual sentido, aun cuando el denunciado base su defensa en que supuestamente turnó la información a la Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, Teresa de Jesús Nieto Ríos, ello no es razón suficiente para eximirlo de responsabilidad, pues con independencia del destino que hubiera dado a la información, tenía el deber de vigilar que esta fuera debidamente resguardada y utilizada exclusivamente para su revisión.

---

<sup>114</sup> Estatutos PRI, **artículo 95**. La Secretaría de Acción Electoral, tendrá las atribuciones siguientes:

III. Vigilar que los comisionados y las comisionadas, así como representantes que el Comité Ejecutivo Nacional designe directamente o a través de sus órganos competentes, ante los diversos órganos electorales, observen estrictamente las leyes de la materia y cumplan las instrucciones que se les dicten con excepción de la representación a que se refiere la fracción anterior.

<sup>115</sup> Estatutos PRI, **artículo 139**. Las personas titulares de la Presidencia de los Comités Directivos de las entidades federativas designarán a los secretarios que integran dicho órgano, previstos en el artículo 137 de estos Estatutos, a excepción de quien deba asumir la titularidad de la Contraloría General, cuyo nombramiento se realizará por el Consejo Político de la entidad federativa y distribuirán entre sus dirigentes las actividades por realizar, atendiendo a la naturaleza de los cargos que ocupan. Para ello, serán aplicables en lo conducente las disposiciones relativas a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, las que tendrán para las secretarías de los Comités Directivos un sentido fundamental de conducción, programación y control de la actividad política.

Asimismo, cabe precisar que en el expediente no obra constancia alguna por la cual se acredite que el referido representante efectivamente hizo entrega a la Directora de Informática del partido político denunciado a nivel local, del dispositivo electrónico con la información relativa a la Lista Nominal para Revisión correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015.

En tal sentido, aun cuando su función hubiera sido de enlace entre la representante ante la Comisión Local de Vigilancia y la Dirección de Informática, esta autoridad concluye que dicha razón no puede considerarse como una justificación para no observar un debido cuidado y garantizar la implementación de medidas de seguridad necesarias, tendentes a preservar la confidencialidad de un documento de significado tan trascendental como lo son los datos que conforman el padrón electoral y la lista nominal de electores, los cuales contienen la información confidencial de la mayoría de ciudadanos mayores de edad, quienes otorgan su información personalísima a este Instituto para cumplir, sí, en principio una obligación constitucional y legal, pero quienes otorgan su información confiando en que los sujetos involucrados en el manejo y resguardo de la misma, entre ellos los partidos políticos, tendrán los mínimos necesarios para asegurar que esa información no sea conocida por algún tercero ajeno, como en el caso aconteció.

Por tanto, si el denunciado no acreditó ni justificó qué acciones se tomaron para garantizar el uso debido de la información y ésta fue encontrada en un servidor de acceso al público sin que existiera algún medio de protección de la misma, se encuentra acreditado que éste incumplió con el deber de cuidado al no tomar acciones para salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente con la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal, lo que derivó en un uso indebido de la información, al haberse utilizado para fines distintos al de revisión, en contravención a lo establecido en la normativa electoral, misma que ha sido citada y analizada en el apartado correspondiente al marco normativo en la presente Resolución.

Asimismo, cabe resaltar que el denunciado tampoco acreditó que el dispositivo en el que le fue entregada la información hubiera sido efectivamente entregado a la funcionaria partidista que refiere, ni para qué efectos le entregó la información, o bien si al momento de entregar el dispositivo digital en cuestión, tomó alguna

medida de seguridad para garantizar el debido uso de la información en los términos legales con los cuales le fue entregada.

Por tanto, no le asiste la razón al denunciado cuando alega que su función como tenedor de la información concluyó al momento de entregarla a la Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, pues en función del cargo partidista que ostentaba en aquel momento, tenía el deber de verificar que la representante ante la Comisión Local de Vigilancia hubiera tomado las medidas necesarias para salvaguardar la información o, en su caso, implementar mecanismos para impedir que se reprodujera, actualizara y alojara la información en un sitio público de internet, así como garantizar que la Directora de Informática a quien afirma le entregó la información no le diera un uso distinto y que en cuanto concluyera la labor de revisión destruyera o eliminara todo resguardo generado como mecanismos de seguridad para cumplir con su obligación legal y estatutaria.

Por tanto, al haberse identificado que parte de la información que le fue entregada por Oglia Rita Bojórquez Gámez, en su calidad de representante del partido político ante la Comisión Local de Vigilancia, era la misma información localizada en el sitio *Digital Ocean*, se desprende que éste realizó o consintió la reproducción no autorizada de los medios electrónicos que contenían los instrumentos electorales ya precisados, sin implementar mecanismos para su revisión mediante los cuales se garantizara el adecuado uso de la información.

De ahí que, con independencia de que no se encuentre acreditado que Cesar Manuel Ochoa Salazar hubiera reproducido personalmente la información y la hubiera alojado en el sitio de internet *Digital Ocean*, o hubiera conservado una copia de la información para eventualmente actualizarla con el padrón local del Proceso Electoral celebrado el siguiente año, lo cierto es que faltó a su deber de cuidado en términos de lo establecido en el artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, así como en los numerales 26 y 34 de los *LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES*.

Asimismo, resulta aplicable, en su *ratio essendi*, la tesis relevante VIII/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es **REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. EL RIESGO DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, CONSTITUYE UN ILÍCITO ADMINISTRATIVO ELECTORAL**, cuando la conducta de los partidos políticos genere un riesgo de que personas ajenas a ellos conozcan los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores, debe sancionarse en función de la peligrosidad de la conducta, con independencia del resultado material que produzca.

Lo anterior, en razón de que el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE establece que los referidos documentos, datos e informes se les clasifica como estrictamente confidenciales y tal carácter da sustancia a la relación que se establece entre este Instituto y el partido político que los recibe, en donde éste adquiere el deber de cuidarlos, de manera tal, que sólo dicho partido, a través de sus representantes, puede manejarlos para los fines específicos que establece la ley.

Así, debido a que los datos proporcionados por los ciudadanos son de carácter personal, su protección es uno de los derechos más importantes en nuestra sociedad y, por ende, el partido político que los recibe debe evitar cualquier conducta que ponga en riesgo su conocimiento por personas ajenas a él, por lo que el actuar contrario, debe ser sancionado en términos de la normativa antes referida.

En consecuencia, debido a que **Cesar Manuel Ochoa Salazar** era el Secretario de Acción Electoral, estaba obligado a evitar cualquier conducta que pusiera en riesgo o provocara el uso indebido de la información por personas ajenas al partido, por lo que su actuar contrario, debe ser sancionado en términos de la citada ley.

Por estas razones, al estar probado que durante la línea o cadena de seguimiento respecto de la posesión del mencionado instrumento electrónico, el denunciado se vio directamente involucrado, esta autoridad electoral nacional considera que debió, de manera obligada y siguiendo las líneas lógicas de control sobre el manejo de información sensible, instrumentar acciones tendentes a conocer, de manera pormenorizada, cuál fue el uso que se le dio a la información, demostrar cuáles fueron las medidas óptimas y eficaces para atestiguar la privacidad de la

información contenida y, garantizar a toda costa el resguardo o depósito final de dichos elementos informáticos; dejando testimonio documental de todo ello. Lo que en la especie no ocurrió.

La anterior conclusión guarda razonabilidad, si se toma en consideración que dentro de la normativa electoral existen múltiples disposiciones que establecen las distintas medidas de seguridad que deben ser observadas por este Instituto, en el manejo de la información que integra o conforma el padrón electoral, esto con el propósito de hacer frente a la obligación contenida en los artículos 6° y 16, párrafo segundo, Constitucional, relativa a la protección absoluta de la información concerniente a la vida privada de las personas, y a la protección de datos personales; mismas que, deben ser exigibles de la misma forma al tratarse de la misma información que resguarda este Instituto; medidas de seguridad que no pueden verse diluidas por los partidos políticos ni mucho menos por el personal y directivos encargados de su custodia y manejo al salir del ámbito de custodia de la autoridad electoral nacional.

Por tanto, al no estar acreditado de manera fehaciente en el expediente que el PRI, y en específico, **Cesar Manuel Ochoa Salazar**, hayan garantizado las mínimas medidas de seguridad para asegurar la inviolabilidad de la información considerada como confidencial, se concluye que el denunciado fue omiso en cumplir con las obligaciones que le impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la ley electoral, así como, la legislación en materia de protección de datos personales.

En consecuencia, esta autoridad determina que el procedimiento sancionador seguido en contra de **Cesar Manuel Ochoa Salazar** es **fundado**.

**b) JESÚS GONZALO ESTRADA VILLARREAL, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PRI ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA**

El procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** por cuanto hace **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal** por la violación a lo establecido en los artículos 1, 6 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE; 32, 33 y 40 de los *Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los*

*Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo CG35/2013; por la falta de cuidado y omisión de garantizar debidamente el manejo, resguardo y custodia de los datos que proporcionan los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información, en atención a las siguientes consideraciones.*

En el presente asunto se acreditó que **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal** en su calidad de representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, recibió en un dispositivo de almacenamiento *USB*, la Lista Nominal para Revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis.

Ello, mediante oficio signado por el Presidente de la Comisión Local de Vigilancia, de quince de febrero de dos mil dieciséis, en el que se le reafirmó que el documento entregado, podría únicamente utilizarse para actividades de verificación y revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 152, numeral 1 de la LGIPE, por lo que se le apercibió para que no reprodujera el material entregado y esté fuera reintegrado dentro de los cinco días hábiles posteriores a la conclusión del plazo de impugnaciones del Proceso Electoral Local.

De ahí que al actuar como representante del partido ante el organismo público local y recibir el dispositivo digital, tenía el deber de realizar las acciones tendientes a garantizar el resguardo y salvaguarda de la información que se le entregó, por lo que al entregarla a otra funcionaria partidista, supuestamente para su revisión, debió establecer una ruta de seguridad para garantizar que no se le diera un uso distinto al establecido en la ley, esto es, para revisión y verificación.

En tal sentido, al encontrarse acreditado que existió un manejo inadecuado de la información que le fue entregada, al no existir constancia de que se tomaron las acciones necesarias para resguardarla y custodiarla a efecto de que no se difundieran los datos personales contenidos en las Listas Nominales respectivas, el funcionario en cuestión incumplió con su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente con la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal, lo que derivó en un uso

indebido de la información, al haberse utilizado para fines distintos al de revisión, en contravención a lo establecido en la normativa electoral, misma que ha sido citada y analizada en el apartado correspondiente al marco normativo en la presente Resolución.

Por tanto, contrario a lo aducido en sus excepciones y defensas, la responsabilidad del funcionario electoral en cuestión, no concluyó con la entrega de la información a la Dirección de Informática del Comité Directivo Estatal, pues era su deber el garantizar el debido resguardo de la información a efecto de que no se le diera un uso distinto, como en la especie aconteció, toda vez que fue localizada, junto con el listado correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015, en un sitio de internet sin ninguna seguridad, esto es, abierta para que cualquier persona con la pericia necesaria pudiera acceder a ésta y darle un uso indebido, de ahí que se encuentre acreditada su responsabilidad.

En otro orden de ideas, el denunciado también basa su defensa en que conforme a las facultades que estatutariamente tiene conferidas en su carácter de Titular de la Secretaría Jurídica del Comité Directivo Estatal, no se encuentra la práctica de revisiones de materiales electorales como son las Listas Nominales de electores. Sin embargo, ello no lo exime de responsabilidad, toda vez que este recibió la información en nombre y representación del partido político, al encontrarse acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, como representante del PRI, esto es no actuó como Secretario Jurídico del partido, por lo que las atribuciones que tiene con tal carácter resultan irrelevantes para el caso.

Lo anterior, en tanto que, como representante del partido político ante el organismo público local y haber recibido la información relacionada con las Listas Nominales para Revisión, tenía un deber de cuidado, que como ya se ha razonado incumplió.

En consecuencia, con independencia de que el funcionario denunciado haya hecho entrega a otra área del Comité Directivo Estatal, a saber a la Dirección de Informática, al haber recibido la información por parte de personal de este Instituto, era el responsable directo de garantizar que no se le diera un uso distinto a la información contenida en el Listado Nominal que se le entregó para su resguardo, lo que en la especie no aconteció, al haberse ubicado alojada en el servidor



público denominado *Digital Ocean*, lo que necesariamente implicó que dicha información fuera reproducida y actualizada con elementos de la lista nominal entregada al propio partido político en el Proceso Electoral Federal anterior.

Asimismo, resulta relevante referir que mediante escrito de primero de julio, entregado a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el Estado de Sinaloa, el referido funcionario partidista hizo entrega del dispositivo de almacenamiento *USB* con la Lista Nominal de Electores en formato digital para revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, y que en dicho escrito el mismo funcionario manifestó que la información contenida en dicho dispositivo no había sido reproducida ni almacenada, como se le había indicado en el oficio mediante el cual le fue entregada.

Esto es, su obligación de deber de cuidado concluía hasta en tanto se devolviera la información a la autoridad electoral y no cuando la entregara a otro funcionario partidista.

Además, debe tomarse en consideración que la obligación de resguardar y cuidar la información que contiene datos personales de los ciudadanos era también exigible al denunciado, en virtud de que el ostentaba la representación directa entre el partido político y el Instituto Electoral Local, por lo que si el partido entregó esta responsabilidad a esta persona es porque existía una relación de confianza para que actuara en su representación cuidando todos sus intereses y cumpliendo cada una de sus obligaciones, entre ellas la de manejar, usar y resguardar los datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral.

Por tanto, el denunciado debió seguir un protocolo mínimo de actuación como por ejemplo, confirmar que la información hubiera sido revisada y, **en consecuencia, solicitar su devolución, resguardo o destrucción de conformidad con los estándares mínimos exigidos y exigibles a nivel nacional e internacional para el manejo de este tipo de información**, al no haber sido así, el denunciado fue omiso y por tanto es responsable de la falta de cuidado en el manejo y resguardo de la información materia del presente procedimiento.

En consecuencia, toda vez que su actuar negligente trajo como consecuencia la reproducción, actualización y alojamiento de la información confidencial que le fue entregada, se encuentra acreditada su responsabilidad debido a la actualización

de la falta al deber de cuidado que tenía impuesto por el cargo representativo ostentado al recibir la documentación en cuestión.

Asimismo, resulta aplicable, en su *ratio essendi*, la tesis relevante VIII/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es **REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. EL RIESGO DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, CONSTITUYE UN ILÍCITO ADMINISTRATIVO ELECTORAL**, cuando la conducta de los partidos políticos genere un riesgo de que personas ajenas a ellos conozcan los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores, debe sancionarse en función de la peligrosidad de la conducta, con independencia del resultado material que produzca.

Lo anterior, en razón de que el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE establece que los referidos documentos, datos e informes se les clasifica como estrictamente confidenciales y tal carácter da sustancia a la relación que se establece entre este Instituto y el partido político que los recibe, en donde éste adquiere el deber de cuidarlos, de manera tal, que sólo dicho partido, a través de sus representantes, puede manejarlos para los fines específicos que establece la ley.

Así, debido a que los datos proporcionados por los ciudadanos son de carácter personal, su protección es uno de los derechos más importantes en nuestra sociedad y, por ende, el partido político que los recibe debe evitar cualquier conducta que ponga en riesgo su conocimiento por personas ajenas a él, por lo que el actuar contrario, debe ser sancionado en términos de la normativa antes referida.

De ahí que, por cuanto a **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal** el procedimiento sancionador resulta **fundado**.

**c) JOSÉ MORA LEÓN, PERSONA AUTORIZADA POR LA REPRESENTACIÓN DEL PRI ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA.**

En concepto de esta autoridad electoral, el procedimiento sancionador resulta **INFUNDADO** respecto de **José Mora León**, por la supuesta violación a lo establecido en los artículos 1, 6 y 41 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; en relación con lo dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE; 32, 33 y 40 de los *Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo CG35/2013*; **por la falta de cuidado y omisión de garantizar debidamente el manejo, resguardo y custodia de los datos que proporcionan los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información**, en atención a las siguientes consideraciones.

Si bien, en las constancias que integran el presente expediente, se encuentra acreditado que dicho ciudadano fue autorizado por el representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para recibir el Listado Nominal para Revisión, y que el cinco de febrero de dos mil quince acudió a las instalaciones de la Junta Local de este Instituto en Sinaloa y realizó el registro de la llave pública, es decir el *enrolamiento* de la misma, de conformidad con lo establecido en el Manual de Operación aplicable, ello no resulta suficiente para determinar que existe responsabilidad de su parte, toda vez que no fue quien recibió el dispositivo digital con la Lista Nominal para Revisión respectiva.

En efecto, según consta en el oficio VRFE/105/2016, signado por Eduardo Fierro Barraza Presidente de la Comisión Local de Vigilancia, el quince de febrero de dos mil dieciséis, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, en su calidad de Representante Propietario del PRI ante al Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa, recibió un sobre cerrado y sellado que contenía el dispositivo de almacenamiento USB con la lista Nominal de Electores en formato digital para revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis.

Asimismo, según refiere el denunciado entregó la llave pública a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, a quien reconoce como su jefe inmediato, lo cual no se encuentra controvertido en el presente expediente. Por el contrario, el referido representante propietario refiere en su comparecencia al presente procedimiento, que fue él quien recibió el dispositivo con la lista nominal para revisión e hizo entrega de la misma a la Directora de Informática del mismo Comité Directivo Estatal.

Además, según reconoció Teresa de Jesús Nieto Ríos, Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, en el escrito mediante el cual desahogó la vista de alegados dada por la autoridad sustanciadora, ésta recibió de Jesús Gonzalo Estrada Villareal el dispositivo *USB* con la lista nominal, así como las claves para su descifrado, de lo que se desprende que José Mora León efectivamente hizo entrega de la llave pública a su jefe inmediato, esto es, al representante del partido político ante el Instituto local.

Por tanto, en el expediente no consta que José Mora León hubiera tenido en su poder el dispositivo de almacenamiento *USB* con la información relativa a la Lista Nominal para Revisión, esto es, **no se encuentra acreditado que el referido ciudadano hubiera tenido los dos dispositivos para estar en posibilidad de descifrar la información e incurrir en algún tipo de responsabilidad al realizar un mal uso de ésta.**

Lo anterior, se robustece si se considera que era subordinado de quien recibió la lista nominal en formato digital, esto es, resulta razonable que José Mora León, por instrucciones de su jefe inmediato acudiera a las instalaciones de la Junta Local a realizar el *enrolamiento* de la llave pública y se la hubiera entregado una vez que ésta fue creada, pues fue Jesús Gonzalo Estrada Villarreal quien remitió la documentación a la instancia correspondiente del partido político para su revisión.

De ahí que, en concepto de ésta autoridad, dicho ciudadano no puede ser considerado responsable del uso indebido de la información contenida en el Listado Nominal, pues aun cuando éste generó la llave pública para acceder a la información contenida en el dispositivo electrónico *USB* en el que se encontraba la información clasificada, misma que, como ya quedó acreditado, fue encontrada en el sitio de internet denominado *Digital Ocean*, no existen elementos que permitan determinar que tuvo a su alcance los elementos para reproducir la información, actualizarla y alojarla en el referido sitio de internet.

**d) JOSÉ ALBERTO SALAS BELTRÁN, SECRETARIO DE ACCIÓN ELECTORAL DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI EN SINALOA**

En concepto de esta autoridad electoral, el procedimiento sancionador resulta **INFUNDADO** respecto de **José Alberto Salas Beltrán**, por la supuesta violación a lo establecido en los artículos 1, 6 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE; 32, 33 y 40 de los *Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo CG35/2013*; **por la falta de cuidado y omisión de garantizar debidamente el manejo, resguardo y custodia de los datos que proporcionan los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información**, en atención a las siguientes consideraciones.

Del escrito por medio del cual Jesús Gonzalo Estrada Villarreal compareció al presente procedimiento en respuesta al emplazamiento formulado por la autoridad sustanciadora, se desprende que éste afirma que el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis entregó las listas nominales de electores, en versión impresa, al titular de la Secretaría de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, José Alberto Salas Beltrán, lo cual acreditó con el acuse de recibo respectivo. Asimismo, dicha circunstancia fue corroborada por el referido funcionario partidista mediante su comparecencia al presente procedimiento.

Sin embargo, en concepto de esta autoridad, el procedimiento sancionador ordinario en que se actúa es **infundado** respecto de **José Alberto Salas Beltrán**, toda vez que, como quedó acreditado en el apartado correspondiente, la información encontrada en el sitio denominado *Digital Ocean*, corresponde a los archivos cifrados de la Lista Nominal de Electores para Revisión en el marco del Proceso Electoral 2014-2015 a nombre de Ogla Rita Bojórquez Gámez, representante del *PRI* ante la Comisión Local de Vigilancia de Sinaloa, actualizada con la Lista Nominal de Electores para Revisión generada en el marco de los Procesos Electorales Locales 2015-2016 a nombre de José Mora León, persona autorizada por la representación del PRI ante el Instituto Electoral de Sinaloa.

Esto es, dicha información correspondió a los archivos digitales de las Listas Nominales de Electores para Revisión para los representantes partidistas en el

marco de los procesos electorales federal 2014-2015 y local 2015-2016, a los cuales les fue incorporada la marca de rastreabilidad *ADN*.

Por tanto, toda vez que la información que recibió José Alberto Salas Beltrán no corresponde con la que se encontró alojada en el sitio de internet de *Digital Ocean*, ya que le fue entregada la lista nominal en su versión impresa, de ahí que no existan elementos para considerar que el referido ciudadano incurrió en un uso indebido de los datos contenidos en la lista nominal de electores, ni faltó a un deber de cuidado.

**e) TERESA DE JESÚS NIETO RÍOS, DIRECTORA DE INFORMÁTICA DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI EN SINALOA**

El procedimiento sancionador ordinario es **FUNDADO** por cuanto hace a **Teresa de Jesús Nieto Ríos** por la violación a lo establecido en los artículos 1, 6 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo dispuesto en los artículos 126, párrafos 3 y 4; 148, párrafo 2 y 150 de la LGIPE; 32, 33 y 40 de los *Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en Posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos Generales, Locales, Distritales, las Comisiones de Vigilancia y los Organismos Electorales Locales, aprobados mediante Acuerdo CG35/2013*; **por la falta de cuidado y omisión de garantizar debidamente el manejo, resguardo y custodia de los datos que proporcionan los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información**, en atención a las siguientes consideraciones.

Del análisis de las constancias que obran en el expediente se acreditó que Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, en su carácter de Secretario Jurídico y de Transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa y Representante Propietario de dicho partido político ante el Consejo General del Instituto Electoral de la referida entidad federativa, **entregó a Teresa de Jesús Nieto Ríos el dispositivo de almacenamiento digital que contenía la lista nominal de electores para revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, junto con la llave pública para tener acceso a dichos archivos digitales, para que ésta realizara la revisión correspondiente, en su carácter de Directora de Informática del referido Comité.**

La denunciada refirió en su escrito por el que desahogó la vista de alegatos respectiva, que al ocupar el cargo de Directora de Informática del Comité Directivo Estatal, **es la funcionaria facultada para la recepción de los dispositivos de almacenamiento digital que contienen los listados nominales de electores para los Procesos Electorales Federales y locales**, y que con motivo de ello recibió los dispositivos relativos al proceso local 2015-2016 en el Estado de Sinaloa.

En tal sentido, se tiene que la referida funcionaria tuvo en su poder la información confidencial entregada al representante de su partido político ante el Consejo General del Instituto Electoral local, así como los mecanismos para su descifrado, de ahí que, por la naturaleza de su encargo, **tenía el deber de garantizar que la información que le fue entregada no fuera reproducida, actualizada y alojada en un sitio de internet, tomar las previsiones necesarias para que se utilizara exclusivamente para su revisión y se realizara la eliminación o destrucción de los resguardos realizados para tal efecto, en los términos legalmente previstos.**

Por tanto, la obligación de resguardar y cuidar la información que contiene datos personales de los ciudadanos era exigible a la denunciada, en virtud de que ella ostentaba el cargo en el cual el partido depositó la responsabilidad de realizar la revisión correspondiente, por lo que puede interpretarse que existía una relación de confianza para que actuara en su representación cuidando todos sus intereses y cumpliendo cada una de sus obligaciones, entre ellas la de manejar, usar y resguardar los datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral.

En tal sentido, este órgano colegiado considera que las constancias que integran los autos del presente procedimiento sancionador son suficientes para acreditar, la conducta que se le imputa a la denunciada, consistente en el presunto uso indebido de los datos que proporciona el Registro Federal de Electores, para la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información, al haber faltado a su deber de cuidado en el uso y manejo de la referida información.

Por tanto, la denunciada debió seguir un protocolo mínimo de actuación como por ejemplo, confirmar que la revisión correspondiente se realizara **de conformidad con los estándares mínimos exigidos y exigibles a nivel nacional e internacional para el manejo de este tipo de información**, al no haber sido así, la denunciada fue omisa y por tanto es responsable de la falta de cuidado en el manejo y resguardo de la información materia del presente procedimiento.

En consecuencia, toda vez que su actuar negligente trajo como consecuencia la reproducción, actualización y alojamiento de la información confidencial que le fue entregada, se encuentra acreditada su responsabilidad debido a la actualización de la falta al deber de cuidado que tenía impuesto por el cargo representativo ostentado al recibir la documentación en cuestión.

Asimismo, resulta aplicable, en su *ratio essendi*, la tesis relevante VIII/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es **REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. EL RIESGO DE VIOLACIÓN A SU CONFIDENCIALIDAD, CONSTITUYE UN ILÍCITO ADMINISTRATIVO ELECTORAL**, cuando la conducta de los partidos políticos genere un riesgo de que personas ajenas a ellos conozcan los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores, debe sancionarse en función de la peligrosidad de la conducta, con independencia del resultado material que produzca.

Lo anterior, en razón de que el artículo 126, párrafo 3, de la LGIPE establece que los referidos documentos, datos e informes se les clasifica como estrictamente confidenciales y tal carácter da sustancia a la relación que se establece entre este Instituto y el partido político que los recibe, en donde éste adquiere el deber de cuidarlos, de manera tal, que sólo dicho partido, a través de sus representantes, puede manejarlos para los fines específicos que establece la ley.

Así, debido a que los datos proporcionados por los ciudadanos son de carácter personal, su protección es uno de los derechos más importantes en nuestra sociedad y, por ende, el partido político que los recibe debe evitar cualquier conducta que ponga en riesgo su conocimiento por personas ajenas a él, por lo que el actuar contrario, debe ser sancionado en términos de la normativa antes referida.



Dentro de sus excepciones y defensas la denunciada adujo lo siguiente:

**Responsabilidad de funcionarios del Instituto de garantizar la confidencialidad del padrón y de las listas nominales**

La denunciada refiere que en primer lugar el personal del Instituto es el responsable de garantizar la confidencialidad de la información del padrón electoral y de las listas nominales.

De lo argumentado en la presente Resolución, en la que se han detallado los protocolos de seguridad seguidos por esta autoridad, mediante los cuales se busca la protección y confidencialidad de la información que los ciudadanos entregan voluntariamente para la conformación del referido padrón y lista nominal se desprende que el personal de este Instituto cumplió a cabalidad con su deber de garantizar la seguridad y resguardo de dichos datos personales.

También ha quedado plenamente acreditado, que las medidas de seguridad que el Instituto ha implementado para el manejo, administración y resguardo de la citada información confidencial cumplen con los objetivos y fines para los cuales fueron creadas, que es, mantener la seguridad de los datos de los ciudadanos, pero más importante aún, conservar y acrecentar la confianza ciudadana en que sus datos personales estarán protegidos y la certeza de que el padrón electoral únicamente sale del dominio y resguardo del Instituto, ya sea por mandato legal o jurisdiccional.

Además, también quedó acreditado que la información del listado nominal encontrado en el sitio de internet denominado *Digital Ocean*, correspondía al entregado a los representantes del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia y ante el Organismo Público Local, ambos en el estado de Sinaloa, de conformidad con las marcas de rastreabilidad (ADN) que le fueron incorporadas previamente a ser entregados a los referidos representantes. De ahí que la afirmación de la denunciada en el sentido de que el personal del Instituto es el primer responsable de la información, carece de sustento.

**Supuesta ausencia de elementos para determinar el uso indebido de la información relacionada con los listados nominales**

La denunciada refiere que la entrega que se le hizo de la Lista Nominal de Electores, se ajustó a lo previsto por la normatividad electoral, con el único objetivo de su revisión, sin que existiera algún elemento o hecho en el sentido de haberle dado a la información respectiva un trato diferente al que la ley contempla.

Al respecto, en concepto de este Consejo General no le asiste la razón a la denunciada, toda vez que, contrario a lo argumentado, ha quedado plenamente acreditado que se dio un uso distinto al legalmente previsto a la información relacionada con los listados nominales entregados a los representantes del partido político en cuestión, pues al encontrarse los listados nominales de los procesos federal 2015 y local 2016, alojados en un sitio de internet, se desprende que éstos necesariamente fueron **indebidamente reproducidos, actualizados y alojados en un dominio de internet público, al cual se accedió sin la necesidad de una contraseña o mecanismo de seguridad**. Esto es, una vez concluidas las tareas de revisión de los listados respectivos, no se tomaron los protocolos de seguridad necesarios para destruir los resguardos creados para esos efectos, por el contrario, al haberse actualizado el Listado Nominal de Revisión para el proceso 2015 con el respectivo del proceso local 2016, ello implicó necesariamente que se conservó indebidamente una copia del listado 2015, con lo que se acredita fehacientemente la falta al deber de cuidado que la referida funcionaria partidista debió tener respecto de la información que recibió para su revisión.

Asimismo, resulta dogmática tal afirmación, pues la denunciada no aporta elemento alguno para demostrar que, en ejercicio de sus funciones, únicamente revisó la información sin darle un uso distinto.

Por el contrario, en los dos escritos mediante los cuales compareció al presente procedimiento argumentó que, *“... sin afirmar que así haya sucedido, que posiblemente el subir información al sitio de internet en mención (Digital Ocean), lo que no fue realizado por la suscrita, sea una manera de compartir la información con el personal del propio Partido Revolucionario Institucional para la revisión de la misma...”*.

Esto es, reconoce, aun sin afirmar que así haya sucedido o que ella haya sido quien materialmente subió la información al sitio de internet en cuestión, que alojar la información en un sitio público es una manera de compartirla para efectos de su revisión, de lo que se desprende que hay un reconocimiento implícito de que se

dio un uso indebido a la información confidencial que le fue entregada, al no haber implementado mecanismos suficientes para su eliminación al haber concluido las tareas de verificación o revisión.

En ese sentido, con independencia de qué persona fue quien materialmente reprodujo la información, la actualizó con base en los dos registros de *ADN* de los listados encontrados y la alojó en el sitio de internet denominado *Digital Ocean*, lo cierto es que, al haberse localizado en dicho sitio, existe una clara falta al deber de cuidado por parte de **todos los funcionarios partidistas que tuvieron acceso a la información**, pues en todos ellos recayó la obligación de garantizar la salvaguarda de la confidencialidad de la información que tuvieron en su poder, en contravención al derecho de los ciudadanos de que la información que proporcionan al Registro Federal de Electores sea debidamente resguardada.

De ahí que, Teresa de Jesús Nieto Ríos, al igual que el resto de los funcionarios partidistas quienes tuvieron acceso a la información en cuestión, tenía la obligación del deber de cuidado de resguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente con la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal.

En tal sentido, al ser la persona responsable de realizar la revisión de la información, como Directora del área de Informática al interior del partido político, debió tomar las medidas necesarias al interior del área a su cargo para garantizar que el personal que depende de ella, no tuviera las herramientas para reproducir la información, actualizar la Lista Nominal para Revisión utilizada en el Proceso Electoral Federal 2014-2015 con la Lista utilizada en los procesos locales 2015-2016 y finalmente alojarla en un sitio público de internet.

Lo anterior, en tanto que, como ella misma lo manifestó, era la persona responsable para la recepción de los dispositivos de almacenamiento digital que contienen los listados nominales de electores que con motivo de los procesos federales y locales produce y distribuye el INE.

De ahí que tuviera la obligación de tomar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que el personal a su cargo se limitara a realizar las funciones de revisión, sin dar un uso distinto a la información que le fue entregada con motivo de las funciones que realiza al interior del partido político.

### **Ausencia de prohibición de subir la información a internet**

Contrario al alegato de la denunciada relativo a que no existe algún señalamiento o artículo que prohibiera subir la información a internet, como ya quedó precisado en el apartado relativo al *Tipo Administrativo*, esta autoridad considera que no le asiste la razón a la funcionaria partidista en virtud de que de la normatividad aplicable y que ha sido previamente analizada, existen para los partidos políticos y **sus militantes, obligaciones de confidencialidad respecto de la información que conformaba el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, así como de no dar a la misma una finalidad u objeto distinto al de la revisión del propio padrón y las listas nominales.**

En consecuencia, con dichas previsiones legales, también se tiene prevista como infracción el incumplimiento de dichas obligaciones.

Asimismo, dado que dicha información es de acceso a los partidos políticos, está **establecida para estos últimos y sus militantes, una prohibición de dar a dicha información un uso, objeto o finalidad distintos a la revisión del Padrón electoral y las listas nominales**, en el entendido de que, por consecuencia y atendiendo a la calidad de confidencial de la información, están igualmente compelidos a garantizar su secrecía frente a terceros.

En congruencia con tales deberes y obligaciones de confidencialidad y de no destinar la información a un uso distinto a la revisión, se desprende la prohibición de no reproducir, actualizar, conservar o almacenar indebidamente la información relativa al padrón electoral y las listas nominales por cualquier medio.

En consecuencia, la violación al deber de cuidado, o a la confidencialidad de la información que conformaba el Registro Federal de Electores, así como el darle un uso o finalidad distintos al de revisar el Padrón Electoral y **las listas nominales, es una infracción en que pueden incurrir tanto los partidos políticos como sus militantes.**

De ahí que, si existe una clara prohibición dirigida a los partidos políticos y sus militantes de subir a internet la información relacionada con las listas nominales y

el padrón electoral, sin mecanismos de seguridad, en atención al deber de confidencialidad que deben privilegiar y salvaguardar.

**Supuesta falta de acreditación de circunstancias de tiempo, modo y lugar**

La denunciada indica que no se precisa la hora, minuto y segundo en que la autoridad electoral encontró en el sitio de internet denominado *Digital Ocean*, las listas nominales entregadas a los representantes del partido político, limitándose a señalar que fue el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el día en que supuestamente se subió la información al sitio de internet denominado DigitalOcean.

De igual forma, señala que no existe claridad respecto de las circunstancias de modo en que supuestamente se difundió la información, ya que la autoridad electoral, únicamente señala que se encontró en la dirección IP 162.243.158.165, puerto 27017, la información materia del presente procedimiento, sin embargo no señala si el acceso a dicha dirección y puerto fue libre o requería candado de seguridad para acceder a ella, ni tampoco se precisa el número de personas que supuestamente tuvieron o pudieron tener acceso a la información difundida, como tampoco se especifica en qué consistió el supuesto uso indebido de la información referida.

Asimismo, refiere que del momento en el que fue entregada la información a los representantes del partido ante el órgano de vigilancia y ante el Instituto local, transcurrió una temporalidad considerable, sin que hubiere quedado claro el uso que se dio a dicha información.

En concepto de esta autoridad, tampoco le asiste la razón a la denunciada, toda vez que resulta irrelevante para el caso la hora, minuto y segundo en que se encontró la información denunciada en el sitio de internet *Digital Ocean*, o que no esté claro cuánto tiempo tuvieron la información en su poder cada uno de los sujetos implicados, la forma en que se subió la información a dicha plataforma o bien, cuántas personas pudieron o tuvieron acceso a ésta, toda vez que el uso indebido de dicha información se encuentra plenamente acreditado.

Esto es, la infracción cometida por la funcionaria partidista denunciada no se encuentra relacionada con haber sido ella quien materialmente reprodujo la

información, la conservó y la alojó en el referido sitio de internet, o bien, cuánto tiempo estuvo expuesta, incluso cuántas personas tuvieron acceso a esta, sino a la falta al deber de cuidado y la consecuente exposición de la información para que fuera localizada en un sitio público de internet sin los mecanismos de protección necesarios, dejando la información abierta para que cualquier persona con pericia suficiente pudiera acceder a ella, en contravención al derecho de confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos que se encuentran contenidos en los Listados Nominales que fueron expuestos.

Por las razones expuestas, este Consejo General considera que el procedimiento sancionador ordinario es fundado por cuanto hace a Teresa de Jesús Nieto Ríos.

## **6. CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

- **Calificación de la falta**

Para calificar debidamente la falta, se deben valorar los siguientes elementos:

- a. Tipo de infracción.
- b. Bien jurídico tutelado. (trascendencia de las normas transgredidas)
- c. Singularidad o pluralidad de la falta.
- d. Circunstancias de tiempo, modo y lugar de la infracción.
- e. Comisión dolosa o culposa de la falta.
- f. Reiteración de infracción o vulneración sistemática de las normas.
- g. Condiciones externas y medios de ejecución.

### **a. Tipo de infracción. (acción u omisión)**

En un primer momento, debe señalarse que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que las conductas infractoras de acción, en sentido estricto, se realizan a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en las conductas por omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien, no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Conforme a lo argumentado en la presente Resolución se desprende que el **PRI** incumplió con la normatividad electoral a través de una conducta considerada de

**omisión**, como consecuencia del indebido cuidado que observó en el manejo, guarda y custodia de los datos contenidos en los listados nominales, los cuales fueron proporcionados por los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la conformación de dicho instrumento, todo ello **en perjuicio de la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información**.

Por cuanto hace a **César Manuel Ochoa Salazar, Jesús Gonzalo Estrada Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos**, también se demostró que incurrieron en una falta de cuidado en la salvaguarda y preservación de la inviolabilidad de la confiabilidad de la información correspondiente a la base de datos de la Lista Nominal de Electores para Revisión, generada por esta autoridad electoral, de conformidad con las razones antes expuestas.

En ese sentido, las **omisiones** del **PRI**, así como de **César Manuel Ochoa Salazar, Jesús Gonzalo Estrada Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos** constituyen una infracción sancionable por la normativa electoral federal, tal y como se esquematiza a continuación:

Sujeto	Tipo de infracción	Denominación de la infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<b>PRI</b>	Constitucional y legal En razón de que se trata de la vulneración de preceptos de la Constitución, la LGIPE y la LGPP	Los partidos políticos tendrán acceso de forma permanente a la base de datos del padrón electoral y las listas nominales, exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información con fines distintos	El indebido cuidado que observó en el manejo, guarda y custodia de los datos contenidos en las Listas Nominales para Revisión, los cuales fueron proporcionados por los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la conformación de dicho instrumento; en contravención al derecho de confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos.	Artículos 6, 16, párrafo 2 y 41 de la Constitución Federal; 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP, así como 126, párrafos 3 y 4; 148 párrafo 2, con relación al 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la LGIPE

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

Sujeto	Tipo de infracción	Denominación de la infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<b>César Manuel Ochoa Salazar, Jesús Gonzalo Estrada Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos.</b>	Constitucional y legal En razón de que se trata de la vulneración de preceptos de la Constitución, la LGIPE y la LGPP	Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores serán estrictamente confidenciales.  Los miembros de los Consejos General, Locales y Distritales así como de comisiones de vigilancia tendrán acceso al padrón electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darle o destinarla a finalidad u objeto distinto a al de la revisión del padrón electoral y las listas nominales.	El incumplimiento de su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confiabilidad de la información correspondiente a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal, generada por esta autoridad electoral, lo que derivó en un presunto uso indebido de dicha información.	Artículos 6, 16, párrafo 2 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, párrafo 3 y 4; 148, párrafo 2, 447, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE

**b. Bien jurídico tutelado. (Trascendencia de las normas vulneradas)**

Las disposiciones jurídicas invocadas en el apartado anterior, mismas que como se dijo, fueron vulneradas por los denunciados, tienden a preservar un régimen de legalidad que garantice tanto la observancia de los derechos individuales, como la normativa electoral, instruyendo con ello que los partidos políticos, sus dirigentes y afiliados cumplan las obligaciones constitucionales y legales que tienen encomendadas y se acaten las órdenes que la autoridad competente les impone en el ejercicio de sus atribuciones.

Así pues, las previsiones contenidas en los artículos 6º, 16, párrafo segundo y 41, constitucionales, entrañan un derecho elemental en favor de todo gobernado, en donde el Estado Mexicano garantiza que aquella información que se refiera a la



vida privada y datos personales, sea protegida en los términos y con las excepciones que fijan las propias leyes.

En este contexto, la violación a esta disposición por parte de los hoy denunciados, trastocó dicha garantía, en contravención al derecho de los ciudadanos de que sus datos personales contenidos en el padrón electoral y las listas nominales de electores se encuentren debidamente resguardados, en términos de lo establecido en los artículos 126, párrafo 3, y 148, párrafo 2, de la LGIPE, con motivo de la falta de cuidado mostrada por los denunciados en el cuidado, manejo y custodia de la información que previamente les fue proporcionada por el entonces Instituto Federal Electoral, de conformidad con las particularidades que se establecen en la resolución INE/CG77/2016, dictada por este Consejo General.

Además al ser los partidos políticos entidades de interés público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 Constitucional, tienen la obligación de constituirse como garantes de la plena e irrestricta observancia de la propia disposición suprema, incluido por supuesto, la garantía establecida en los citados artículo 6°, 16, párrafo 2 y 41, constitucionales, así como de las leyes que de ella emanen, **debiendo hacer un especial énfasis en aquellas previsiones que entrañen la protección a los derechos primordiales en favor de todo gobernado, como lo es, en el caso, la salvaguarda a la garantía de protección de datos personales y al derecho elemental a la intimidad.**

Asimismo, en la Base V, apartado B, inciso a), numeral 3, del mencionado artículo 41 constitucional, se establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establecen la Constitución y las leyes, para los procesos electorales federal y locales, el padrón y la lista de electores.

En el caso que aquí se analiza, tales dispositivos se conculcaron con la conducta **de no hacer -omisión-** a cargo de los denunciados, derivada de la falta de cuidado demostrada en el uso o manejo de los datos que proporciona el Registro Federal de Electores del INE a los partidos políticos, para la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en contravención al derecho de confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos que se encuentran contenidos en dichos instrumentos electorales, así como de su salvaguarda.

En efecto, tanto el artículo constitucional en mención, como el diverso, 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la LGIPE, así como 447, inciso e) y 25, párrafo 1, de la LGPP, establecen la obligación de los partidos de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, esto es, el deber de obedecer la normativa tanto electoral como de cualquier otra índole en la que puedan tener intervención y dar cabal cumplimiento a ella.

Dichas disposiciones, implican una referencia en sentido amplio, sobre el marco regulatorio que deben respetar y cumplir los partidos políticos, ya que al referirse a la obligación de éstos de sujetar su conducta a los cauces legales, se hace referencia a los deberes de estos entes de observar y ser garantes del cumplimiento de todo el sistema jurídico vigente y, por tanto, a cumplir y hacer cumplir las obligaciones y prohibiciones relacionadas con las actividades de los partidos políticos y, por supuesto, de sus miembros.

En este sentido, cada una de las normas que conforman el entramado jurídico que debe cumplir cada sujeto obligado, protege un bien jurídico tutelado en lo particular, existiendo entonces una multiplicidad de bienes jurídicos que se busca proteger al conformar el sistema jurídico y que son necesarios a efecto de garantizar los principios democráticos.

Con base en ello, y tomando en cuenta que los partidos son entidades de interés público que constituyen un mecanismo que posibilita a la ciudadanía participar activamente en el desarrollo democrático del país, contribuyendo toralmente a la integración de los órganos de representación política y posibilitar el acceso del pueblo al ejercicio del poder público, es de suma relevancia que cumplan cabalmente con las normas que los rigen, ya que en caso contrario, se vulneraría la finalidad imperiosa para la cual fueron creados.

Ahora bien, por lo que respecta al artículo 148, párrafo 2, de la LGIPE, se establece, por una parte, el derecho que tienen los partidos políticos de acceder a la base de datos que integra el padrón electoral y las listas nominales, como entes que contribuyen a la conformación y consolidación misma de la democracia en México, sin embargo, también se impone, la obligación irrestricta de utilizar dicha

información exclusivamente para su revisión –en términos de emitir observaciones sobre los ciudadanos inscritos o excluidos del padrón para efectos de los procesos electorales– sin que puedan, por ningún motivo, darle un uso diverso a dicha información.

Lo anterior, conlleva implícitamente a que su resguardo y custodia se dé con el mayor cuidado y protección, a fin de salvaguardar la obligación de proteger los datos e información de una de las mayores bases de datos conformada por el Estado Mexicano, como lo es el Padrón Electoral elaborada por este Instituto.

En efecto, si bien es cierto que el precepto en cita faculta a los institutos políticos a tener acceso al padrón electoral y el listado nominal, por conducto del personal acreditado, única y exclusivamente para que éstos emitan las observaciones que consideren pertinentes, como coadyuvantes de la autoridad en esta materia, con el fin de mantener actualizada esa base de datos, con el propósito de garantizar que los ciudadanos estén registrados y puedan ejercer el derecho al voto, también cierto es que el resguardo de la información ahí contenida se erige como una obligación de suma importancia para quienes tienen acceso al mismo, ya que su contenido conlleva datos confidenciales.

En este sentido, tanto la autoridad electoral como los partidos políticos (incluyendo a su personal o directivos que tenga acceso a los mismos), deben salvaguardar esa información, en atención al mandato establecido en los artículos 6° y 16, párrafo 2, de la Constitución Federal.

**c. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada.**

Cabe señalar que aun cuando se acreditó que tanto **César Manuel Ochoa Salazar, Jesús Gonzalo Estrada Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos**, como el **PRI** violentaron la normativa constitucional y legal referida previamente, tal situación no implicó la presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, ya que el hecho material que se infringe consiste en la manifiesta falta de cuidado (omisión) en el uso, manejo y resguardo adecuado de los datos que proporciona el Registro Federal de Electores del INE a los partidos políticos, en contravención al derecho de confidencialidad de los datos personales de los

ciudadanos que se encuentran contenidos en los Listados Nominales que fueron expuestos

**d. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.**

Para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta infractora debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, que son:

**I. Modo.** En la especie, **César Manuel Ochoa Salazar, Jesús Gonzalo Estrada Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos**, así como el **PRI** incumplieron con las previsiones contenidas tanto en la Constitución como en la normativa electoral a través de una omisión, toda vez que faltaron de manera trascendente a su deber de cuidado en el uso, manejo y resguardo adecuado de la información contenida en las Listas Nominales de Electores para Revisión, por medio de la base de datos que le fue proporcionada por el Registro Federal de Electores de este Instituto, misma que posteriormente se vio expuesta en una red informática con acceso general; en contravención al derecho de los ciudadanos a la confidencialidad de sus datos personales ahí contenidos, además de verse vulnerada por sí misma, una de las bases de datos más importantes de nuestro país, y de mayor trascendencia para la consolidación de nuestra democracia.

**II. Tiempo.** Conforme a las constancias que obran en autos se acreditó que, el trece de febrero de dos mil quince, Oglá Rita Bojórquez Gámez en su carácter de Representante Propietaria del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia en el Estado de Sinaloa, recibió la Lista Nominal de Electores de Revisión, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015, en un archivo digital cifrado y en dispositivo de almacenamiento USB, así como las guías para la verificación del código de integridad y descifrado del archivo, dicha ciudadana devolvió la referida documentación el diecinueve de noviembre del mismo año.

Por su parte, el quince de febrero de dos mil dieciséis, Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, en su carácter de Representante Propietario del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, recibió el dispositivo de almacenamiento USB con la Lista Nominal de Electores en formato digital para revisión con corte al quince

de enero de dos mil dieciséis. El mismo funcionario devolvió ante la instancia local de este Instituto la referida documentación el cinco de julio del mismo año.

Posteriormente, el **dieciocho de mayo de dos mil dieciséis**, esta autoridad tuvo conocimiento de los hechos materia del presente procedimiento a través de un correo electrónico recibido por el Coordinador de Procesos Tecnológicos de la *DERFE* de este Instituto mediante el cual se advertía sobre la presunta difusión, en una fuente pública accesible, de información con datos demográficos de México. Lo cual fue verificado por personal de la referida Dirección Ejecutiva, quienes concluyeron que la información correspondía a las listas nominales entregadas a los partidos políticos para su revisión en el marco de los procesos electorales federal 2014-2015 y local en el Estado de Sinaloa 2015-2016, concretamente a las listas nominales entregadas a los representantes del PRI, conforme a las marcas de rastreabilidad encontradas en dichos archivos.

**III. Lugar.** La infracción acreditada tuvo verificativo al encontrarse la información relativa a las listas nominales de electores para revisión para los procesos federal 2014-2015 y local en el Estado de Sinaloa 2015-2016 en un servidor de internet denominado *Digital Ocean*.

**e. Comisión dolosa o culposa de la falta.**

En materia administrativa electoral, el dolo significa la conciencia y voluntad del sujeto infractor de realizar el tipo objetivo de una infracción administrativa. Por ello, una infracción tiene este carácter, cuando el sujeto activo la comete conociendo los elementos del tipo administrativo o previendo como posible el resultado típico y, aun así, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la norma.

A partir de lo anterior, no obra dentro del expediente elemento probatorio alguno a partir del cual pudiese deducirse que **César Manuel Ochoa Salazar, Jesús Gonzalo Estrada Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos**, así como el **PRI**, hubieran actuado previendo el posible resultado de su falta de cuidado, es decir, en autos no se encontró acreditada la probable intención o el pleno conocimiento de las consecuencias del tipo administrativo para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo).

Asimismo, en concordancia con lo establecido por la Sala Superior en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-231/2009, toda vez que el dolo tiene que acreditarse plenamente y que este no puede ser presumido, se determina que estamos ante una **omisión culposa** de la normativa electoral.

En efecto, esta autoridad considera que los sujetos denunciados, al mostrar una actitud despreocupada, ligera y poco responsable, en relación con el deber de cuidado que se encontraban obligados a observar para el oportuno y correcto resguardo de la información que tuvieron bajo su custodia, según cada una de las circunstancias y condiciones particulares que estos mostraron, transgredieron de manera directa las previsiones contenidas en la norma, relativas a garantizar que el partido político, siempre y en todo momento, resguardase la confidencialidad y secrecía que debía imperar en el manejo de la información reservada que le fue proporcionada por esta autoridad, en términos de lo dispuesto en los artículos 6, y 41 Constitucionales, así como 126 y 148 de la LGIPE.

Es decir, el indebido resguardo y protección de la información que le fue proporcionada al PRI, por parte de los sujetos que tuvieron en sus manos esa información, si bien es calificada por esta autoridad como una conducta **culposa de carácter omisiva**, no debe perderse de vista que tuvo un efecto por demás pernicioso sobre la base de datos que integra el Padrón Electoral de la cual se deriva la Lista Nominal de Electores.

**f. Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas.**

- **Funcionarios partidistas**

Se estima que con la conducta infractora imputada no existe una vulneración sistemática de la normativa constitucional y legal en materia electoral, a cargo de **Teresa de Jesús Nieto Ríos, César Manuel Ochoa Salazar y Jesús Gonzalo Estrada Villareal**, en razón de que la falta que se actualizó respecto de dichos ciudadanos en un solo momento.

- **PRI**

Por cuanto hace al instituto político denunciado, en concepto de esta autoridad electoral, sí se acreditó **reiteración en la comisión de la infracción**, toda vez que la información de las Listas Nominales para Revisión que fue localizada en el sitio de internet *Digital Ocean*, correspondió a dos procesos electorales distintos, esto es, la correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como al Proceso Electoral Local del Estado de Sinaloa 2015-2016. Por lo que se considera que **la falta se presentó en dos momentos**, toda vez que se acreditó que en un solo archivo se encontraban registros relativos al Listado Nominal para Revisión del proceso federal 2015 **actualizado** con registros pertenecientes al listado correspondiente al proceso local del año siguiente; lo que necesariamente implicó que el partido conservó una copia de la Lista Nominal para Revisión del Proceso Electoral Federal, para después actualizarla con la Lista Nominal entregada por esta autoridad para el proceso local.

Corroborar lo anterior, el hecho de que la representante del PRI ante la Comisión Local de Vigilancia recibió el dispositivo USB con la Lista Nominal para Revisión 2015, el trece de febrero de dos mil quince y la devolvió el diecinueve de noviembre del mismo año, por su parte, el representante Propietario del PRI ante el Instituto Electoral de Sinaloa, recibió el USB con la Lista Nominal para Revisión 2016, el quince de febrero de dos mil dieciséis y la devolvió el cinco de julio siguiente, por lo que si la información de las Listas Nominales aludidas se localizó en el sitio de internet *Digital Ocean*, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, necesariamente existió indebidamente una reproducción de los listados nominales, con lo que se evidencia que la falta se materializó en dos momentos.

**g. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución.**

Respecto al modo de ejecución, por lo que hace a **César Manuel Ochoa Salazar, Jesús Gonzalo Estrada Villareal y Teresa de Jesús Nieto Ríos**, consistió en la omisión de salvaguardar y preservar debidamente y con las garantías de seguridad necesarias, la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal que

tuvieron en su poder, de conformidad con los hechos que se tuvieron por acreditados en la presente Resolución.

Por lo que hace al **PRI**, el modo de ejecución consistió, en la omisión de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confidencialidad de la información correspondiente a la base de datos del Padrón Electoral y Lista Nominal, a la que se encontraba obligado a observar y respetar, en su carácter de entidad de interés público.

Dichas conductas actualizaron una transgresión a lo dispuesto en los artículos 6, 16, párrafo 2, y 41, de la Constitución Federal, y 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP, y 126, párrafo 3 y 4; 148, párrafo 2; 443, párrafo 1, incisos a) y n), y 447, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE.

- **Individualización de la sanción**

A efecto de imponer apropiadamente la sanción, en el presente caso, se analizarán los siguientes elementos:

- a. Calificación de la gravedad de la infracción.
- b. Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.
- c. Reincidencia.
- d. Sanción a imponer.
- e. Condiciones socioeconómicas del infractor.
- f. Impacto en las actividades del infractor

**1. PRI**

**a) Calificación de la gravedad de la infracción**

Atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados y a las particularidades del caso señaladas, esta autoridad considera que la conducta infractora atribuida en el presente caso al **PRI**, debe calificarse como de **gravedad ordinaria**, en razón de que:



- Se realizaron conductas en contravención al derecho a la **confidencialidad de los datos personales y protección de información relativa a la vida privada**, previsto en normas de carácter constitucional y legal en perjuicio de 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco).
- Faltó de manera manifiesta a su deber de cuidado en el uso, manejo, custodia y resguardo de la información que los ciudadanos entregaron a esta autoridad electoral, para la conformación del padrón electoral y listas nominales.
- El bien jurídico tutelado que se vulneró con dicha conducta omisiva, fue la preservación de la confidencialidad de la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales de los gobernados.
- La falta de cuidado propició que la información del padrón electoral se publicara en Internet, el cual es un medio de comunicación social de alcance global.
- Se acreditó **reiteración** en la comisión de la infracción al haberse configurado en dos momentos, toda vez que se acreditó que en un solo archivo se encontraban registros relativos a listados nominales de dos procesos electorales distintos.
- Se trata de una **infracción por omisión**.
- Es una infracción de carácter **culposa**, al no estar acreditado el dolo en su comisión.
- **No se acreditó que existiera reincidencia** en la configuración de la falta.

**b) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción**

De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento alguno que hagan suponer a esta autoridad, que las conductas infractoras que aquí se estudian tuviesen algún beneficio cuantificable en favor del partido político incoado.

**c) Reincidencia**

En el presente asunto, no puede considerarse actualizada la reincidencia por cuanto hace al partido político, pues en los archivos de este Instituto, no obra alguna resolución en la que se le haya sancionado por faltas como la que ha quedado debidamente acreditada.

**d) Sanción a imponer**

Para determinar el tipo de sanción a imponer en el presente asunto, debe recordarse que la LGIPE confiere a la autoridad electoral arbitrio para determinar, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor y que, a su vez, sea bastante y suficiente para prevenir que cualquier otro ente realice una falta similar, es decir, que la sanción, por sí misma, sea de la entidad suficiente para lograr tener un efecto disuasivo ante posibles conductas similares por parte del hoy denunciado o de otros sujetos.

Es importante destacar, que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones análogas en el futuro, no menos cierto es que en cada caso, debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas en que ocurrieron las conductas infractoras, a efecto de que las sanciones que se impongan no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario, insignificantes o irrisorias frente a la gravedad de la conducta que se sanciona.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar, a su arbitrio, las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad; máxime si se toma en cuenta que la LGIPE no prevé de forma pormenorizada y casuística, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las condiciones genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea esta autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

Resulta aplicable la tesis XXVIII/2003 emitida por la Sala Superior, de rubro SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, son sanciones aplicables a los partidos políticos, las siguientes:

- I. Amonestación pública;
- II. Multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;
- III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;
- IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley, y
- V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Como se desprende del citado artículo, el legislador previó diversas hipótesis de sanción a imponer a los partidos políticos por infracciones a la normatividad electoral.

Asimismo, al momento de imponer una sanción pecuniaria, las autoridades deben respetar los límites que la ley aplicable establezca al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejándose al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable; por otra parte, se deberán expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender, tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el

respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquella.

En ese sentido, es válido afirmar que esta autoridad únicamente tiene como restricción, al momento de determinar la imposición de sanciones económicas, el observar que la pena a imponer no exceda el máximo establecido en la citada disposición, quedando a su arbitrio fijar el monto de la sanción, obviamente bajo un parámetro de objetividad respecto de su decisión.

Una vez precisado lo anterior, procede determinar la sanción que corresponde imponer al partido denunciado por la omisión de cuidar, vigilar y resguardar debidamente los datos que proporciona el Registro Federal de Electores del INE a los partidos políticos, para la conformación del Padrón Electoral y la Lista Nominal, en contravención al derecho de confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos que integran dichos instrumentos electorales, con lo que se vulneró lo establecido en los artículos 6, 16, párrafo segundo y 41, de la Constitución; 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP; y 148, párrafo 2; con relación al 443, párrafo 1, incisos a) y n), de la LGIPE.

Así, tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracciones I y II, consistentes en amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo, no son aptas para satisfacer los propósitos de sanción ejemplar y disuasorios, en atención a que la conducta implicó una violación directa a normas constitucionales y legales de gran trascendencia [artículos 6, 16, párrafo segundo y 41 constitucionales, y 25, párrafo 1, incisos a) y u) de la LGPP; 148, párrafo 2; con relación al 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la LGIPE] y al bien jurídico tutelado (inviolabilidad de la confidencialidad del padrón electoral y el listado nominal).

Esto es así, en atención a que la conducta, si bien fue considerada de carácter omisiva, cuya gravedad fue determinada como ordinaria, de comisión culposa, en la que no se actualizó la reincidencia en la conducta, ni tampoco vulneración sistemática a la normativa constitucional y legal, también lo es que **la propia**

**comisión de la falta, en su contexto fáctico, sí tuvo una trascendencia mayúscula, si se toma en cuenta que la infracción demostrada -falta al deber de cuidado en el uso, manejo y resguardo adecuado de la información contenida en el padrón electoral y Lista Nominal de Electores- recayó precisamente sobre una parte de las bases de datos más importantes de este país, toda vez que contiene información proporcionada directamente por los electores, con datos sensibles, la cual proporcionaron con el ánimo de coadyuvar en el fortalecimiento de nuestra democracia, a fin de hacer más transparentes y confiables los procesos electorales para la renovación de los poderes del Estado Mexicano.**

Con base en ello, se concluye que la irregularidad no se circunscribió al simple incumplimiento de una obligación legal cotidiana del partido político, consistente en resguardar la información que obra en su poder y que sólo puede utilizar para consulta y verificación, sino que también implicó una violación al artículo 6 de la Constitución, además de que se **transgredieron los principios de confidencialidad de la información referida a la vida privada, en contravención a la inviolabilidad de los datos personales de los gobernados.**

Con base en todo lo expuesto, esta autoridad arriba a la conclusión que la imposición de una multa, en términos de lo establecido en la fracción II, del inciso a) del artículo 456 de la LGIPE, aún en su grado más alto –diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México-, sería insuficiente para reprimir y castigar de manera debida y ejemplar al sujeto infractor por la actualización del ilícito administrativo acreditado; además, dicha medida no resultaría apta para generar un efecto disuasivo frente terceros a fin de evitar la comisión de conductas de similares características, tomando en consideración, como ya se analizó, la trascendencia y el objeto sobre el cual recayó la falta de cuidado en el uso, manejo y custodia de la información que se le proporcionó.

En este sentido, esta autoridad estima que la sanción establecida en la fracción III, del mencionado inciso a), del numeral 456 Ley General en cita, consistente en la reducción de ministraciones del financiamiento público que le corresponda al partido político denunciado, en el porcentaje que más adelante se precisará, sí cumpliría con los efectos represores y disuasivos que debe contener toda sanción

por parte de esta autoridad, además de que la misma es consistente con la calificación de la gravedad de la falta determinada por esta autoridad.<sup>116</sup>

Bajo la misma línea argumentativa, esta autoridad estima que las sanciones previstas en las fracciones IV y V del mencionado artículo 456 de la ley comicial en cita, no son aplicables al caso, en tanto que se relacionan con supuestos distintos al que nos ocupa, a saber: transmisión de propaganda política o electoral, en violación de las disposiciones del código electoral federal, así como en casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y legislación aplicable, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos.

En este orden de ideas, se reitera, esta autoridad considera que la sanción prevista en la **fracción III, consistente en la reducción de hasta el cincuenta por ciento de la ministración del financiamiento público que le corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes**, es la idónea para cumplir una función preventiva general a fin de que el sujeto infractor, en este caso, el PRI, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Esto es así, porque una conducta omisiva o de acción considerada como infracción administrativa puede tener efectos distintos, precisamente por las circunstancias o implicaciones que rodean a ésta. Por ello, atendiendo a la finalidad que guarda la potestad punitiva del Estado y a los límites que el propio artículo 22 de la Constitución impone, la autoridad administrativa está obligada a valorar las circunstancias que rodean a la conducta infractora a fin de establecer de manera proporcional a ésta la sanción que corresponda.

---

<sup>116</sup> Lo anterior es congruente con lo establecido por la Sala Superior al resolver entre otros, el expediente SUP-REP-136/2015, en donde confirmó lo resuelto por la Sala Especializada en el diverso SER-PSC-14/2015, en el sentido de calificar una conducta como grave ordinaria e imponer como sanción la reducción de ministraciones de financiamiento público a un partido político.

En el mismo sentido se cita lo establecido en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-120/2015, así como en los procedimientos especiales sancionadores SER-PSC-5/2014 y SER-PSC-6/2015; consultables en la página electrónica [http://www.te.gob.mx/Informacion\\_juridiccional/](http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/)

En este orden de ideas, una vez elegido el tipo de sanción a imponer, -reducción de ministraciones sobre el financiamiento público- y ubicado en el extremo mínimo de la medida, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos para ubicar la sanción entre el mínimo (1%) y el máximo (50%) contemplado en el inciso a), fracción III, del mencionado artículo 456 de la LGIPE.

Sobre este particular, es pertinente aclarar que la norma electoral, al contemplar un mínimo y un máximo de la sanción, provee al operador de la norma una serie de combinaciones amplias para lograr una individualización conforme a las circunstancias particulares del infractor, lo cual se erige como obligación de rango constitucional, porque exige de esta autoridad administrativa la individualización de la pena de forma fundada y motivada.<sup>117</sup>

Para el caso que se estudia, como se ha afirmado a lo largo de la presente Resolución, si bien la comisión de la falta fue por omisión, culposa y no hubo reincidencia, lo que, en principio, supondría el mantenerse en el extremo mínimo, también lo es que, como se señaló, la conducta infractora **implicó, de forma reiterada (al haberse presentado la infracción en dos momentos distintos), una violación directa a las previsiones contenidas en los artículos 6°, 16, párrafo segundo y 41 constitucionales**, que disponen la obligación irrestricta de garantizar que la información que se refiere a la vida privada y datos personales contenida en el padrón electoral se encuentre protegida; disposiciones que se replican en los diversos 126, párrafo 3, y 148, párrafo 2, de la LGIPE, que establecen que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y el código, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer salvo las excepciones que la propia ley impone; así como aquella que establece que los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del padrón electoral y a

---

<sup>117</sup> *Ratio esendi* de la tesis aislada XXI.2o.P.A.1 A (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, de rubro, MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 178, FRACCIÓN I, DE LA LEY ADUANERA. AL ESTAR ESTABLECIDA ENTRE UN MÍNIMO Y UN MÁXIMO ES CONSTITUCIONAL, PUES PROVEE A LA AUTORIDAD APLICADORA UNA SERIE DE COMBINACIONES CUYA INDIVIDUALIZACIÓN DEBE DETERMINAR CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL INFRCTOR FUNDADA Y MOTIVADAMENTE.

las listas nominales, exclusivamente para su revisión y no podrán usar dicha información para fines distintos.

Con base en lo anterior, esta autoridad considera que la sanción a imponer debe de establecerse entre el mínimo (1%) y una cuarta parte (12.5%) del porcentaje máximo (50%) de reducción permitido sobre el financiamiento público que le corresponda para actividades ordinarias en el presente ejercicio 2018, tomando en consideración las circunstancias que rodearon al hecho infractor, además de que, durante la secuela que siguió el presente procedimiento, el partido político no demostró haber realizado acciones mínimas encaminadas al correcto manejo y salvaguarda de la información que se le entregó, que pudieran crear ánimo en esta autoridad de disminuir el parámetro del porcentaje de sanción antes referido.

En ese sentido, tomando en consideración las particularidades del caso concreto, como es que la falta fue de omisión, culposa, y no hubo reincidencia, y el porcentaje del listado nominal que fue encontrado en el sitio de internet correspondió a municipios del Estado de Sinaloa, con un total de 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco), así como los criterios establecidos en la sentencia emitida por la Sala Superior, al resolver los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-482/2016, SUP-RAP-483/2016 Y SUP-RAP-484/2016, acumulados, esta autoridad considera que la imposición del máximo de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción III, del Código Comicial (50%) sería desproporcional y excesiva, pues iría más allá de lo razonable.

Asimismo, se considera que una sanción equivalente a la reducción del veinticinco por ciento (25%) de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda al partido infractor, para actividades ordinarias en el presente ejercicio 2018, sería igualmente excesivo, pues del contexto fáctico en el cual se dio la violación a la norma, no se advierte alguna circunstancia que, de forma conjunta o por sí misma, al valorarse pudieran dar como resultado la aplicación de dicho porcentaje, sin que ello implicase una desproporción con la falta cometida.

De igual forma, tomando en consideración que en la resolución **INE/CG50/2017**, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral *“respecto de la*



*individualización de la sanción en el procedimiento sancionador ordinario SCG/Q/CG/108/2013, iniciado de manera oficiosa, por la probable violación a la normativa electoral respecto del manejo, guarda y custodia del padrón electoral y la lista nominal de electores a cargo del partido político Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y otros, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída a los recursos de apelación identificados con las claves SUP-RAP-482/2016, SUP-RAP-483/2016 y SUP-RAP-484/2016, acumulados”, se determinó imponer al partido político Movimiento Ciudadano una sanción consistente en la reducción del 10% (diez por ciento) de la ministración anual del financiamiento público que le correspondía para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, ello como consecuencia del indebido cuidado que observó en el manejo, guarda y custodia de los datos contenidos en el padrón electoral, los cuales fueron proporcionados por los ciudadanos al Registro Federal de Electores, para la conformación de dicho instrumento, pues se consideró que todo ello, puso en riesgo la inviolabilidad de la confidencialidad de dicha información.<sup>118</sup>*

En dicho asunto, la información entregada al referido instituto político correspondió a la **totalidad del padrón electoral nacional**, por lo que, aun cuando no se tuvo certeza del total de ciudadanos afectados por el uso indebido de del padrón, sí se acreditó que **el partido político recibió el padrón nacional completo**. En el caso, como se evidenció, la información detectada en el sitio *Digital Ocean* correspondió únicamente a los listados nominales para revisión relativos a los procesos electorales federal 2015 y local 2016 en el Estado de Sinaloa, esto es, se trató de un universo de registros significativamente menor al constituir los listados de una entidad federativa.

De ahí que, la reducción del diez por ciento (10%) de las ministraciones del financiamiento ordinario impuesto al partido Movimiento Ciudadano en la resolución aludida, resulte excesivo, considerando que en el presente caso, se tiene certeza respecto al universo de registros expuestos en la base de datos

---

<sup>118</sup> Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el recurso de apelación SUP-RAP-98/2017 y acumulados.

localizada el sitio *Digital Ocean*, esto es, 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco).

En la especie, tomando en consideración que se trató de una **infracción por omisión**, por la cual se **vulneró el debido uso, manejo y resguardo de la información contenida en el padrón electoral y el listado nominal de electores**; que **no se acreditó dolo en su configuración**, que **no hubo reincidencia**, así como que el total de datos encontrados en el sitio *Digital Ocean*, correspondió a un universo de **2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco)**, todos correspondientes a una entidad federativa, se estima apropiado imponer como sanción al partido político infractor, la reducción de un **uno punto cinco por ciento (1.5%)** del financiamiento público ordinario anual para el presente ejercicio 2018.

Sin embargo, de la investigación realizada por esta autoridad se acreditó que el partido político infringió de forma **reiterada la inviolabilidad de la confidencialidad de la información contenida en las listas nominales de electores**, toda vez que **reprodujo, conservó y manipuló dos listados correspondientes a procesos electorales distintos**, de ahí que se considera que el porcentaje antes razonado debe imponerse por cada uno de los listados nominales de electores cuyo contenido se divulgó indebidamente como consecuencia de la falta al deber de cuidado al que el partido político se encontraba obligado constitucional y legalmente.

Asimismo, en concepto de este Consejo General, el hecho de que la información localizada en el *sitio Digital Ocean* consistiera en un fragmento de la Lista Nominal de Electores para Revisión del Proceso Electoral Federal 2014-2015, actualizada con la correspondiente al Proceso Electoral Local 2015-2016, **necesariamente implicó que dichos listados fueron indebidamente reproducidos, conservados, manipulados y alojados en un sitio de internet, sin mecanismos que garantizaran su salvaguarda**, lo cual **constituye un agravante a la infracción cometida por el partido político**, toda vez que, en el presente caso, la falta al deber de cuidado del partido político no solo se actualiza por el indebido alojamiento y difusión de la información en un sitio digital público, sino porque constituye un documento diverso a los que fueron originalmente

entregados por esta autoridad a sus representantes ante los órganos electorales locales.

En consecuencia, se estima conveniente imponer como sanción al partido político infractor, de forma adicional a los porcentajes antes precisados, la reducción de un **uno por ciento (1%)** más del financiamiento público ordinario anual para el presente ejercicio 2018.

Por tanto, a juicio de esta autoridad, se considera apropiado imponer como sanción al partido político infractor, la reducción del **cuatro por ciento (4%)** del financiamiento público ordinario anual para el presente ejercicio 2018, equivalente a **\$43,795,866.96** (cuarenta y tres millones setecientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y seis pesos 96/100 M.N.). De conformidad con lo establecido en el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y DE GASTOS DE CAMPAÑA DEL CONJUNTO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA EL EJERCICIO 2018, número INE/CG339/2017,<sup>119</sup> en el cual se establecieron las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales para el ejercicio 2018, así como que al PRI le corresponde como financiamiento anual para el sostenimiento de sus actividades ordinarias la cantidad de \$ 1,094,896,674 (mil noventa y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.).

Dicho porcentaje de reducción de ministraciones se estima idóneo, porque no resulta desproporcionado a las posibilidades económicas del infractor –tal y como se verá en el apartado correspondiente, en relación a la gravedad del ilícito.

#### **e) Condiciones socioeconómicas del infractor**

Al respecto, es menester precisar que en concordancia con las razones esenciales de la Jurisprudencia 29/2009, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial

---

<sup>119</sup> Consultado en el sitio web [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5495944&fecha=01/09/2017](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5495944&fecha=01/09/2017).

de la Federación, de rubro *PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTÁ FACULTADA PARA RECABAR PRUEBAS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL SANCIONADO*, así como en las consideraciones sostenidas por dicho órgano jurisdiccional al resolver los recursos de apelación identificados con la claves SUP-RAP-272/2009, SUP-RAP-279/2009, SUP-RAP-285/2009 y SUP-RAP-286/2009, se realizaron las diligencias necesarias, idóneas y oportunas, a fin de allegarse de la información correspondiente a la capacidad económica de los sujetos denunciados, pues dicho elemento debe tomarse en cuenta al momento de imponer las sanciones correspondientes.

Sobre este punto, debe considerarse que el PRI cuenta con capacidad económica suficiente con base en lo siguiente:

Como se dijo en apartados anteriores, mediante Acuerdo INE/CG339/2017, emitido por el Consejo General del INE, al citado instituto político se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018, un total de \$ 1,094,896,674 (mil noventa y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), cantidad que mensualmente corresponde a un importe de \$91,241,389.50 (noventa y un millones doscientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.), cantidad que resulta de dividir el monto anual del financiamiento público para actividades ordinarias entre doce ministraciones mensuales.

Asimismo, conforme a lo informado mediante Acuerdo INE/DEPPP/DE/DPPF/0566/2018, de veintiuno de febrero del presente año, las reducciones correspondientes a las sanciones impuestas al PRI corresponden a un total de 2,305,435.00 (dos millones trescientos cinco mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.).

En ese sentido, tomando en consideración que el monto de la sanción impuesta en el presente procedimiento se fijó en la suma de **\$43,795,866.96 (cuarenta y tres millones setecientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y seis pesos 96/100 M.N.)**, es decir, el cuatro por ciento (4%) del referido financiamiento

anual y, que en el mes de febrero de este año, al PRI le correspondió la cantidad de **\$91,241,389.00** (noventa y un millones doscientos cuarenta y un mil trescientos ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.), menos el importe correspondiente a multas y sanciones, un total de **\$88,935,954.00** (ochenta y ocho millones novecientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), esta autoridad considera conveniente que la sanción impuesta sea pagada durante el lapso de **seis (6) meses**, a razón de **\$7,299,311.16 (siete millones doscientos noventa y nueve mil trescientos once pesos 16/100 m. n.)**, lo que representa el **8.20% (ocho punto veinte por ciento)** de las ministraciones mensuales por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias.

De la misma forma, la sanción se encuentra dentro de los límites constitucionales y legales permitidos, toda vez que no resulta excesiva porque, en concepto de este Consejo General, no es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito y no se propasa o va más adelante de lo lícito y lo razonable.

**f) Impacto en las actividades del infractor.**

Lo razonado en el apartado anterior, en concepto de esta autoridad, de ninguna manera genera un impacto sustancial o pernicioso en las actividades ordinarias del infractor que le impidan, de manera clara y evidente, continuar desarrollando sus actividades y cumpliendo con los fines que constitucional y legalmente tiene asignados.

Lo anterior se considera así, pues el instituto político denunciado además del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el año dos mil dieciocho, también está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, a través de financiamiento por militancia, de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, con los límites y restricciones que prevé la Constitución y las Leyes Electorales.

## 2. Funcionarios partidistas

### a) Calificación de la gravedad de la infracción

Atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados y a las particularidades del caso señaladas, esta autoridad considera que la conducta infractora atribuida en el presente caso a **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, Teresa de Jesús Nieto Ríos y César Manuel Ochoa Salazar**, debe calificarse como de **gravedad ordinaria**, en razón de que:

- Se realizaron conductas en contravención al derecho a la **confidencialidad de los datos personales y protección de información relativa a la vida privada**, previsto en normas de carácter constitucional y legal en perjuicio de 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco).
- **Faltaron de manera manifiesta a su deber de cuidado en el uso, manejo, custodia y resguardo de la información que los ciudadanos entregaron a esta autoridad electoral**, para la conformación del padrón electoral y listas nominales.
- **El bien jurídico tutelado que se vulneró con dicha conducta omisiva, fue la preservación de la confidencialidad de la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales de los gobernados.**
- La falta de cuidado propició que la información del padrón electoral se publicara en Internet, el cual es un medio de comunicación social de alcance global.
- Se trata de una **infracción por omisión**.
- Es una infracción de carácter **culposa**, al no estar acreditado el dolo en su comisión.
- **No se acreditó que existiera reincidencia** en la configuración de la falta.
- **No hubo vulneración sistemática a la normativa constitucional y legal.**

### b) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción

De las constancias que obran en el expediente, no se advierte dato o elemento alguno que hagan suponer a esta autoridad, que las conductas infractoras que aquí se estudian tuviesen algún beneficio cuantificable en favor de los ciudadanos infractores.

**c) Reincidencia**

En principio, de conformidad con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 41/2010, de rubro REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN, se considera reincidente al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en la Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Con base en lo anterior, en el presente asunto no pueden considerarse reincidentes a **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, César Manuel Ochoa Salazar y Teresa de Jesús Nieto Ríos**, pues en los archivos de este Instituto no obra algún expediente en el cual se les haya sancionado y hubiesen quedado firmes las resoluciones correspondientes, por faltas iguales a la que se sanciona por esta vía, conforme a las disposiciones contenidas en la LGIPE.

**d) Sanción a imponer.**

El artículo 456, párrafo 1, inciso e), de la LGIPE, establece un catálogo de sanciones aplicables a los ciudadanos, dirigentes y afiliados de los partidos políticos, o de cualquier persona física o moral, a saber:

- I. Con amonestación pública;
- II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo;
- III. Respecto de las personas morales por las conductas señaladas en la fracción anterior: con multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en esta Ley, o tratándose de la compra de

tiempo en radio y televisión para la difusión de propaganda política o electoral, con multa de hasta el doble del precio comercial de dicho tiempo, y

- IV.** Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o cualquier persona física o moral, con amonestación pública y, en caso de reincidencia, con multa de hasta dos mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en el caso de que promuevan una denuncia frívola. Para la individualización de las sanciones a que se refiere esta fracción, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta la gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir la práctica en atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base en él; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Como se desprende del artículo transcrito, el legislador previó diversas hipótesis de sanción a imponer a los ciudadanos, dirigentes y afiliados a los partidos políticos o a cualquier persona física o moral por infracciones a la normatividad comicial federal, de lo que se deduce que esta autoridad cuenta con la facultad de elegir, entre el catálogo referido, la que a su juicio sea suficiente para disuadir la posible vulneración futura a lo establecido en la legislación.

Esto es, en el precepto en comento se establecen indicadores que permiten a la autoridad administrativa determinar discrecionalmente qué sanción es la que debe imponerse en el caso de que se trate, de acuerdo a la calificación que le haya asignado a la transgresión normativa cometida por el sujeto infractor, con el fin de suprimir prácticas que vulneren en cualquier forma las disposiciones del ordenamiento legal en cita.

Ahora bien, cabe señalar que el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral ha sostenido que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente para que en el futuro, tanto los individuos que conforman la sociedad, como el sujeto infractor de un ilícito, no cometan violaciones nuevas o similares a la normativa, toda vez que se expondría el bienestar social como razón última del Estado de Derecho.

Esto es, la intervención estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que de no hacerlo, podrían



fomentarse tales conductas ilícitas y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Así, es de explorado derecho que las autoridades, al momento de imponer una sanción pecuniaria, deben respetar los límites que la ley aplicable establezca al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejándose al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable; por otra parte, se deberán expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender, tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la levedad o gravedad de aquella.

En ese sentido, es válido afirmar que esta autoridad sustanciadora únicamente tiene como restricción, al momento de determinar la imposición de este tipo de sanciones, el observar que la pena a imponer no exceda el máximo establecido en la citada disposición, quedando a su arbitrio fijar el monto de la sanción.

Dicho lo anterior se procede a la valoración en lo individual.

- **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, representante PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa**

Se procede determinar la sanción que corresponde imponer a **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal** por el incumplimiento de su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confiabilidad de la información correspondiente a la Lista Nominal, generada por esta autoridad electoral, lo que derivó en un presunto uso indebido de dicha información, en contravención al derecho de los ciudadanos a la confidencialidad de sus datos personales, al haber faltado a su deber de cuidado en su uso y manejo, lo que vulnera lo establecido en los artículos 6, 16, párrafo segundo y 41 Constitucionales, así como los diversos 126, numerales 3 y 4; 148, numeral 2, de la LGIPE.

Así pues, tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que la sanción contenida en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I, de la LGIPE,

consistente en amonestación pública, no es apta para satisfacer los propósitos disuasorios referidos en líneas precedentes, en atención a que la conducta implicó una violación directa a los artículos citados en el párrafo precedente, así como al bien jurídico tutelado (inviolabilidad de la confidencialidad del listado nominal).

Asimismo, la sanción prevista en la fracción III, no resulta aplicable al caso, en tanto que se relaciona con supuestos distintos al que nos ocupa (compra de tiempo en radio y televisión con fines políticos o electorales atribuibles a una persona moral).

En este orden de ideas, se considera que la sanción prevista en la primera parte de la fracción II, del artículo en cita, **consistente en una multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México**, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en su conjunto y fomentar que el sujeto infractor, en este caso Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

En este contexto, la conducta que se imputa a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal no solo se circunscribió al simple incumplimiento de una obligación legal cotidiana de su parte, consistente en resguardar la información que obraba en su poder y que únicamente podía utilizarla para consulta y verificación, sino que también implicó una violación de carácter constitucional, que propició una transgresión a los principios de confidencialidad de la información referida a la vida privada, así como a la inviolabilidad de los datos personales de los gobernados, al no haber tenido el debido cuidado de resguardar la información confidencial que directamente le fue proporcionada por este Instituto, en su carácter de Representante Propietario ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, al momento en que le fue entregado el listado nominal correspondiente al Proceso Electoral Local 2015-2016 en dicha entidad federativa, lo que derivó que la misma se encontrara en el sitio de internet denominado *Digital Ocean*.

Ahora bien, ya que se determinó el supuesto normativo de la sanción a imponer, corresponde a esta autoridad establecer el monto de la multa.

Para ello, una vez que quedó demostrada la infracción cometida por el denunciado a que se refiere este apartado, conlleva a esta autoridad a aplicar, en automático, por lo menos, la imposición del mínimo de la sanción, es decir, el equivalente a **1 día** de salario mínimo, en términos de lo previsto en el inciso e), fracción II, del artículo 456 de la referida ley.

Estando situado en ese extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos.

En este sentido, como se ha afirmado a lo largo de la presente Resolución, la falta atribuida al denunciado trajo como consecuencia la vulneración directa de las previsiones contenidas en los artículos 6, 16, párrafo segundo y 41 constitucionales, que disponen la obligación a cargo del Estado de garantizar que la información que se refiere a la vida privada y datos personales contenida en el padrón electoral se encuentre protegida; disposiciones que se encuentran reproducidas en los diversos 126, párrafo 3, y 148, párrafo 2, de la LGIPE, **que establecen que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y la Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer salvo las excepciones que la propia ley impone;** así como aquella que establece que los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del padrón electoral y a las listas nominales, **exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines distintos.**

De las constancias que obran en autos, quedó demostrado que Jesús Gonzalo Estrada Villarreal recibió en un dispositivo de almacenamiento *USB*, la Lista Nominal para Revisión con corte al quince de enero de dos mil dieciséis, por lo que su obligación de cuidado, resguardo, manejo y uso de esa información inició desde el momento mismo en que este Instituto se la proporcionó.

Así, como ya se razonó el PRI depositó en **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal** la facultad de representación para que, en nombre de ese instituto político, ejerciera las facultades y derechos que la ley le otorga al partido, pero también, al haberle depositado esta representación, le transfirió las obligaciones del partido político en relación con el debido uso, manejo y resguardo de la información que ordinariamente manejaría.

Con base en ello, a partir del momento en que recibió el listado nominal tenía la obligación de resguardar y cuidar la información que contiene datos personales de los ciudadanos, en virtud de que él ostentaba la representación directa entre el partido político y este Instituto en materia de datos personales, por lo que es dable colegir que si el partido entregó esta responsabilidad en su persona, era porque existía una relación de confianza para que actuara en su representación, cuidando todos sus intereses y cumpliendo cada una de sus obligaciones, entre ellas, la de manejar, usar y resguardar los datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral.

En consecuencia, las conductas desplegadas por el representante del PRI ante el Organismo Público Local en Sinaloa no fueron las idóneas y suficientes para salvaguardar la integridad de la información que esta autoridad le entregó. Por el contrario, la actitud demostrada por el denunciado, de únicamente recibir por parte de este Instituto la información contenida en el listado nominal y posteriormente entregarla a la Directora de Informática, denotó un desentendimiento manifiesto respecto de la importancia de la información que tuvo en su poder, lo cual se estima grave y por ello debe ser tomado en cuenta para la imposición de la sanción.

Con base en lo anterior, esta autoridad considera que dada la trascendencia de la falta analizada, que tuvo como consecuencia la puesta en peligro del derecho esencial a la privacidad y protección de la intimidad de los ciudadanos que integran el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, entendida esta como “una facultad subjetiva reconocida a favor de la persona física, de no permitir la

intromisión de extraños, en lo que respecta al ámbito de su reserva individual”<sup>120</sup>, es que se estima apropiado imponer a **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal una multa** consistente en **150 (ciento cincuenta) días** de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en términos de lo establecido en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción III, de la LGIPE.

Ello, tomando en consideración que en la resolución **INE/CG50/2017**, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral *“respecto de la individualización de la sanción en el procedimiento sancionador ordinario **SCG/Q/CG/108/2013**, iniciado de manera oficiosa, por la probable violación a la normativa electoral respecto del manejo, guarda y custodia del padrón electoral y la lista nominal de electores a cargo del partido político Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y otros, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída a los recursos de apelación identificados con las claves **SUP-RAP-482/2016**, **SUP-RAP-483/2016** y **SUP-RAP-484/2016**, acumulados”*, se determinó imponer a las personas físicas involucradas en el uso indebido del padrón de electores nacional, una multa consistente en 308 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.<sup>121</sup>

En dicho asunto, la información entregada al partido político Movimiento Ciudadano, en aquel entonces Convergencia, y sobre la cual los funcionarios partidistas faltaron a su deber de cuidado, correspondió a la **totalidad del padrón electoral nacional**. En el caso, como se evidenció, la información detectada en el sitio *Digital Ocean* correspondió únicamente a los listados nominales para revisión relativos a los procesos electorales federal 2015 y local 2016 en el Estado de Sinaloa, esto es, se trató de un universo de registros significativamente menor al constituir los listados de una entidad federativa.

De ahí que, la multa consistente en 308 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, resulta excesiva, considerando que en el presente caso,

---

<sup>120</sup> CELIS QUINTAL, Alejandro, “La protección de la intimidad como derecho fundamental de los mexicanos”, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2253/9.pdf>, p. 74.

<sup>121</sup> Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el recurso de apelación SUP-RAP-98/2017 y acumulados.

se tiene certeza respecto al universo de registros identificados, esto es, 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco).

Ahora bien, cabe precisar que mediante la reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Federal —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica —LGIPE en el presente caso—, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en dos mil dieciséis, conforme a la publicación realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, es de \$73.04 (Setenta y tres pesos 04/100 M.N.).

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis II/2018, cuyo rubro y texto es el siguiente:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la

sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En consecuencia, la multa a imponer a Jesús Gonzalo Estrada Villarreal es la que resulta de multiplicar 150 (ciento cincuenta) por el valor establecido de UMA para dos mil dieciséis, toda vez que los registros denunciados fueron localizados en el sitio de internet *Digital Ocean*, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta cada uno de los elementos que se han analizado en la presente Resolución, se considera procedente **imponer como sanción una multa de 150 (ciento cincuenta) UMAS, equivalente a \$10,956.00 (diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).**

A este respecto, conviene tener presente que la conclusión a que se arribó en el párrafo que antecede deriva de que, a consideración de esta autoridad, imponer una sanción menor no produciría, de manera efectiva, un efecto inhibitorio de la conducta analizada; lo anterior, si se toma en cuenta, como ya se dijo, que la infracción cometida tuvo como consecuencia la transgresión a derechos básicos contenidos en la propia Constitución Política Federal que deben ser observados, tanto por los partidos políticos, sus dirigentes, militantes y afiliados, como por cualquier persona. De ahí la importancia de que esta autoridad concluya en acciones efectivas para contrarrestar los efectos perniciosos que se ocasionaron a partir de los hechos analizados en la presente Resolución.

- **CESAR MANUEL OCHOA SALAZAR, otrora Secretario de Acción Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa.**

Se procede determinar la sanción que corresponde imponer a **Cesar Manuel Ochoa Salazar** por el incumplimiento de su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confiabilidad de la información correspondiente a la Lista Nominal, generada por esta autoridad electoral, lo que derivó en un presunto uso indebido de dicha información, en contravención al derecho de los ciudadanos a la confidencialidad de sus datos personales, al haber faltado a su deber de cuidado en su uso y manejo, lo que vulnera lo establecido en los artículos 6, 16,

párrafo segundo y 41 Constitucionales, así como los diversos 126, numerales 3 y 4; 148, numeral 2, de la LGIPE.

Así pues, tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que la sanción contenida en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I, de la LGIPE, consistente en amonestación pública, no es apta para satisfacer los propósitos disuasorios referidos en líneas precedentes, en atención a que la conducta implicó una violación directa a los artículos citados en el párrafo precedente, así como al bien jurídico tutelado (inviolabilidad de la confidencialidad del listado nominal).

Asimismo, la sanción prevista en la fracción III, no resulta aplicable al caso, en tanto que se relaciona con supuestos distintos al que nos ocupa (compra de tiempo en radio y televisión con fines políticos o electorales atribuibles a una persona moral).

En este orden de ideas, se considera que la sanción prevista en la primera parte de la fracción II, del artículo en cita, **consistente en una multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México**, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en su conjunto y fomentar que el sujeto infractor, en este caso Cesar Manuel Ochoa Salazar, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

En este contexto, la conducta que se imputa a Cesar Manuel Ochoa Salazar no solo se circunscribió al simple incumplimiento de una obligación legal cotidiana de su parte, consistente en resguardar la información que obraba en su poder y que únicamente podía utilizarla para revisión y verificación, sino que también implicó una violación de carácter constitucional, que propició una transgresión a los principios de confidencialidad de la información referida a la vida privada, así como a la inviolabilidad de los datos personales de los gobernados, al no haber tenido el debido cuidado de resguardar la información confidencial que directamente le fue



proporcionada por este Instituto, en su carácter de Secretario de Acción Electoral en el Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, al momento en que le fue entregado el listado nominal correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015, lo que derivó que la misma se encontrara en el sitio de internet denominado *Digital Ocean*.

Ahora bien, ya que se determinó el supuesto normativo de la sanción a imponer, corresponde a esta autoridad establecer el monto de la multa.

Para ello, una vez que quedó demostrada la infracción cometida por el denunciado a que se refiere este apartado, conlleva a esta autoridad a aplicar, en automático, por lo menos, la imposición del mínimo de la sanción, es decir, el equivalente a **1 día** de salario mínimo, en términos de lo previsto en el inciso e), fracción II, del artículo 456 de la referida ley.

Estando situado en ese extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos.

En este sentido, como se ha afirmado a lo largo de la presente Resolución, la falta atribuida al denunciado trajo como consecuencia la vulneración directa de las previsiones contenidas en los artículos 6; 16, párrafo segundo y 41 constitucionales, que disponen la obligación a cargo del Estado de garantizar que la información que se refiere a la vida privada y datos personales contenida en el padrón electoral se encuentre protegida; disposiciones que se encuentran reproducidas en los diversos 126, párrafo 3, y 148, párrafo 2, de la LGIPE, **que establecen que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y la Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer salvo las excepciones que la propia ley impone**; así como aquella que establece que los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del padrón electoral y a las listas nominales, **exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines distintos**.

De las constancias que obran en autos, quedó demostrado que Cesar Manuel Ochoa Salazar recibió de Oglá Rita Bojórquez Gámez en un dispositivo de almacenamiento *USB*, la Lista Nominal para Revisión correspondiente al Proceso Electoral Federal 2014-2015, por lo que su obligación de cuidado, resguardo, manejo y uso de esa información se actualizó, al momento de recibirla y en función del cargo que desempeñaba, toda vez que al desempeñar el cargo de cargo de Secretario de Acción Electoral en el Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, tenía el deber de vigilar que los comisionados y comisionadas designados por los órganos competentes, ante los órganos electorales observaran estrictamente las leyes en la materia y cumplieran las instrucciones que se les dictaran, ello de conformidad con la normativa partidista aplicable.

En consecuencia, las conductas desplegadas por el entonces Secretario de Acción Electoral del PRI en Sinaloa, no fueron las idóneas y suficientes para salvaguardar la integridad de la información que esta autoridad entregó a la entonces representante de dicho partido político ante la Comisión Local de Vigilancia. Por el contrario, la actitud demostrada por el denunciado, de únicamente recibir la información contenida en el listado nominal y posteriormente entregarla a la Directora de Informática, denotó un desentendimiento manifiesto respecto de la importancia de la información que tuvo en su poder, y de las facultades que estatutariamente desempeñaba, lo cual se estima grave y por ello debe ser tomado en cuenta para la imposición de la sanción.

Con base en lo anterior, esta autoridad considera que dada la trascendencia de la falta analizada, que tuvo como consecuencia la puesta en peligro del derecho esencial a la privacidad y protección de la intimidad de los ciudadanos que integran el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, entendida esta como “una facultad subjetiva reconocida a favor de la persona física, de no permitir la intromisión de extraños, en lo que respecta al ámbito de su reserva individual”<sup>122</sup>, es que se estima apropiado imponer a **Cesar Manuel Ochoa Salazar una multa consistente en 150 (ciento cincuenta) días de salario mínimo general vigente**

---

<sup>122</sup> CELIS QUINTAL, Alejandro, “La protección de la intimidad como derecho fundamental de los mexicanos”, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2253/9.pdf>, p. 74.

para el Distrito Federal, en términos de lo establecido en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción III, de la LGIPE.

Ello, tomando en consideración que en la resolución **INE/CG50/2017**, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral *“respecto de la individualización de la sanción en el procedimiento sancionador ordinario **SCG/Q/CG/108/2013**, iniciado de manera oficiosa, por la probable violación a la normativa electoral respecto del manejo, guarda y custodia del padrón electoral y la lista nominal de electores a cargo del partido político Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y otros, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída a los recursos de apelación identificados con las claves **SUP-RAP-482/2016**, **SUP-RAP-483/2016** y **SUP-RAP-484/2016**, acumulados”*, se determinó imponer a las personas físicas involucradas en el uso indebido del padrón de electores nacional, una multa consistente en 308 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.<sup>123</sup>

En dicho asunto, la información entregada al partido político Movimiento Ciudadano, en aquel entonces Convergencia, y sobre la cual los funcionarios partidistas faltaron a su deber de cuidado, correspondió a la **totalidad del padrón electoral nacional**. En el caso, como se evidenció, la información detectada en el sitio *Digital Ocean* correspondió únicamente a los listados nominales para revisión relativos a los procesos electorales federal 2015 y local 2016 en el Estado de Sinaloa, esto es, se trató de un universo de registros significativamente menor al constituir los listados de una entidad federativa.

De ahí que, la multa consistente en 308 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, resulta excesiva, considerando que en el presente caso, se tiene certeza respecto al universo de registros identificados en la base de datos en la que fueron expuestos, esto es, 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco).

---

<sup>123</sup> Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el recurso de apelación SUP-RAP-98/2017 y acumulados.

Ahora bien, cabe precisar que mediante la reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Federal —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica —LGIPE en el presente caso—, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en dos mil dieciséis, conforme a la publicación realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, es de \$73.04 (Setenta y tres pesos 04/100 M.N.).

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis II/2018, cuyo rubro y texto es el siguiente:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En consecuencia, la multa a imponer a Cesar Manuel Ochoa Salazar es la que resulta de multiplicar 150 (ciento cincuenta) por el valor establecido de UMA para dos mil dieciséis, toda vez que los registros denunciados fueron localizados en el sitio de internet *Digital Ocean*, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta cada uno de los elementos que se han analizado en la presente Resolución, se considera procedente **imponer como sanción una multa de 150 (ciento cincuenta) UMAS, equivalente a \$10,956.00 (diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).**

A este respecto, conviene tener presente que la conclusión a que se arribó en el párrafo que antecede deriva de que, a consideración de esta autoridad, imponer una sanción menor no produciría, de manera efectiva, un efecto inhibitorio de la conducta analizada; lo anterior, si se toma en cuenta, como ya se dijo, que la infracción cometida tuvo como consecuencia la transgresión a derechos básicos contenidos en la propia Constitución Política Federal que deben ser observados, tanto por los partidos políticos, sus dirigentes, militantes y afiliados, como por cualquier persona. De ahí la importancia de que esta autoridad concluya en acciones efectivas para contrarrestar los efectos perniciosos que se ocasionaron a partir de los hechos analizados en la presente Resolución.

- **TERESA DE JESÚS NIETO RÍOS, Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa**

Se procede determinar la sanción que corresponde imponer a **Teresa de Jesús Nieto Ríos** por el incumplimiento de su obligación de salvaguardar y preservar la inviolabilidad de la confiabilidad de la información correspondiente a la Lista Nominal, generada por esta autoridad electoral, lo que derivó en un presunto uso indebido de dicha información, en contravención al derecho de los ciudadanos a la confidencialidad de sus datos personales, al haber faltado a su deber de cuidado en su uso y manejo, lo que vulnera lo establecido en los artículos 6, 16, párrafo segundo y 41 Constitucionales, así como los diversos 126, numerales 3 y 4; 148, numeral 2, de la LGIPE.

Así pues, tomando en consideración las particularidades del caso, resulta que la sanción contenida en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción I, de la LGIPE, consistente en amonestación pública, no es apta para satisfacer los propósitos

disuasorios referidos en líneas precedentes, en atención a que la conducta implicó una violación directa a los artículos citados en el párrafo precedente, así como al bien jurídico tutelado (inviolabilidad de la confidencialidad del listado nominal).

Asimismo, la sanción prevista en la fracción III, no resulta aplicable al caso, en tanto que se relaciona con supuestos distintos al que nos ocupa (compra de tiempo en radio y televisión con fines políticos o electorales atribuibles a una persona moral).

En este orden de ideas, se considera que la sanción prevista en la primera parte de la fracción II, del artículo en cita, **consistente en una multa de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México**, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en su conjunto y fomentar que el sujeto infractor, en este caso Teresa de Jesús Nieto Ríos, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, la sanción que debe imponer esta autoridad debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

En este contexto, la conducta que se imputa a **Teresa de Jesús Nieto Ríos** no solo se circunscribió al simple incumplimiento de una obligación legal cotidiana de su parte, consistente en resguardar y la información que obraba en su poder y que únicamente podía utilizarla para revisión y verificación, sino que también implicó una violación de carácter constitucional, que propició una transgresión a los principios de confidencialidad de la información referida a la vida privada, así como a la inviolabilidad de los datos personales de los gobernados, al no haber tenido el debido cuidado de resguardar la información confidencial que directamente le fue proporcionada por este Instituto, en su carácter de Directora de Informática en el Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, al momento en que le fueron entregados los listados nominales correspondientes a los procesos electorales federal 2014-2015 y local 2015-2016, lo que derivó que la misma se encontrara en el sitio de internet denominado *Digital Ocean*.

Ahora bien, ya que se determinó el supuesto normativo de la sanción a imponer, corresponde a esta autoridad establecer el monto de la multa.

Para ello, una vez que quedó demostrada la infracción cometida por la denunciada a que se refiere este apartado, conlleva a esta autoridad a aplicar, en automático, por lo menos, la imposición del mínimo de la sanción, es decir, el equivalente a **1 día** de salario mínimo, en términos de lo previsto en el inciso e), fracción II, del artículo 456 de la referida ley.

Estando situado en ese extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos.

En este sentido, como se ha afirmado a lo largo de la presente Resolución, la falta atribuida a la denunciada trajo como consecuencia la vulneración directa de las previsiones contenidas en los artículos 6 y 41 constitucionales, que disponen la obligación a cargo del Estado de garantizar que la información que se refiere a la vida privada y datos personales contenida en el padrón electoral se encuentre protegida; disposiciones que se encuentran reproducidas en los diversos 126, párrafo 3, y 148, párrafo 2, de la LGIPE, **que establecen que los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y la Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer salvo las excepciones que la propia ley impone**; así como aquella que establece que los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del padrón electoral y a las listas nominales, **exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines distintos.**

De las constancias que obran en autos, quedó demostrado que **Teresa de Jesús Nieto Ríos** recibió de Jesús Gonzalo Estrada Villarreal, el dispositivo de almacenamiento *USB*, con la Listas Nominales para Revisión correspondiente al Proceso Electoral Local 2015-2016, por lo que su obligación de cuidado, resguardo, manejo y uso de esa información se actualizó, al momento de recibirla y en función del cargo que desempeñaba, toda vez que al desempeñar el cargo de cargo de Directora de Informática en el Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, tenía la obligación de resguardar y cuidar la información que contiene

datos personales de los ciudadanos, en virtud de que ella ostentaba el cargo en el cual el partido depositó la responsabilidad de realizar la revisión correspondiente, por lo que puede interpretarse que existía una relación de confianza para que actuara en su representación cuidando todos sus intereses y cumpliendo cada una de sus obligaciones, entre ellas la de manejar, usar y resguardar los datos personales de los ciudadanos contenidos en las listas nominales.

En consecuencia, las conductas desplegadas por la Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, no fueron las idóneas y suficientes para salvaguardar la integridad de la información que esta autoridad entregó a las respectivas representaciones de dicho partido político. Por el contrario, la actitud demostrada por la denunciada, de únicamente recibir la información contenida en los listados nominales sin implementar un protocolo necesario y suficiente para su debido cuidado, denotó un desentendimiento manifiesto respecto de la importancia de la información que tuvo en su poder, y de las facultades que estatutariamente desempeñaba, lo cual se estima grave y por ello debe ser tomado en cuenta para la imposición de la sanción.

Con base en lo anterior, esta autoridad considera que dada la trascendencia de la falta analizada, que tuvo como consecuencia la puesta en peligro del derecho esencial a la privacidad y protección de la intimidad de los ciudadanos que integran el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, entendida esta como “una facultad subjetiva reconocida a favor de la persona física, de no permitir la intromisión de extraños, en lo que respecta al ámbito de su reserva individual”<sup>124</sup>, es que se estima apropiado imponer a que **Teresa de Jesús Nieto Ríos una multa** consistente en **150 (ciento cincuenta)** días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en términos de lo establecido en el artículo 456, párrafo 1, inciso e), fracción III, de la LGIPE.

Ello, tomando en consideración que en la resolución **INE/CG50/2017**, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral *“respecto de la individualización de la sanción en el procedimiento sancionador ordinario **SCG/Q/CG/108/2013**, iniciado de manera oficiosa, por la probable violación a la normativa electoral respecto del manejo, guarda y custodia del padrón electoral y la lista nominal de electores a*

---

<sup>124</sup> CELIS QUINTAL, Alejandro, “La protección de la intimidad como derecho fundamental de los mexicanos”, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2253/9.pdf>, p. 74.



*cargo del partido político Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, y otros, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída a los recursos de apelación identificados con las claves **SUP-RAP-482/2016**, **SUP-RAP-483/2016** y **SUP-RAP-484/2016**, acumulados*”, se determinó imponer a las personas físicas involucradas en el uso indebido del padrón de electores nacional, una multa consistente en 308 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.<sup>125</sup>

En dicho asunto, la información entregada al partido político Movimiento Ciudadano, en aquel entonces Convergencia, y sobre la cual los funcionarios partidistas faltaron a su deber de cuidado, correspondió a la **totalidad del padrón electoral nacional**. En el caso, como se evidenció, la información detectada en el sitio *Digital Ocean* correspondió únicamente a los listados nominales para revisión relativos a los procesos electorales federal 2015 y local 2016 en el Estado de Sinaloa, esto es, se trató de un universo de registros significativamente menor al constituir los listados de una entidad federativa.

De ahí que, la multa consistente en 308 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, resulta excesiva, considerando que en el presente caso, se tiene certeza respecto al universo de registros identificados en la base de datos de *Digital Ocean*, esto es, 2,072,585 ciudadanos (dos millones setenta y dos mil quinientos ochenta y cinco).

Ahora bien, cabe precisar que mediante la reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Federal —efectuada por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

A fin de hacer efectiva tal disposición, los artículos transitorios segundo y tercero del referido decreto, señalan que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en cualquier disposición jurídica —LGIPE

---

<sup>125</sup> Dicha determinación fue confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el recurso de apelación SUP-RAP-98/2017 y acumulados.

en el presente caso—, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en dos mil dieciséis, conforme a la publicación realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, es de \$73.04 (Setenta y tres pesos 04/100 M.N.).

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis II/2018, cuyo rubro y texto es el siguiente:

MULTAS. DEBEN FIJARSE CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN.—De la interpretación sistemática de los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transitorios segundo y tercero del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 44, párrafo primero, inciso aa), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tomando en consideración el principio de legalidad que rige en los procedimientos sancionadores, se advierte que el Instituto Nacional Electoral, al imponer una multa, debe tomar en cuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la comisión de la infracción, pues de esa manera se otorga seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, ya que se parte de un valor predeterminado en la época de la comisión del ilícito.

En consecuencia, la multa a imponer a **Teresa de Jesús Nieto Ríos** es la que resulta de multiplicar 150 (ciento cincuenta) por el valor establecido de UMA para dos mil dieciséis, toda vez que los registros denunciados fueron localizados en el sitio de internet *Digital Ocean*, el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.

De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta cada uno de los elementos que se han analizado en la presente Resolución, se considera procedente **imponer como sanción una multa de 150 (ciento cincuenta) UMAS, equivalente a \$10,956.00 (diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.).**

A este respecto, conviene tener presente que la conclusión a que se arribó en el párrafo que antecede deriva de que, a consideración de esta autoridad, imponer una sanción menor no produciría, de manera efectiva, un efecto inhibitorio de la conducta analizada; lo anterior, si se toma en cuenta, como ya se dijo, que la infracción cometida tuvo como consecuencia la transgresión a derechos básicos contenidos en la propia Constitución Política Federal que deben ser observados, tanto por los partidos políticos, sus dirigentes, militantes y afiliados, como por cualquier persona. De ahí la importancia de que esta autoridad concluya en acciones efectivas para contrarrestar los efectos perniciosos que se ocasionaron a partir de los hechos analizados en la presente Resolución.

**e) Condiciones socioeconómicas de los sujetos infractores.**

- **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal**, representante del entonces PRI ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa

Para tal efecto, se solicitó al Titular de la Unidad de Fiscalización de este Instituto que realizara las acciones correspondientes con el Servicio de Administración Tributaria, al propio **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal**, así como al PRI, con la intención de que aportaran elementos tendentes a determinar la capacidad económica de este.

En ese sentido, de la información aportada por la Unidad Técnica de Fiscalización no se pudieron allegar elementos para determinar la capacidad económica, y el denunciado no aportó mayores elementos. Sin embargo, el PRI informó que dicho funcionario partidista tiene un ingreso mensual de \$31,500.00 (treinta y un mil quinientos pesos 00/100 m.n.)

En ese sentido, tomando en consideración que el monto de la sanción impuesta en el presente procedimiento se fijó en la suma de **10,956.00 (diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, es decir, el **34.78 % (treinta y cuatro punto setenta y ocho por ciento)** de su ingreso mensual, esta autoridad considera conveniente que la sanción impuesta sea pagada durante tres exhibiciones mensuales, a razón de **\$3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 95/100 m. n.)**, lo que representa el **11.59% (once punto cincuenta y nueve por ciento)** de su ingreso mensual, lo cual, desde la perspectiva de esta autoridad no resulta excesivo.

- **César Manuel Ochoa Salazar**, otrora Secretario de Organización Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa

**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

Para tal efecto, se solicitó al Titular de la Unidad de Fiscalización de este Instituto que realizara las acciones correspondientes con el Servicio de Administración Tributaria, y al propio **César Manuel Ochoa Salazar**, con la intención de que aportaran elementos tendentes a determinar la capacidad económica de este.

En ese sentido, de la información aportada por la Unidad Técnica de Fiscalización no se pudieron allegar elementos para determinar la capacidad económica, y el denunciado no aportó mayores elementos. Sin embargo, la UTCE localizó que el referido ciudadano presta sus servicios como Director de Desarrollo Urbano y Ecología en el Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, reportado con un ingreso mensual total de \$42,461.30 (cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y un pesos 30/100 m.n.)

En ese sentido, tomando en consideración que el monto de la sanción impuesta en el presente procedimiento se fijó en la suma de **\$10,956.00 (diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, es decir, el **25.80 % (veinticinco punto ochenta por ciento)** de su ingreso mensual, esta autoridad considera conveniente que la sanción impuesta sea pagada durante tres exhibiciones mensuales, a razón de **\$3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 95/100 m. n.)**, lo que representa el **8.60% (ocho punto sesenta por ciento)** de su ingreso mensual, lo cual, desde la perspectiva de esta autoridad no resulta excesivo.

- **Teresa de Jesús Nieto Ríos** Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa

Para tal efecto, se solicitó al Titular de la Unidad de Fiscalización de este Instituto que realizara las acciones correspondientes con el Servicio de Administración Tributaria, y la propia **Teresa de Jesús Nieto Ríos**, con la intención de que aportaran elementos tendentes a determinar la capacidad económica de esta.

En ese sentido, de la información aportada por la Unidad Técnica de Fiscalización se advirtió que la referida funcionaria partidista tuvo un ingreso bruto anual en el ejercicio dos mil dieciséis, por la cantidad de \$657,973.00 (seiscientos cincuenta y siete mil novecientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.), esto es \$54,831.08 (cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y un pesos 08/100 m.n.) mensuales.

En ese sentido, tomando en consideración que el monto de la sanción impuesta en el presente procedimiento se fijó en la suma de **\$10,956.00 (diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, es decir, el 19.98 % (diecinueve punto noventa y ocho por ciento) de su ingreso mensual, esta autoridad considera conveniente que la sanción impuesta sea pagada durante tres exhibiciones mensuales, a razón de **\$3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m. n.)**, lo que representa el **6.9% (seis punto nueve por ciento)** de su ingreso mensual, lo cual, desde la perspectiva de esta autoridad no resulta excesivo.

**f) Impacto en las actividades del sujeto infractor.**

- 1. Jesús Gonzalo Estrada Villarreal**, representante del PRI ante el Instituto Electoral de Sinaloa.

Como se analizó en el apartado anterior, la sanción impuesta a **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal** representa el **11.59% (once punto cincuenta y nueve por ciento)** de su ingreso mensual, por lo cual, no resulta gravosa para el sancionado y tampoco afecta el desarrollo de sus actividades.

- 2. César Manuel Ochoa Salazar**, otrora Secretario de Organización Electoral del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa

Como se analizó en el apartado anterior, la sanción impuesta a **César Manuel Ochoa Salazar** representa el **8.60% (ocho punto sesenta por ciento)** de sus ingresos mensuales, por lo cual no resulta gravosa para el sancionado y tampoco afecta el desarrollo de sus actividades.

- 3. Teresa de Jesús Nieto Ríos** Directora de Informática del Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa

Como se analizó en el apartado anterior, la sanción impuesta a **Teresa de Jesús Nieto Ríos** representa el **6.9% (seis punto nueve por ciento)** de sus ingresos mensuales, por lo cual no resulta gravosa para la sancionada y tampoco afecta el desarrollo de sus actividades.

**CUARTO. FORMA DE PAGO.** Para el caso de **César Manuel Ochoa Salazar, Teresa de Jesús Nieto Ríos y Jesús Gonzalo Estrada Villarreal** en términos del artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE, el monto de la sanción económica una vez que la presente Resolución quede firme, deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, mediante el esquema electrónico e5cinco en las instituciones de crédito autorizadas a través de sus portales de internet o de sus ventanillas bancarias con la hoja de ayuda pre-llenada que se acompaña a esta resolución, misma que también se puede consultar en la liga <http://www.ife.org.mx/documentos/UF/e5cinco/index-e5cinco.htm/>, apercibido que en caso de incumplir con su obligación el Instituto dará vista a las autoridades hacendarias a efecto de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable, en términos de lo dispuesto en el artículo 458, párrafo 7, de la LGIPE.

**QUINTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.** A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente

## **R E S O L U C I Ó N**

**PRIMERO.** Se **SOBRESEE** el procedimiento sancionador ordinario, instaurado en contra de **Ogla Rita Bojórquez Gámez**, en términos de lo señalado en el Considerando **SEGUNDO** de esta Resolución.

**SEGUNDO.** Es **FUNDADO** el presente procedimiento en contra del **Partido Revolucionario Institucional**, en términos de lo establecido en el **apartado 5.4**, correspondiente al Considerando **TERCERO** de la presente Resolución.

**TERCERO.** Se impone al **Partido Revolucionario Institucional** una sanción consistente en la reducción del **4% (cuatro por ciento)** de la ministración anual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, por el equivalente a la cantidad de **\$43,795,866.96 (cuarenta y tres millones setecientos noventa y cinco mil ochocientos sesenta y seis pesos 96/100 M.N.)**, la cual se descontará en **seis mensualidades** de **\$7,299,311.16 (siete millones doscientos noventa y nueve mil trescientos once pesos 16/100 m. n.)**, a partir del mes siguiente a aquel en

que haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta Resolución o, si es recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.

**CUARTO.** Es **FUNDADO** el presente procedimiento es contra de **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal**, en términos de lo establecido en el apartado 5.5, inciso b), correspondiente al Considerando TERCERO de la presente Resolución.

**QUINTO.** Se impone a **Jesús Gonzalo Estrada Villarreal** una sanción consistente en una multa de 150 UMAS, equivalente a la cantidad de **\$10,956.00 (diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, la cual deberá ser pagada en tres exhibiciones mensuales de **\$3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.)** pagaderos a partir del mes siguiente a aquel en que haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta Resolución o, si es recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.

**SEXTO.** Es **FUNDADO** el presente procedimiento es contra de **César Manuel Ochoa Salazar**, en términos de lo establecido en el apartado 5.5, inciso a), correspondiente al Considerando TERCERO de la presente Resolución.

**SÉPTIMO.** Se impone a **César Manuel Ochoa Salazar** una sanción consistente en una multa de 150 UMAS, equivalente a la cantidad de **\$10,956.00 (diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, la cual deberá ser pagada en tres exhibiciones mensuales de **\$3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.)** pagaderos a partir del mes siguiente a aquel en que haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta Resolución o, si es recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.

**OCTAVO.** Es **FUNDADO** el presente procedimiento es contra de **Teresa de Jesús Nieto Ríos**, en términos de lo establecido en el apartado 5.5, inciso e), correspondiente al Considerando TERCERO de la presente Resolución.

**NOVENO.** Se impone a **Teresa de Jesús Nieto Ríos** una sanción consistente en una multa de 150 UMAS, equivalente a la cantidad de **\$10,956.00 (diez mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, la cual deberá ser pagada en tres exhibiciones mensuales de **\$3,652.00 (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 95/100 M.N.)** pagaderos a partir del mes siguiente a aquel en que haya finalizado el plazo para interponer recurso en contra de esta Resolución o, si es

recurrida, del mes siguiente a aquel en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia por la que resolviera el recurso.

**DÉCIMO.** Es **INFUNDADO** el presente procedimiento es contra de **José Mora León**, en términos de lo establecido en el apartado 5.5, inciso c), correspondiente al Considerando TERCERO de la presente Resolución.

**DÉCIMO PRIMERO.** Es **INFUNDADO** el presente procedimiento es contra de **José Alberto Salas Beltrán**, en términos de lo establecido en el apartado 5.5, inciso d), correspondiente al Considerando TERCERO de la presente Resolución.

**DÉCIMO SEGUNDO. FORMA DE PAGO DE LA SANCIÓN.** En términos del artículo 458, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral mediante el esquema electrónico e5cinco en las instituciones de crédito autorizadas a través de sus portales de internet o de sus ventanillas bancarias con la hoja de ayuda prellenada que se acompaña a esta resolución, misma que también se puede consultar en la liga <http://www.ife.org.mx/documentos/UF/e5cinco/index-e5cinco.htm>.

**DÉCIMO TERCERO.** La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Notifíquese a las partes la presente Resolución en términos de ley.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 de marzo de 2018, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.



**CONSEJO GENERAL**  
**EXP. UT/SCG/Q/CG/24/2016**

Se aprobó en lo particular el Punto Resolutivo Tercero, por lo que hace al porcentaje de sanción, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González.

Se aprobó en lo particular el Punto Resolutivo Tercero, por lo que se refiere a descontar la sanción en 6 mensualidades, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado,, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA**